

CRÓNICA LABORAL
DOCUMENTADA

Por: Josué Bonilla García, Gustavo García Chacón y Luis Lauriño Torrealba

Siglas de los periódicos de Caracas utilizados: EU, El Universal; EUD, El Universal Digital; EN, El Nacional; ENOL, El Nacional On Line; UN, Últimas Noticias; EG, El Globo; NP, Nuevo País; LR, La Religión; EM, El Mundo; R, La Razón; D, Diario 2001.

Como es tradición en la Revista, continuamos la Crónica Laboral documentada, a partir de julio del año 2002, hasta mediados del año 2003, distribuidos en dos semestres: julio de 2002 a diciembre de 2002 y enero de 2003 a junio de 2003.

SEMESTRE

Julio de 2002 a Diciembre de 2002

Julio de 2002

El escenario de este primer mes de la crónica relatada en este número de la revista no podía ser diferente, dados los acontecimientos que se venían desarrollando desde algún tiempo. La característica fundamental era la gran crisis económica que agobiaba al país y que mantenía latente la posibilidad de realización de un paro cívico nacional.

PARO NACIONAL LATENTE

El camino a un paro nacional

Desde el mes de junio, cuyos acontecimientos se relataron en el número anterior de esta revista, la CTV y Fedecámaras se encontraban analizando la posibilidad de convocar un paro nacional. (EUD, 2-7-2002, Gustavo Méndez y Mariela León, Nacional y Política). Aún cuando reinaba una atmósfera favorable para la convocatoria a un paro, la CTV se mostraba prudente en la definición de la fecha, pues existía alguna inseguridad acerca de una auténtica unidad obrera nacional que garantizara la participación en la huelga. (EUD, 3-7-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). El vicepresidente, José Vicente Rangel, declaró que el gobierno no recurriría a medidas de emergencia si la CTV convocaba a una huelga general. (EUD, 13-7-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

El 15 de julio se celebró una reunión entre la Coordinadora Democrática y la directiva de la CTV para tomar una decisión acerca del paro y llegaron a la conclusión de iniciar un proceso de consultas por sectores económicos y entidades.

(EUD, 16-7-2002, Gustavo Méndez y Patricia Ventura, Nacional y Política). Los resultados de la consulta no fueron favorables al paro, opción que quedó descartada. En una reunión entre partidos políticos, CTV y Fedecámaras se acordó trabajar en una agenda de movilización social que respondiera a las necesidades de las regiones y de los sindicatos. (EUD, 17-7-2002, Elvia Gómez, Nacional y Política). El gobierno ya había tomado sus previsiones, pues la Defensoría del Pueblo había girado instrucciones a todas las defensorías delegadas estatales para implementar un operativo de emergencia en caso de ser convocada una huelga general indefinida. (EUD, 17-7-2002, Nacional y Política).

Mientras se barajaban todas las opciones relacionadas a la convocatoria a un paro nacional, un grupo de chavistas permanecían apostados a las puertas de la sede de la CTV. Manuel Cova, directivo de esta entidad, ya había anunciado la posibilidad de utilizar el comité de seguridad de la CTV si los manifestantes mostraban signos de violencia. (EUD, 17-7-2002, Nacional y Política). Finalmente, el 18 de julio, se producía una trifulca entre chavistas y opositores que concluyó con el desalojo involuntario de la seccional de la Esquina Caliente de los Trabajadores luego que grupos encontrados se enfrentaran a las puertas de la CTV. Cinco chavistas resultaron lesionados y el tarantín que habían colocado frente a la central de trabajadores quedó destruido a raíz de la pelea. (EUD, 18-7-2002, Gustavo Rodríguez, Ciudad).

Ortega era directo y disparaba sin vacilar: “aquí el único asesino es Chávez y si no quiere diálogo tendrá conflicto”... Era impredecible lo que podía ocurrir. (EUD, 28-7-2002, Nacional y Política).

La marcha del 11J

Mientras se definían los detalles de la convocatoria a un paro, se había fijado una marcha que iría a Miraflores el 11 de julio, la cual tendría como objeto la solicitud de la renuncia del Presidente Chávez, aunque dicha petición estaría acompañada de una serie de reclamos asociados a los sucesos del 11 de abril, las deudas contractuales del Ejecutivo y los niveles de desempleo, entre otros. (EUD, 2-7-2002, Gustavo Méndez y Mariela León, Nacional y Política). Se había escogido esta fecha porque se cumplían tres meses de los trágicos sucesos del 11 de abril. En la manifestación participarían partidos políticos, gremios y organizaciones civiles, quienes mantenían el lema “prohibido olvidar”. La marcha partiría a las 10:00 am desde el elevado de la avenida Libertador, en sentido Este-Oeste. No podía faltar la organización de una contramarcha, en esta ocasión por parte de Los Tupamaros, que partirían desde el 23 de enero y tendrían a Miraflores como destino. (EUD, 8-7-2002, Vanessa Guillén Drija, Nacional y Política).

Algunos se planteaban altas expectativas frente a la marcha, como Manuel Cova, secretario general de la CTV, quien opinaba que la manifestación debía propiciar la renuncia del presidente Chávez y “abonar el camino para la resolución democrática de la crisis nacional”. Las palabras textuales de Cova fueron: “Si más de un millón de venezolanos camina, Chávez debe reconocer esa protesta y dejar el mando. En

otros países las marchas han obligado la renuncia presidencial”. (EUD, 11-7-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Finalmente, llegada la fecha, se producían algunos hechos violentos. Un grupo de motorizados rodeó el edificio de la CTV y lanzó piedras a la entrada y a algunos miembros de Acción Democrática que participaron en la marcha. (EUD, 12-7-2002, Victor Salmerón, Ciudad).

Reunión con Jimmy Carter

Para ese momento estaba fijada una reunión de los representantes de la CTV con el ex presidente Jimmy Carter, la cual se realizaría el día 7 de este mes. Sin embargo, no gravitaba ninguna expectativa ante dicha reunión y según palabras de Alfredo Ramos, vocero de la CTV, “debía ser la OEA el organismo que sirviera de mediador en la irreversible crisis política que vivía el país. Porque además de intervenir podría aportar respuestas concretas para hacerle frente a la crisis nacional”. (EUD, 4-7-2002, Nacional y Política).

Sin embargo, los representantes de los partidos de oposición y otras organizaciones civiles se quedaron con la “boca abierta”, pues en aquella sesión la propuesta del ex presidente Carter fue la de invitar a una reunión el día 9 de este mes con el presidente Chávez para discutir sobre la crisis política del país. A dicha reunión estarían invitados los partidos de oposición, las organizaciones de la sociedad civil (ONG), representantes de los medios de comunicación, de la CTV y Fedecámaras. Algunos aceptaron inmediatamente, mientras que otros decidieron esperar para consultarlo en cada una de sus organizaciones. (EUD, 9-7-2002, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política). Más tarde el mismo día, los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales y medios de comunicación resolvían declinar la invitación ese día. Felipe Mujica, presidente del Movimiento al Socialismo (fracción opositora), actuó como vocero de la reunión y explicó que no podían aceptar la convocatoria, pues no se había acordado previamente una agenda concertada entre las partes. Como condiciones para acceder a la reunión, la oposición exigía que designara previamente una comisión de alto nivel integrada por representantes de ambos bandos, además de la necesidad de que la mediación no sólo fuera realizada por el ex mandatario Carter sino formalmente por la OEA. Finalmente, los opositores mostraron preferencia por realizar la reunión luego del 11 de julio, fecha para la cual ya estaba pautada una marcha. (EUD, 9-7-2002, Eugenio Martínez, Nacional y Política).

Legitimación de la CTV

“La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abrió las puertas para reconocer a Carlos Ortega y a los demás miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), como los legítimos directivos de la central obrera. Así lo dejaba entrever la decisión adoptada por esta instancia, la cual declaró sin lugar el recurso interpuesto por Bladimiro Blanco, en contra de la decisión emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual validó los

procesos electorales realizados por los 50 sindicatos que constituyen la Fedepetrol, y en los que resultó ganador Rafael Rosales. La Sala Electoral fundamentó su fallo en el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación – también conocido como Convenio número 87- de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece que la libertad sindical es un derecho humano”. (EUD, 26-7-2003, Juan Francisco Alonso, Nacional y Político).

Sin embargo, Venezuela continuaba en la lista de naciones que transgredían los derechos laborales. La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT había incluido a Venezuela junto a Bielorrusia, Birmania, Colombia, Etiopía y Sudán en el “Párrafo Especial” en su informe 2001, distinción nada meritoria que consistía en “un procedimiento reservado para violaciones continuadas y graves de los derechos laborales, incluyendo derechos contenidos en normas fundamentales del trabajo”. (EUD, 30-7-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

¿SE LOGRARÁ EL CONSENSO NECESARIO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL?

La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, encargada de realizar la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Social, efectuaba la discusión de la propuesta con diversos sectores, siendo los primeros consultados Fedecámaras y la CTV. Los empresarios y trabajadores coincidían en que el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Social que realizaba la Asamblea Nacional tenía que darles la opción a los empleados de escoger la administración de las cuentas de capitalización individual que se preveían en el régimen de pensiones. (EUD, 3-7-2002, Mayela Armas H., Economía). Los empresarios insistían en que hubiera una mayor apertura al sector privado en la Ley Orgánica de Seguridad Social (EUD, 5-7-2002, Economía).

Todavía se debatía sobre los aspectos más básicos de la Ley. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rafael Simón Jiménez, insistía que la reforma a la Ley de Seguridad Social tenía que aprobarse antes de septiembre y debía incluir la participación del sector público y privado. (EUD, 13-7-2002, Economía). En todo caso, el retraso en los cambios a las leyes de seguridad social mantenían en crisis al sector salud. Cada retraso que se producía debilitaba más a la estructura actual. Los servicios de salud no garantizaban su efectividad, pues los recursos que se le asignaban ya no eran suficientes y las pensiones representaban una mayor carga fiscal. (EUD, 21-7-2002, Mayela Armas H., Economía). El consenso era fundamental para conformar una propuesta. (EUD, 21-7-2002, Economía).

Según el economista Miguel Rodríguez, con un desempleo ubicado alrededor de un 20% y un 55% de población económicamente activa laborando en el sector informal, además del cuadro de desaceleración económica, era imposible poner en marcha un régimen de seguridad social. (EUD, 5-10-2002, Economía).

EL VIRUS DEL DESEMPLEO

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el mes de abril, 1.816.289 personas formaban parte del grupo de desocupados en nuestro país, lo que representaba un 15,9%. Por otro lado, la tasa de informalidad se ubicaba en 51,8% para ese mes. (EUD, 2-7-2002, Raquel Barreiro, Economía). Datanálisis ubicaba el desempleo en 17,8% y la informalidad en 54%. (EUD, 3-7-2002, Raquel Barreiro C., Economía). Especialmente resultaba preocupante el número de desempleados en el sector construcción, pues según las cifras del INE se ubicaba en 27,5% al cierre del primer trimestre del año. (EUD, 6-7-2002, Economía).

El gobierno trataba de hacer frente al problema desde diversos flancos. El Ministerio de Producción y Comercio había decidido destinar 20 millardos de bolívares para la generación de 50 mil empleos durante el próximo año. (EUD, 2-7-2002, Economía). Por otro lado, el Distrito Metropolitano crearía una Feria de Empleo que permitiría al gobierno de la ciudad ayudar a insertar al mercado laboral a los trabajadores de la Gran Caracas. El servicio contaría con un sistema de información que contendría una base de datos con un perfil curricular de cada desempleado, así como las necesidades de mano de obra de las empresas, a fin de cruzar la información y detectar las oportunidades de empleo para los que se suscribieran al servicio. (EUD, 8-7-2002, Ciudad).

Además de esto, el gobierno extendía nuevamente la inamovilidad laboral por 90 días adicionales, con lo que se alcanzaban 180 días consecutivos de prohibición de despidos en nuestro país. No obstante, en esta prórroga los términos no eran idénticos a las ediciones anteriores, flexibilizándose un poco la medida, pues en el artículo 3 del decreto se establecía claramente una protección donde se prohibía el despido, la desmejora, el traslado, sin causa justa; pero igualmente se preveía “la posibilidad de convenios o acuerdos entre patronos y trabajadores para lograr la reducción de personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva establecido para tal fin”. (EUD, 27-7-2002, Mariela León y Patricia Ventura Nicolás, Economía). Sin embargo, esta medida no era suficiente para detener el incremento de las cifras de desempleo. (EUD, 27-7-2002, Economía). Por otro lado, los empresarios rechazaban de plano la medida, alegando carecer del flujo de caja necesario para cumplir con sus compromisos. (EUD, 29-7-2002, Marianna Parraga, Economía). El propio Ramón Rosales, titular del despacho de la producción y el comercio, manifestó dudas sobre los beneficios de la prórroga, indicando que “creaba incertidumbre y mayor dificultad al sector productivo”. (EUD, 30-7-2002, Mariela León y Patricia Ventura Nicolás, Economía).

PARÁLISIS ECONÓMICA: HABLAN LOS EMPRESARIOS

Para Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, los efectos de las medidas económicas todavía no comenzaban a sentirse y sería a finales de este mes cuando el poder adquisitivo del venezolano se vería realmente disminuido. Algunas de las

medidas económicas que preveía el gobierno eran el aumento a 16% de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, la reducción de las exenciones y la elevación a 1% de la tasa del Impuesto al Débito Bancario, así como la reducción del gasto público, entre otras. (EUD, 9-7-2002, Economía). La opinión de Carlos Fernández era muy distinta a la del mandatario nacional, que anunciaba un proceso de reactivación económica. (EUD, 16-7-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía). El gobierno acudía a la colocación de letras del tesoro y bonos de la deuda pública nacional, solución que para algunos sólo lograba “correr la arruga”. (EUD, 16-7-2002, Economía).

Nos encontrábamos frente a un bolívar realmente disminuido, pues se había devaluado en un 76% desde enero hasta la fecha. Los efectos devastadores de los hechos políticos de abril se habían sumado a una crisis económica estructural, para configurar un “cuadro clínico de recesión”. (EUD, 1-7-2002, Clodovaldo Hernández, Economía).

Según informaciones del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) la canasta básica se había incrementado en 19.966 bolívares, lo que equivalía a un 2,6%. (EUD, 13-7-2002, Economía).

En el estado Aragua la situación era alarmante, pues 873 empresas (medianas y pequeñas), desde el año 1997 hasta la fecha, habían cerrado sus puertas. (EUD, 15-7-2002, Mariela León, Economía). En el sector textil, según la Cámara de Industriales de este estado, sólo quedaban 6 empresas de las 28 existentes para el año 1998. (EUD, 15-7-2002, Economía).

La Cámara Regional del Estado Lara también efectuaba su diagnóstico y según los resultados de una pequeña encuesta realizada durante este mes, el 74,9% de los industriales de este estado no preveía mejoras. (EUD, 17-7-2002, Mariela León, Economía).

Zulia estaba declarada en emergencia industrial. Se estimaba que siete de cada diez habitantes de ese estado no tenían un empleo formal, que cerraban 8,53 empresas a la semana y que el 80% de la industria manufacturera había cerrado sus puertas. (EUD, 18-7-2002, Mónica Castro, Economía).

Algunos se mostraban esperanzados, como el caso de Miguel Pérez Abad, presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Industria (Fedeindustria), que estimaba que al final de este año la pequeña y mediana industria lograrían una recuperación. (EUD, 16-7-2002, Economía).

Sin embargo, el índice del BCV registraba la mayor caída desde 1997... la producción industrial estaba en barrena. (EUD, 22-7-2002, Victor Salmerón, Economía).

La recesión inclusive evaporaba las ventas de buhoneros y microempresarios. El Banco del Pueblo y Banguente habían disminuido la entrega de créditos ante la paralización y aumento de la morosidad. (EUD, 1-7-2002, Victor Salmerón, Economía). Según cifras del Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas, los índices de fracaso de la PYME se potenciaban. En el primer año, el 50% de las

nuevas pequeñas y medianas empresas fracasaban y en 5 años, 80% de estos nuevos negocios quebraban. (EUD, 15-7-2002, Economía).

Estaba previsto que para finales de este mes se firmara un pacto para reactivar a la PYME. El acto se realizaría en Miraflores con la asistencia de los directivos de Fedehindustria, Conindustria y el resto de los actores pertenecientes a este importante sector. (EUD, 12-7-2002, Economía).

CONFLICTOS Y MÁS CONFLICTOS: CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONÓMICA DEL PAÍS

A continuación se presentan sólo algunos de los más importantes conflictos que se suscitaban en diversos sectores de la economía venezolana. En realidad, conflictos similares a estos surgían constantemente como consecuencia de la aguda crisis económica que vivía el país.

En el sector educación

La directiva de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) se mostraba preocupada ante la carencia de recursos para el pago de salarios de maestros y empleados. (EUD, 2-7-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

La AVEC esperaba que se cumplieran los cronogramas de pago que se elaboraban con el Ejecutivo. (EUD, 4-7-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Sin embargo, un tema más importante tomaba la palestra en relación con el sector educativo, pues el Ministerio de Educación había propuesto un nuevo calendario escolar, que diversos sectores habían calificado como una medida irresponsable e improvisada. (EUD, 3-7-2002, Gustavo Méndez, Ciudad). Inclusive los colegios privados se habían declarado en “desobediencia civil” ante la posible implementación del nuevo calendario escolar. (EUD, 8-7-2002, Jeanette Herrera, Ciudad). El magisterio y la sociedad civil calificaban de inconsulta y carente de soportes técnicos a la propuesta del Ministro Aristóbulo Istúriz. (EUD, 10-7-2002, Gustavo Méndez, Ciudad).

En la industria automotriz

La industria automotriz no escapaba a la crisis económica que agobiaba al país. Según informaciones suministradas por Manuel Cova, miembro de la junta directiva de la CTV, en la industria automotriz se habían perdido un 15% de los puestos de trabajo, lo que representaba unas 14 mil plazas. (EUD, 17-7-2002, Economía). De hecho, representantes de la industria habían anunciado el despido de 5 mil trabajadores más, de persistir la importación de vehículos y autopartes, que atentaban contra la producción nacional y el empleo. (EUD, 26-7-2002, Economía).

En la industria de cemento

El 2 de julio se cumplían 16 días de la huelga que había comenzado en Cemex con motivo de la discusión del contrato colectivo. La última propuesta de la empresa había sido rechazada por los trabajadores, por considerar que estaba por debajo de sus peticiones y que inclusive desmejoraba la oferta que inicialmente fue presentada en la Inspectoría del Trabajo. (EUD, 2-7-2002, Economía).

Fue sólo hasta finales del mes de julio cuando se logró la firma del contrato, luego de lo que se calificó como un extenso período de negociación. El director de la Inspectoría del Trabajo en Puerto La Cruz, Ricardo Dorado, reveló a Vempres que el contrato beneficiaría a 535 trabajadores por un monto de 3 millardos de bolívares. Los empleados que pasaran a retiro disfrutarían de una póliza de HCM por 3,5 millones de bolívares. (EUD, 29-7-2002, Economía).

En la industria textil

Los ex trabajadores de la empresa Sudamtex, que el 16 de mayo había anunciado el cierre de operaciones, se encontraban en discusiones con la Subcomisión de Empleo del Ministerio del Trabajo, para el diseño de un plan que contribuyera a la reactivación de las operaciones de esta empresa textil. El enfoque principal del plan era la cogestión de esfuerzos. (EUD, 2-7-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

En realidad todo el sector textil trabajaba a media máquina o adelantaba las vacaciones de sus trabajadores. Se trataba de una crisis realmente difícil de resolver. (EUD, 10-7-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

Las empresas de aseo

Los obreros del aseo amenazaban con paralizar el servicio. Algunos concejales de Libertador y estos trabajadores se reunieron el 1° de julio para buscar una solución al problema laboral que se venía denunciando. El encuentro, que se había iniciado a las 11 de la mañana, sólo duró 45 minutos pues no tardaron en llegar los insultos entre el dirigente sindical Héctor Sánchez y los concejales Carlos Herrera y Oscar Arapé. Mientras estos personajes se ofendían, los trabajadores, que estaban en el palco de invitados, les gritaban a los concejales: “corruptos, muertos de hambre”. El problema se debía en gran parte a la modificación de la ordenanza de Aseo Urbano, que según el dirigente sindical pretendía eliminar la concesión a las empresas recolectoras para contratar el servicio a microempresas que serían manejadas por los mismos concejales, provocando con esto despidos masivos. (EUD, 2-7-2002, Migdalis Cañizales V., Ciudad).

En el sector químico

El 85% de las empresas participantes en la Encuesta Coyuntura realizada por la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), reportó una caída del 27% en sus ventas, equivalente a alrededor de 300 millones de dólares, en el primer semestre del año. (EUD, 3-7-2002, Mariela León, Economía).

En Cantv

El 17 de julio era suscrito el contrato colectivo 2002-2004 de los trabajadores de la Cantv. El contrato, según un comunicado de prensa del Ministerio del Trabajo, tenía un costo estimado de 168,8 millardos de bolívares y beneficiaría a 3.427 trabajadores de la telefónica. Este proceso de negociación era presentado como un ejemplo de la forma de resolver los conflictos a pesar de la crisis. (EUD, 18-7-2002, Economía).

Sin embargo, por segunda vez en tres días, los jubilados de la Cantv volvían, el 19 de julio, a trancar el paso por la avenida Libertador por más de dos horas. La protesta obedecía a la situación que los jubilados mantenían frente a la casa matriz, pues recibían jubilaciones irrisorias que en algunos casos alcanzaban tan sólo los 15 mil bolívares mensuales. (EUD, 19-7-2002, Ciudad). Sin embargo, según instrucciones del Juzgado Undécimo en lo Civil, Mercantil y de Tránsito del Área Metropolitana, los pensionados debían desalojar las instalaciones de la empresa, donde se encontraban apostados desde hace algún tiempo. Según una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, los pensionados debían esperar por la reforma en el sistema de seguridad social. (EUD, 20-7-2002, Economía).

En el Metro

En el metro se presentaba un conflicto entre Sitrameca y Fedetransporte, que ocasionó que un grupo de miembros de la primera organización impidiera el 18 de julio la salida de trenes desde Propatria. (EUD, 19-7-2002, Marisol Decarli R., Ciudad).

En el sector público

El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Franklin Rondón, exigió al Ejecutivo Nacional la modificación del artículo cinco del decreto de inamovilidad laboral, que excluía a los funcionarios al servicio del Estado de esa protección. El apartado en cuestión los exceptuaba puesto que gozan de estabilidad laboral por ser funcionarios de carrera, pero en la praxis parecía que la norma realmente no aplicaba. (EUD, 31-7-2002, Gustavo Méndez, Economía).

Por otro lado, el 15 de este mes, los Bomberos del Este paralizaron los servicios de emergencia como medida de presión para que les fueran canceladas las reivindicaciones laborales que les adeudaban. (EUD, 16-7-2002, María Yolanda García, Ciudad).

En el sector transporte

El Sindicato de Profesionales de Vehículos Pesados, que agremia a los conductores de transporte de combustible del Distrito Capital y Estado Miranda, introdujo un pliego conflictivo que podría generar la paralización de actividades a partir del 8 de julio. Según Víctor Peña, secretario general del sindicato, tenían 16 meses negociando el contrato colectivo y desde el mes de febrero no lograban avanzar en ninguna cláusula económica. (EUD, 4-7-2002, Economía).

Por otro lado, el 9 de julio más de cien sindicatos de transporte en Zulia, adscritos a la Central Única de Trabajadores, desarrollaron una paralización del servicio, como parte de una campaña de denuncia vinculada con la creciente situación de inseguridad. (EUD, 9-7-2002, Mónica Castro, Nacional y Política). Aproximadamente un 40% de los transportistas se unió a la protesta. (EUD, 10-7-2002, Mónica Castro, Nacional y Política). Las autoridades municipales de Maracaibo ya habían diseñado un plan de contingencia ante esta posibilidad. (EUD, 9-7-2002, Nacional y Política).

En el sector petrolero

Los trabajadores petroleros del Zulia, quienes el 4 de julio habían efectuado una simbólica toma en la plaza Bolívar, advirtieron estar dispuestos a paralizar sus labores si no se reconsideraban ciertos aspectos contractuales y no se revisaba la decisión tomada por la Ministra del Trabajo de “escoger por sorteo” a las personas que laborarían en la estatal petrolera. (EUD, 5-7-2002, Mónica Castro, Economía).

En el sector médico

Los médicos del área metropolitana mantenían una política de trancar vías para obtener la atención de los representantes del gobierno. El 4 de julio trancaron la autopista Francisco Fajardo por espacio de una hora aproximadamente. Las manifestaciones estaban ocasionadas por dos aspectos fundamentales, el reclamo de sus reivindicaciones y la dotación adecuada de hospitales y ambulatorios. (EUD, 5-7-2002, Ciudad).

Agosto de 2002

Una aguda crisis económica, gran cantidad de conflictos de carácter laboral e intentos infructuosos de diálogo entre el gobierno y la oposición eran las características fundamentales de este mes.

SE AGUDIZA LA CRISIS ECONÓMICA

El gasto social para el año 2002 se ubicaba en un 8,5% del PIB. Los tres años de gobierno del presidente Chávez eran los de mayor crecimiento del gasto social, pero esto no contribuía a la superación del problema de baja cobertura de los servicios. (EUD, 5-8-2002, Mayela Armas H., Economía).

A esto se sumaba la caída del poder adquisitivo, que golpeaba a todos los estratos de la población por igual. La inflación se había ido carcomiendo el poder adquisitivo de los venezolanos, sin importar la clase social o el nivel de ingresos. De diciembre de 2001 a julio de 2002, la inflación acumulada se ubicaba en 16,9% y el aumento salarial había sido de un 20%, de modo que la inflación se había devorado

el 85% del incremento recibido. (EUD, 12-8-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

Por otro lado, según Danilo Pérez Monagas, diputado de Proyecto Venezuela, la crisis económica y social había generado una terrible depresión en el sector comercial e industrial del país. Según el diputado, en el eje Aragua, Carabobo, Lara y Zulia más de dos mil empresas habían cerrado sus puertas. (EUD, 5-8-2002, Economía). Esta situación despertaba el descontento de gran cantidad de empresarios y trabajadores. Por ejemplo, el 29 de este mes más de 50.000 personas participaron en una marcha en el Estado Aragua, que llevaba como consigna “la reivindicación económica”. (EUD, 27-8-2002, Alessandra Perdomo).

La industria farmacéutica sufría especialmente los azotes de la crisis económica, por lo que representantes del gobierno nacional y del sector empresarial firmaron un acuerdo para la reactivación de este sector, mediante el diseño de planes de empleo. (EUD, 6-8-2002, Economía).

El gobierno buscaba salidas a la situación del país. El 8 de agosto, en horas de la noche, el presidente Chávez anunciaba un grupo de medidas destinadas a detener el quiebre del parque industrial y recuperar los niveles de productividad y empleo. Se trataba del rescate de la producción nacional, las compras nacionales y el incentivo del empleo productivo, mediante el desarrollo de una serie de acciones concretas. (EUD, 9-8-2002, Mariela León, Economía). Según la opinión de Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, las medidas no eran suficientes y la situación seguiría empeorando. (EUD, 14-8-2002, Economía).

Especialmente parecía inviable el plan de compras diseñado por el gobierno, pues se había anunciado que los pagos se efectuarían con bonos de la deuda, lo que ponía en jaque la iniciativa, entre otras cosas porque los sueldos y la materia prima no podían ser canceladas con dichos bonos. (EUD, 24-8-2002, Víctor Salmerón, Economía).

También se intentaba mejorar la situación en otros sectores. El Ministerio de Agricultura y Tierras había diseñado un “Plan de Generación de Empleo Productivo” en el que se invertirían 70 millardos de bolívares, que permitiría la entrega oportuna de créditos a productores, lo que se estimaba generaría 69 mil empleos en el sector agrícola. (EUD, 16-8-2002, Raquel Barreiro C., Economía).

Por otro lado, para el mes de septiembre se esperaba el inicio de un “Programa de Apoyo al Plan Extraordinario para la Capacitación de la Juventud Desocupada”, que contaría con la participación del Instituto de Capacitación Profesional de la Iglesia (Invecapi), la Asociación de Promoción de la Educación Popular (Apep), el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince) y la Unión Europea, que aportaría el 50% de inversión de 15 millones de euros. Se capacitarían 60 mil menores de 25 años de los sectores más desfavorecidos del país. (UN, 19-8-2002, Carolina Páez).

Sin embargo, para Carlos Fernández la reactivación económica era imposible, pues “la economía se encontraba secuestrada por la política. (UN, 20-8-2002, Carmen Isabel Maracara).

LAS PENAS CON PAN SON MENOS

Conflictos en el sector petrolero

Durante el mes de julio, en Petróleos de Venezuela se había otorgado un aumento salarial correspondiente a la cláusula de meritocracia incluida en la contratación colectiva. El incremento fue lineal, de un 2,5% para todos los trabajadores de la nómina menor o contractual de la estatal petrolera. Esta medida generó rechazo en los trabajadores, quienes argumentaban que el incremento, tal y como se plasmaba en la convención, debía ser otorgado atendiendo a criterios de cantidad y calidad de trabajo, comportamiento personal y demás factores reconocidos universalmente en la evaluación de personal. (EUD, 1-8-2002, Economía).

El 1° de este mes, desde las 6 de la mañana, trabajadores de la industria petrolera del Estado Zulia cerraron la carretera Lara-Zulia en el Municipio Bolívar de la Costa Oriental del Lago. La importante vía fue clausurada por espacio de cuatro horas. La protesta obedeció al arbitrario otorgamiento y designación de viviendas ubicadas en el sector de “La Plata”. (EUD, 1-8-2002, Mónica Castro, Nacional y Política).

El Estado Zulia era escenario de una gran cantidad de protestas laborales. El 13 de agosto, por espacio de seis horas, los trabajadores del Instituto Nacional de Canalizaciones tomaron las instalaciones exigiendo la cancelación de deudas contractuales. Al mismo tiempo, un nutrido grupo de desempleados petroleros protestó frente a la sede de la empresa Shell, para exigir el cumplimiento de la minuta firmada con la directiva de la transnacional que versaba sobre la intención de poner en práctica un sistema que le permitiera a los trabajadores actuales compartir con los cesantes de la Costa Oriental del Lago sus puestos de trabajo. (EUD, 14-8-2002, Mónica Castro, Economía).

En medio de todas estas protestas, el 8 de agosto se dio comienzo a la discusión, en el Ministerio del Trabajo, de la nueva convención colectiva petrolera. El proceso de negociación tuvo como epílogo la toma del penthouse de Pdvsa por miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera y sus Similares (Sintraip), como medida de protesta ante la incertidumbre que generaba su participación en las discusiones. Este conflicto se inicia cuando las cuatro fuerzas sindicales petroleras (Fedepetrol, Fetrahidrocarburos, Sinutrapetrol y Sintraip) acordaron introducir un convenio colectivo conjunto, acuerdo que se rompe a última hora con la ausencia de Sintraip, que decidió introducir una propuesta de contrato. (EUD, 9-8-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía). Lo cierto es que para el día sábado todavía continuaba tomado el penthouse de Pdvsa. El máximo dirigente de Sintraip, Ricardo Vargas, explicaba que la acción se debía a tres puntos básicos: denunciar la intención de los negociadores de Pdvsa de desconocer a los trabajadores de las contratistas del amparo del contrato, el desconocimiento de los trabajadores de Pdvsa Gas y la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales. (EUD, 10-8-2002, Economía). Sin embargo, Sintraip sólo representaba el 6,2% de los trabajadores con afiliación sindical bajo la dependencia de Pdvsa, por lo

que la estatal petrolera se opuso a discutir el contrato introducido por esta organización. (EUD, 14-8-2002, Economía).

Por otro lado, existía una negativa por parte de la Inspectoría del Trabajo acerca de la inscripción de la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados (Unapetrol) como sindicato. (EUD, 11-8-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía). Esta organización había solicitado una audiencia con la Ministra del Trabajo, además de sostener algunas reuniones con representantes de la CTV y efectuar algunos contactos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (EUD, 13-8-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

Conflictos en el sector educación

Vicente Romero, presidente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatrev) denunciaba que el Ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, no había cancelado completo el bono vacacional, lo que, según el propio Romero, comprobaba “la incompetencia demostrada por el ministro para satisfacer las obligaciones y nuevamente los ponía en el borde de una decisión que condujera a una posible paralización de actividades”. (EUD, 7-8-2002, Nacional y Política).

Lo cierto es que el magisterio mantenía conflictos por más de dos años con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a los que se ponía fin este mes, con la firma del pliego de peticiones. (EUD, 13-8-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Metro: un servicio entre conflictos

Existían grandes diferencias políticas entre los diferentes representantes sindicales del Metro de Caracas, de modo que un grupo de trabajadores, independientes de las corrientes políticas, decidió asumir las acciones para lograr las reivindicaciones salariales, debido a que consideraban ilegítimas a las organizaciones sindicales de esta empresa de transporte. En la mezzanina de la estación de La Hoyada, estos empleados anunciaron la formación de una comisión de 25 empleados de diferentes áreas de la empresa, quienes llevarían la voz cantante para solicitarle a la empresa una bonificación única que oscilaría entre 3 y 5 millones de bolívares, además de un porcentaje de cesta tickets debido a que desde hace más de un año no recibían un incremento salarial. (EUD, 16-8-2002, Migdalis Cañizales V., Ciudad).

El viernes 23 de agosto, los trabajadores del Metro decidieron llevar adelante una huelga que colapsó el tráfico capitalino y complicó el cuadro fiscal del gobierno. Sin embargo, la protesta fue suspendida luego de acordar el pago de un bono de seis millones de bolívares. (EUD, 24-8-2002, Carlos Contreras, Nacional y Política). A pesar de ello, los conflictos en el Metro no parecían terminarse. Víctor González, técnico de material rodante, explicó que en el caso de no efectuarse los pagos, los trabajadores convocarían un paro indefinido de este transporte público. Pero este no era el único punto conflictivo, pues la fecha de las elecciones sindicales en esta

organización estaba prevista para octubre del 2001, pero se habían postergado como consecuencia de las intervenciones de Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Trabajo. Posiblemente las elecciones se efectuarían en octubre de este año. (EUD, 28-8-2002, María A. Gherzi, Ciudad).

Los empleados públicos molestos

El gobierno también mantenía deudas con los empleados públicos, algunas de ellas desde el año 1999. (EUD, 20-8-2002, Gustavo Méndez, Economía). Entre otros grupos de trabajadores, los fiscales paralizaron sus actividades el 28 de este mes, en reclamo por la falta de pago del fideicomiso, cesta tickets y bono vacacional. Esta protesta amenazaba con extenderse indefinidamente. (EUD, 29-8-2002, Carlos Vilorio, Ciudad).

Conflictos en el sector salud

En cuanto al sector salud, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había ordenado al Alcalde Alfredo Peña la ejecución voluntaria de la sentencia por la cual se le había ordenado pagar un bono único a los médicos que laboraban en hospitales de su jurisdicción. El tribunal otorgó un plazo de diez días y de no cumplirse ordenaría la ejecución forzosa. (UN, 20-8-2002, Ricardo Márquez). Ante esta decisión, el secretario de salud de la Alcaldía Metropolitana, Pedro Aristimuño, aclaró que no se obligaba a la alcaldía a pagar inmediatamente dicho bono, pues la Ley Orgánica de Régimen Municipal preveía que podría incluirse en próximos presupuestos. Según Aristimuño, “las versiones que se habían hecho circular de cancelación inmediata, sin tomar en cuenta el fondo de la sentencia, eran una estrategia dirigida a recuperar espacios políticos mediante el uso de enredos jurídicos”. (UN, 22-8-2002).

Pero no sólo protestaban los médicos de la Alcaldía Mayor, pues el 27 de este mes, un grupo de trabajadores del Hospital Pérez de León decidió trancar durante varias horas la avenida Francisco de Miranda, en protesta por una cláusula contractual que les adeudaba el alcalde José Vicente Rangel Avalos. (EUD, 28-8-2002, Ciudad).

Conflictos en la Siderúrgica del Orinoco

El 27 de agosto, los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) efectuaron un paro de siete horas (desde las cinco de la mañana hasta las doce del mediodía) en reclamo por el incumplimiento de algunos aspectos de la contratación colectiva. Según datos extraoficiales las pérdidas fueron de 200 millones de dólares. (EUD, 28-8-2002, Mayela Armas H., Economía). La junta directiva de la compañía esperaba llegar más pronto que tarde a un acuerdo con sus empleados y normalizar las actividades. (EUD, 29-8-2002, Economía).

ALGUIEN DIJO: ES MEJOR UN MAL ARREGLO QUE UN BUEN PLEITO

El gobierno convocaba al diálogo con la oposición, iniciativa que contaba con el apoyo del Centro Carter, la OEA y el PNUD, pero que no encontraba respuestas en los representantes de la oposición. (EUD, 2-8-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política). La idea de diálogo también era apoyada por Estados Unidos, lo que se evidenciaba en las palabras del embajador norteamericano a la salida de una reunión en Miraflores el 2 de agosto en horas de la noche: “En estos momentos lo que necesitamos son propuestas, del gobierno, de la oposición, organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación y tenemos que evaluar estas propuestas y ojalá podamos ayudar en ese proceso de reconciliación nacional y diálogo”. En todo caso se mantenía el clima tenso y tanto gobierno como oposición insistían en la estrategia de “ganar la calle”, lo que era calificado por monseñor José Angel Divasson, obispo de Puerto Ayacucho, como el camino hacia la destrucción del país. (EUD, 3-8-2002, Rafael Jiménez Moreno, Nacional y Política). La posición cerrada de la oposición parecía obedecer a la vigencia de las causas del 11 de abril, que inclusive se habían rebasado dada la situación económica. (EUD, 6-8-2002, Mariela León, Nacional y Política).

En estos momentos se esperaba la decisión del Tribunal Supremo sobre la calificación que tendrían los sucesos del 11 de abril. El presidente Chávez advertía que el país “no se calaría” una sentencia que negara la rebelión militar. El cónclave político-cívico opositor advertía que el régimen de libertades estaba en peligro ante la postura del presidente Chávez de un posible desacatamiento. (EUD, 13-8-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

En la Asamblea Nacional también se había conformado una comisión que se encargaría de fijar responsabilidades sobre los sucesos de abril. Esta comisión había señalado a trabajadores de Pdvsa como algunos de los responsables políticos, acusación que era rechazada tajantemente por los acusados. (EUD, 14-8-2002, Patricia Ventura Nicolás, Nacional y Política). También era introducida una solicitud de averiguación penal contra 13 ejecutivos de la estatal petrolera, a quienes se les impugnaban delitos contra la independencia y la seguridad de la Nación, contra la libertad del trabajo, por instigación a delinquir y por excitación a la desobediencia pública de las leyes. (EUD, 22-8-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

La oposición continuaba organizando paros y movilizaciones en protesta por la situación de crisis del país. Algunas de las acciones eran para manifestar apoyo y rendir homenaje a la Policía Metropolitana, que había sido señalada y acusada por el gobierno luego de los sucesos de abril. (EUD, 29-8-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

El gobierno insistía en buscar el control del movimiento sindical y empresarial. Según Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, “el gobierno pretendía la fractura de las instituciones”. (EUD, 6-8-2002, Mariela León, Economía). En el caso del movimiento sindical, un informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciols) condenaba el tono insultante del presidente

Chávez hacia la CTV y sus dirigentes. (EUD, 8-8-2002, Teresa de Vicenzo, Nacional y Política). La intención del gobierno era estructurar un movimiento sindical bolivariano, paralelo al existente.

Septiembre de 2002

El país seguía cubierto por el velo de la crisis económica, social y política, lo que generaba descontento en empresarios y trabajadores, de modo que los conflictos de carácter laboral eran “el pan de cada día”. La oposición seguía ejerciendo presión y amenazaba con la posibilidad de efectuar un paro nacional. Por otro lado, todavía estaban cercanos para el gobierno los recuerdos de los sucesos de abril, por lo que buscaba estrategias que desalentaran a la oposición. La promoción de creación de una central obrera paralela, la amenaza de un decreto de intervención para aquellas empresas que se sumaran a la paralización y el desarrollo de una campaña mediática que asociaba a la oposición al golpismo militar eran sólo algunas de las estrategias del gobierno. Tanto opositores como representantes del gobierno habían decidido que su libro de cabecera fuera el Arte de la Guerra de Sun Tzu.

CONFLICTOS LABORALES: CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA

Indicadores económicos

Según la estimaciones de Conindustria, el PIB caería en 5% durante el segundo trimestre de este año, de modo que no había indicios de una reactivación económica. (EUD, 1-9-2002, Economía).

Por otro lado, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el mes de junio la tasa de desempleo se ubicaba en 16,2% y la informalidad ascendía a 52,1%. (EUD, 3-9-2002, Raquel Barreiro C., Economía).

De acuerdo a las encuestas efectuadas por Fedeindustria, tal como lo informaba Miguel Pérez Abad, presidente de este organismo, alrededor de 800 pequeñas y medianas industrias cerraron sus puertas en los últimos cuatro trimestres, lo que se traducía en una pérdida de alrededor de 90.000 empleos directos. (EUD, 11-9-2002, Economía).

El gobierno busca soluciones a la crisis económica

El Ejecutivo Nacional trataba de encontrar alguna solución a la problemática, especialmente a los niveles de desempleo, por lo que el 2 de septiembre decretaba un Plan de Incentivo al Empleo, mediante el cual el gobierno se comprometía a asumir un porcentaje de la prestación de antigüedad de los trabajadores y a dar un aporte respecto al pago de la seguridad social, del seguro de paro forzoso y de las utilidades, en el caso de aquellas empresas que decidieran participar. (EUD, 3-9-2002, Carlos Contreras, Economía).

Sin embargo, la respuesta del gobierno no parecía suficiente y estos indicadores originaban una cadena de protestas en diferentes sectores. Por ejemplo, la Coordinadora Democrática cumplía con toda una agenda de protestas contra el desempleo. Trujillo, Lara y Mérida se convertían en algunos de los escenarios escogidos por la oposición. (EUD, 19-9-2002, Nacional y Política).

Paralizado el Sur del Lago de Maracaibo

Desde el 2 de septiembre se había paralizado indefinidamente la actividad económica en la región del Sur del Lago de Maracaibo. La huelga colectiva, liderada por el sector comercial, las entidades financieras, centros educativos, industriales y de transporte, se traducían en una protesta general por las condiciones de desempleo y desactivación laboral, especialmente en el área de la industria láctea, razón por la cual diversos grupos comunitarios habían tomado literalmente la empresa Parmalat, paralizada desde hacía más de cinco años. Esto con la intención de llamar la atención de las autoridades locales para la reactivación inmediata de la empresa láctea, una de las mayores fuentes generadoras de empleo. (EUD, 3-9-2002, Mónica Castro, Economía). En la tarde del 3 de septiembre, lo que comenzó como una protesta pacífica en el Municipio Colón se convirtió en acciones de violencia que incluyeron la quema de un camión de la Coca-Cola, el saqueo de algunos almacenes y la intempestiva agresión a la sede de la empresa Enelven. Los manifestantes exigían reiteradamente la reactivación inmediata de la empresa láctea Parmalat. (EUD, 4-9-2002, Mónica Castro, Nacional y Política).

Protestas en el sector salud

En el Estado Zulia, más de 6.000 empleados del sector salud, dependientes del Sunep-SAS, habían iniciado un paro indefinido, afectando el funcionamiento de unos 20 hospitales. La paralización obedecía al retraso en el pago de deudas contractuales correspondientes a los años 96, 97 y 98. (EUD, 3-9-2002, Mónica Castro, Nacional y Política).

Más tarde se decidía que la paralización se extendería a nivel nacional, dado el incumplimiento de las cláusulas contractuales entre el Ejecutivo y los 43 mil trabajadores agrupados en Sunep-Sas. Según el presidente del Sindicato Único de Empleados Públicos del Sector Salud, Adolfo Padrón, sólo se garantizarían los servicios de emergencia en los hospitales a nivel nacional hasta que el ejecutivo cancelara la deuda “de un billón de bolívares”. (EUD, 4-9-2002, Eugenio Martínez, Nacional y Política).

Además, el 5 de septiembre, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un amparo a favor de la salud y en contra de la ministra del área y del presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por la situación crítica en la que se encontraban los hospitales y los centros asistenciales del país. (EUD, 6-9-2002, Alejandra M. Hernández, Nacional y Política).

Retorno a clases condicionado

El 16 de septiembre, el retorno a clases de los maestros se producía bajo la amenaza de paro. El presidente de la Federación de Maestros de Venezuela (FVM), Jaime Manzo, denunció que el Ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, había incumplido con el acuerdo que se firmó el 12 de agosto, donde se planteó un cronograma de pagos. Lo cierto es que “si las condiciones no mejoraban, lamentablemente emprenderían acciones sindicales”. (EUD, 14-9-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Por otro lado, los profesores de los Institutos Universitarios también se encontraban de paro por la deuda que el Ejecutivo Nacional mantenía con ellos, que alcanzaba ya siete quincenas. (EUD, 27-9-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Conflicto laboral por liquidación de IAN

Los trabajadores del extinto Instituto Agrario Nacional mantenían un conflicto laboral ante la negativa de la Junta Liquidadora de cancelarles sus prestaciones sociales. Según lo establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el nacimiento del Instituto Nacional de Tierras debía incluir la absorción de la nómina del antiguo IAN, pero la junta liquidadora había decidido despedir a la totalidad de trabajadores, los cuales no se mostraban de acuerdo con la medida. (EUD, 4-9-2002, Nacional y Política). El 4 de septiembre, luego de que un grupo de trabajadores introdujeran un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de varios artículos de la nueva Ley, se produjo una sentencia a favor de los trabajadores del Instituto, por lo que no podrían ser retirados del mismo. (EUD, 5-9-2002, Economía).

La huelga se mantuvo por 20 días, para que finalmente, el 13 de septiembre, la junta liquidadora y representantes sindicales del organismo firmaran un acuerdo para levantar la protesta, iniciando las conversaciones sobre la situación jurídica de los trabajadores. El acuerdo suscrito estipulaba que las partes aceptaban instalar una comisión negociadora con representación legal, institucional y gremial. (EUD, 14-9-2002, Economía).

Se encadenan los trabajadores tribunalicios

El 16 de septiembre, los dirigentes sindicales del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) se encadenaron a las puertas del Palacio de Justicia en protesta por las intenciones de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores de crear un sindicato paralelo. Los empleados también reclamaban el pago de 9 meses de los bonos de alimentación, además de las prestaciones sociales de jubilados y pensionados y un mejor contrato colectivo. (EUD, 17-9-2002, Nacional y Política).

Protestan los trabajadores de Imparques

Los trabajadores de Imparques también se mantenían en una postura de conflicto ante la negativa de las autoridades de este Instituto de pagar las deudas de carácter laboral. El conflicto también había abierto las puertas a una serie de contradicciones y diferencias entre los obreros. En todo caso, los trabajadores habían amenazado con el cierre de los parques como medio de presión para que se les pagara. (EUD, 6-9-2002, María Elisa Espinosa, Ciudad).

El 10 de septiembre, los empleados y obreros de este Instituto marcharon al Ministerio de Finanzas como medio para presionar a las autoridades de ese despacho para que liberaran los recursos que había aprobado el Ejecutivo para saldar parte de la deuda que tenía con estos trabajadores. Lo bueno es que parecía haberse dejado atrás la idea de cerrar los parques nacionales. (EUD, 9-9-2002, María Elisa Espinosa, Ciudad).

El caso de los “cascos negros”

El lunes 2 de septiembre se había dado comienzo a la discusión del Proyecto de Convención Colectiva Petrolera 2002, con la aprobación de 23 cláusulas completas y seis literales que habían sido presentadas por el equipo negociador de Pdvsa. (EUD, 5-9-2002, Economía). A mediados de este mes, cuando se cumplía un mes y un día de haberse iniciado la discusión del contrato colectivo petrolero y contra todo pronóstico, se concretó la firma de la nueva convención para el período 2002-2004. “Con el acuerdo logrado entre las partes quedaba atrás el fantasma de la traumática negociación del contrato pasado, mientras que los trabajadores petroleros pasarían a contar con 6 mil bolívares más en su salario en el momento de la firma y de mil bolívares adicionales para el primero de mayo del 2003. Este aumento de 7 mil bolívares representaba un incremento de 35% con respecto al nivel de ingreso actual. Adicionalmente a esta mejora, se logró la modificación de 36 cláusulas; según indicó Cosme Trías, líder del equipo negociador de Pdvsa, no se alcanzaba un logro así desde el año 1997. El costo que representaba el nuevo contrato para la estatal petrolera era conocido por el presidente de Fedepetrol, Rafael Rosales, quien explicaba que tenían autorizado 1,2 billones de bolívares, pero con algunas llamadas pudieron obtener 100 millardos adicionales. Al respecto, el líder negociador de Pdvsa indicó que el costo estaba dentro de los parámetros establecidos por la empresa y por el Ministerio de Planificación”. (EUD, 17-9-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

Pero no todos parecían estar tan contentos con la aprobación del contrato colectivo. En el estado Zulia, el 18 de este mes, unos sesenta trabajadores petroleros tomaron por espacio de siete horas la refinería de Bajo Grande en el Municipio San Francisco y el muelle de Tía Juana en la Costa Oriental del Lago, en rechazo a la aprobación del contrato colectivo, argumentando que los beneficios que recibían eran escasos. (EUD, 19-9-2002, Mónica Castro, Nacional y Política).

Para Carlos Dickson, presidente de la Asociación de Contratistas de Bienes y Servicios del Sector Petrolero, la nueva convención colectiva traspasaba la barrera

de los números y con su aprobación se perdía nuevamente una oportunidad de oro para relacionar el contrato con la realidad del país. Con la firma de este contrato, el costo de un trabajador petrolero, con todos sus beneficios socioeconómicos, se colocaba sobre un promedio de 108 mil bolívares diarios. (EUD, 24-9-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

El presidente de la estatal petrolera defendía la negociación del contrato colectivo, pero reconocía que había que mejorar la productividad. (EUD, 29-9-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

Los policías se mantienen en huelga

Los policías del Estado Trujillo mantenían una huelga que para el 17 de septiembre cumplía 46 días. Lo cierto es que no se lograba alcanzar algún acuerdo con el gobernador Gilmer Viloria por lo que los funcionarios se decidieron a tomar las instalaciones de la Comandancia Principal del Estado ese día. (EUD, 18-9-2002, Nacional y Política). La deuda que mantenían con estos trabajadores era de 8 mil millones de bolívares, lo que representaba unos 4 millones para cada funcionario. Lo cierto es que no parecía existir una solución al corto plazo, por lo que la situación de inseguridad se mantendría en el Estado. (EUD, 19-9-2002, Nacional y Política).

También se paran los trabajadores del CNE

Los trabajadores del CNE también alzaban sus voces para reclamar el pago de sus pasivos laborales y para pedir la eliminación de la disposición 5 del Proyecto de Ley Orgánica del Poder Electoral con la que, según la opinión de representantes del sindicato, se “pretendía despedir a los empleados de este organismo”. Se amenazaba con la realización de un paro total si en los días siguientes no se cumplían sus peticiones. (EUD, 6-9-2002, Nacional y Política). En realidad, en el nuevo proyecto de ley se establecía que serían desincorporados aquellos trabajadores que no cumplieran con el perfil de competencias necesario para el ejercicio de sus cargos, pero el problema estaba en que no existía un manual descriptivo de cargos ni una escala de sueldos, insumos necesarios para la toma de decisiones en este sentido. (EUD, 6-9-2002, Nacional y Política).

En relación con el proceso de aprobación de una nueva Ley del Poder Electoral, no se lograba el consenso en la Asamblea Nacional sobre la integración del Comité de Postulaciones, el alcance de la ley en materia sindical y la propia reestructuración del CNE. (EUD, 18-9-2002, Teresa de Vincenzo, Nacional y Política).

El 17 de septiembre, unos quinientos trabajadores del CNE marcharon desde la sede del ente comicial hasta el Palacio Federal Legislativo, para entregarle al presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, un documento, exigiendo que se eliminara la disposición transitoria 5° que daría lugar a una reducción de personal. Igualmente, solicitaban la renuncia de la Ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, por considerar que su actitud no había ayudado a resolver los problemas de los trabajadores. (EUD, 18-9-2002, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).

El 18 de este mes, otro grupo de trabajadores del CNE protestaba ante la sede de la Fiscalía General de la República para exigir a este organismo que se pronunciara en torno a un presunto desfalco por 3 millardos de bolívares en contra de la caja de ahorros del ente comicial. (EUD, 19-9-2002, Nacional y Política).

Parálisis en SIDOR

El 9 de septiembre los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) paralizaron sus actividades durante todo el día debido a que no se había llegado a un acuerdo con la empresa para cumplir los puntos pendientes del contrato colectivo. (EUD, 10-9-2002, Economía). Esta protesta se repetía por 24 horas adicionales el 12 de septiembre, desde las 3 de la tarde de ese día hasta la misma hora del día siguiente. (EUD, 13-9-2002, Economía).

De acuerdo a lo comentado por el dirigente sindical Carlos Becerra, la empresa se encontraba al borde de una huelga indefinida. (EUD, 11-9-2002, Eduardo Camel Anderson, Economía).

El 17 de septiembre los trabajadores de Sidor se reunían en asamblea para decidir las acciones que tomarían los días próximos ante el incumplimiento por parte de la empresa de algunos puntos del contrato colectivo. (EUD, 17-9-2002, Mayela Armas H., Economía).

El 20 de este mes, Sidor y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) llegaron a un acuerdo en el cual las partes convinieron en preservar por todos los medios la continuidad operativa de la empresa y garantizar el cumplimiento de los compromisos consagrados en la contratación colectiva. (EUD, 21-9-2002, Economía).

Los trabajadores del Metro preparados para protestar

Este mes, los trabajadores del Metro de Caracas se encontraban contando los días para que culminara el mes de septiembre, fecha tope acordada con la empresa para la cancelación del primer bono (por un millón ochocientos mil bolívares) de los tres pagos con los cuales la empresa honraría la deuda que mantenía con cada uno de ellos, por un monto superior a los seis millones de bolívares. (EUD, 17-9-2002, María Elisa Espinosa, Ciudad).

OPOSICIÓN PRESIONA Y EL GOBIERNO SE DEFIENDE

El gobierno, según algunos representantes de la oposición, desarrollaba una campaña mediática para vincular a la oposición con el golpismo militar. (EUD, 8-9-2002, Argelia Ríos, Nacional y Política).

Por otro lado, la oposición insistía en la salida de Chávez e inclusive llamaban la atención sobre la necesidad de desarrollar un plan para la transición. En todo caso, Carlos Ortega insistía en que la CTV no tendría ninguna participación en dicha transición, pues ellos “no eran ningunos gobernadores”. (EUD, 8-9-2002, Nacional y

Política). Para Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, Chávez estaba propiciando una confrontación social y “la implementación del comunismo en el país, a semejanza del modelo de gobierno imperante en Cuba”. (EUD, 18-9-2002, Economía). Ya se planteaba la idea de convocar a un paro general, pero estaba por comprobarse el apoyo que recibirían de los diversos sectores. (EUD, 23-9-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

El gobierno buscaba la manera de debilitar las acciones de la oposición. Por un lado promovía la creación de una central obrera paralela, idea que parecía estar derrotada, aún cuando generaba muchos conflictos en las diversas agrupaciones de trabajadores. (EUD, 8-9-2002, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política). Por otro lado, como forma de desalentar la idea del paro, planteaba un decreto de intervención que se aplicaría a aquellas empresas que se sumaran a esta iniciativa. Por supuesto, el decreto era calificado de inconstitucional por las diversas representaciones de los empresarios. (EUD, 10-9-2002, Economía). A pesar de las protestas, el decreto parecía estar listo y además, según la Procuradora General de la República, Marisol Plaza, contaba con fundamento legal, pues “una paralización productiva sólo estaba prevista y era legal conforme a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica del Trabajo cuando la misma obedeciera a la violación de las condiciones de trabajo”. La “cogestión” era la palabra de moda. (EUD, 24-9-2002, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política). A pesar de los amedrentamientos la oposición parecía decidida a seguir ejerciendo presión...

Octubre de 2002

Las presiones y el enfrentamiento político entre los diversos actores que ahora parecían estar agrupados en dos bandos (gobierno y oposición) daban lugar a un paro cívico nacional de 12 horas el 21 de octubre, precedido de sendas marchas realizadas los días 10 (en el caso de la oposición) y 12 (en el caso del oficialismo). Los indicadores económicos eran preocupantes y los conflictos laborales estaban a la orden del día.

PARARSE SIGUE SIENDO UNA OPCIÓN: LA OPOSICIÓN INSISTE

Posición de los trabajadores

Algunos sectores de la oposición apelaban por la salida inmediata del Presidente Chávez, por cualquier vía. Sin embargo, Pablo Castro, director de conflicto de la CTV, reiteraba que las acciones de este organismo serían democráticas. (EUD, 1-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Los trabajadores apoyaban la iniciativa de efectuar una marcha fijada para el 10 de este mes, que no sólo encontraría justificación en la situación económica y social, sino en el elemento político: acelerar la consulta popular para una posible salida del presidente Chávez. (EUD, 2-

10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). En todo caso, la central obrera ya había definido el camino para superar la coyuntura, la realización de un referéndum inmediato. Así se lo planteaban a César Gaviria, secretario general de la OEA, en una reunión celebrada el 3 de octubre. (EUD, 3-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). La CTV insistía en la necesidad de una transición, que además estimaban se produciría en el corto plazo. Según Rodrigo Penso, secretario ejecutivo y miembro de la comisión de trabajo de este organismo, la palabra clave era “acuerdo”. (EUD, 7-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). En todo caso, los reclamos de los trabajadores encontraban fundamento en las cifras económicas. Según el análisis del índice de remuneraciones del BCV, en el primer semestre de este año los sueldos habían aumentado un 5% mientras que la inflación se incrementaba en 12,8%, de modo que el poder de compra de los trabajadores en el sector privado había caído un 7,8%. (EUD, 9-10-2002, Víctor Salmerón, Economía). Lo cierto es que los indicadores económicos se agravaban como consecuencia de la presión política. En octubre del año pasado el dólar se cotizaba a 744 bolívares y este mes teníamos un dólar a 1.474 bolívares. (EUD, 13-10-2002, Raquel Barreiro C., Economía).

Posición de los empresarios

Las diversas organizaciones empresariales se encontraban en discusiones sobre la posibilidad de apoyar un paro nacional. En el caso de Fedecámaras, se nombró un Consejo Nacional que terminó por aprobar la medida. (EUD, 1-10-2002, Mariela León, Nacional y Política). La LVIII Asamblea Anual de Fedecámaras se realizó del 3 al 5 de este mes en Barquisimeto, estado Lara, cita a la que asistieron, además de los empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil dispuestas a sumarse a la paralización planteada. (EUD, 1-10-2002, Nacional y Política). En esta reunión se aprobó la participación de Fedecámaras en un paro cívico nacional, que no sería exclusivamente empresarial. Además, este organismo se había comprometido a apoyar la iniciativa de una marcha pautada para el día 10 de este mes. (EUD, 1-10-2002, Eddo Polesel, Nacional y Política). Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, había exhortado a los empresarios a facilitar la participación de sus trabajadores en la manifestación, no descontándoles el día de salario. (EUD, 9-10-2002, Nacional y Política).

Fedeindustria, según informaciones suministradas por su presidente Miguel Pérez Abad, todavía no había tomado una decisión acerca de su apoyo a la paralización, pues esperaba los resultados de la encuesta “coyuntura” mediante la cual adelantaban un proceso de consulta a las bases. (EUD, 1-10-2002, Nacional y Política).

El presidente de la Cámara de Integración Económica Colombo Venezolana (Cavecol), Juan González Velasco, señalaba que según una encuesta realizada por ese organismo, el 90% de las empresas transnacionales y multinacionales participantes manifestaron su adhesión al paro cívico nacional. (EUD, 6-10-2002, Nacional y Política).

Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la paralización, como el caso de la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta, que rechazaba la convocatoria advirtiendo que la medida no sólo perjudicaría a la comunidad insular sino a toda la nación, según palabras de Eustacio Aguilera, presidente del gremio. (EUD, 3-10-2002, Economía). También la banca había manifestado que no se sumaría a la huelga. Ignacio Salvatierra, en nombre de este sector, advirtió que los bancos prestarían su servicio porque eran “apolíticos y despartidizados”. (EUD, 9-10-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

En todo caso, es importante resaltar que en la Declaración de Barquisimeto, documento central de la LVIII Asamblea Anual de Fedecámaras, se rechazaba la vía militar como salida del gobierno de Hugo Chávez, advirtiendo que la iniciativa dirigida para poner fin a la crisis política debía surgir de la sociedad en su conjunto y en particular del sector civil. (EUD, 5-10-2002, Mariela León, Nacional y Política).

El vicepresidente Rangel cuestionaba reiteradamente la gestión de Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, por lo que el organismo cúpula aprobó que cualquier agresión en su contra o de su familia redundaría en la paralización. (EUD, 6-10-2002, Mariela León, Nacional y Política).

En todo caso, los empresarios, al igual que los trabajadores, también encontraban argumentos para justificar su descontento. El primer trimestre el PIB había caído un 7,1%, la inflación superaba un 25% y las cifras de desempleo y economía informal seguían aumentando. La economía venezolana realmente se estaba deteriorando. (EUD, 20-10-2002, Raquel Barreiro C. Y Luisa Amelia Maracara, Economía).

Posición del gobierno

Según el Ministro de Agricultura y Tierras, Efrén Andrades, los gremios relacionados a este sector que se sumaran al paro planteado quedarían fuera de los instrumentos de diálogo y negociación con el Ministerio, además de sufrir sanciones contempladas en la Constitución Nacional por atentar contra la seguridad alimentaria de la población. (EUD, 1-10-2002, Nacional y Política).

Por otro lado, el gobierno parecía darse cuenta de la necesidad de incentivar el diálogo. Luego de una reunión sostenida entre el vicepresidente de la República, diversos Ministros del gabinete y el presidente de Fedeindustria, se planteó la posibilidad de efectuar un cronograma para celebrar una serie de reuniones con los organismos representantes de los empresarios, entre los cuales se incluían Venamcham, Conindustria y Consecomercio. (EUD, 3-10-2002, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).

El gobierno insistía en que octubre sería “un mes bonito” y más aún lo serían los meses de noviembre y diciembre. Para tratar de materializar estas palabras el presidente Chávez anunciaba la entrega de más créditos a pequeños empresarios, por un monto que alcanzaba los 51,7 millardos. (EUD, 25-10-2002, Patricia Ventura Nicolás y Raquel Barreiro C., Economía).

Posición de los organismos internacionales

Richard Boucher, vocero del Departamento de Estado, instaba al gobierno y a la oposición a que se sentaran a dialogar y aprovecharan la ayuda ofrecida por la comisión tripartita, conformada por la OEA, el PNUD y el Centro Carter, para buscar soluciones con base en la declaración de principios enunciados por el secretario general de la OEA, César Gaviria. (EUD, 12-10-2002, Everett Bauman, Nacional y Política).

El propio secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, insistió en la urgencia del diálogo entre gobierno y oposición dentro del orden constitucional y el Estado de Derecho. (EUD, 24-10-2002, Nacional y Política). Gaviria se trasladó al país el 27 de octubre con la intención de permanecer hasta que se generara el diálogo. (EUD, 27-10-2002, Rodolfo Cardona Marrero, Nacional y Política).

Posición de la Fuerza Armada

El comandante del Ejército, Julio José García Montoya, ofreció, el 15 de octubre, un mensaje institucional donde aclaraba que los hombres de armas “no intervendrían ni como árbitros ni como parte en escenarios de alta tensión política y social”. (EUD, 15-10-2002, Alicia La Rotta Morán, Nacional y Política).

Algunos militares disidentes se mantenían apostados en la Plaza Altamira desde el 21 de octubre como medida de protesta.

Empresarios, trabajadores, partidos políticos y sociedad civil se ponen de acuerdo: marcha del 10 de octubre

Los diferentes actores opositores al gobierno habían decidido unir esfuerzos y orientar sus acciones a una marcha que realizarían el 10 de este mes, a la cual se le había puesto el nombre de “la toma de Caracas”. (EUD, 2-10-2002, Elvia Gómez, Nacional y Política).

Los representantes del gobierno, basados en experiencias anteriores, no veían con buenos ojos la iniciativa. Miguel Rodríguez Torres, director de la DISIP, advertía que detrás de la manifestación “habían malas intenciones”. Sin embargo, representantes de la CTV ratificaban la naturaleza “democrática y reivindicativa” de la marcha. (EUD, 3-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Por otro lado, a juicio del vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, diputado (MVR) Nestor León Heredia, los organizadores de la marcha debían solicitar permiso de tránsito al Ministerio de la Defensa, por las zonas de seguridad establecidas por el Ejecutivo Nacional que se encontraban en el trayecto. (EUD, 4-10-2002, Nacional y Política). El propio presidente de la República, Hugo Chávez, efectuó un llamado de atención, denunciando la conformación de cuerpos paramilitares en la oposición. Las palabras del mandatario fueron: “marchen pero no se equivoquen”. (EUD, 10-10-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

El magisterio también había decidido sumarse a la iniciativa, postura que despertó el asombro de Xiomara Lucena, directora nacional de comunidades educativas del Ministerio de Educación. Aún cuando manifestó respeto por la libertad de manifestación, también fustigó que ese derecho se impusiera a siete millones de estudiantes que dejarían de recibir clases. (EUD, 5-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Días más tarde se decidiría que las escuelas funcionarían con normalidad, a excepción de aquellas ubicadas en la ruta de la marcha. (EUD, 10-10-2002, Nacional y Política).

El oficialismo, como siempre, había decidido organizar sus propias manifestaciones paralelamente a la marcha convocada por la oposición. Darío Vivas, vocero del MVR, había indicado que mantendrían un cronograma de movilizaciones que se realizarían durante toda la semana, del 7 al 13 de octubre, cuya política central era la de mantener a la militancia en constante movimiento, informando a la colectividad y garantizando la movilización permanente en defensa del proceso revolucionario. (EUD, 8-10-2002, Taynem Hernández, Nacional y Política).

Para Carlos Ortega, presidente de la CTV, el éxito de la marcha estaba garantizado. (EUD, 10-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Finalmente, tal como se había planificado, se produjo la marcha el día 10. Cada sector tenía sus impresiones particulares sobre el hecho. La oposición la calificaba como exitosa, lo que inclusive parecía ocasionar que tomara fuerza la idea del paro. Los propios emeverristas también calificaron de exitosa la movilización, pues se había desarrollado en paz y los principales derrotados habían sido los golpistas. Sin embargo, llamaban la atención sobre una oposición que se mostró dividida, dado que se habían impuesto diferentes agendas para ese día. (EUD, 12-10-2002, Taynem Hernández, Nacional y Política). El propio vicepresidente, José Vicente Rangel, había desestimado el número de participantes en la manifestación y hacía especial mención a las contradicciones entre los factores de oposición, que se habían evidenciado en la tarima, al final de la marcha. (EUD, 11-12-2002, Nacional y Política).

En definitiva, la manifestación concluyó con un ultimátum de Carlos Ortega a Chávez. Para algunos este final era erróneo pues esto no contribuiría a salir de la crisis nacional. (EUD, 12-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Responde el oficialismo: Marcha del 12 de octubre

Realizada la toma de Caracas, ahora era el turno del oficialismo, pues ya los simpatizantes del presidente Chávez habían anunciado para el domingo 12 de este mes una manifestación que saldría desde el Poliedro de Caracas y terminaría en la avenida Bolívar, pasando por el terminal La Bandera, la avenida Nueva Granada, el Helicoide, las Fuerzas Armadas, la Lecuna y Parque Central. (EUD, 12-10-2002, Nacional y Política).

A la manifestación asistieron personas de toda Venezuela que se organizaron en cinco bloques. El primero estaba constituido por habitantes de Caracas, Miranda y Vargas. El segundo, por un sector representativo de los estados Carabobo, Cojedes y

Guárico. El tercero y el cuarto por Oriente y Occidente respectivamente. Por último, en el quinto bloque estaba el escuadrón de la Fuerza Bolivariana de Motorizados. (EUD, 13-10-2002, Nacional y Política).

21 de octubre: paro de 12 horas

Para el 21 de este mes la oposición había fijado la fecha de un primer paro, tal como se venía discutiendo. Tanto la oposición como el oficialismo parecían haber encontrado lemas que calificaran la iniciativa. La Coordinadora Democrática había planteado la consigna de “negocio abierto, negocio desierto” en contraposición a la consigna de los seguidores del oficialismo que rezaba “negocio cerrado, negocio saqueado”. (EUD, 14-10-2002, Nacional y Política). Ante la posibilidad de que se produjeran manifestaciones de violencia, el directorio ordinario de Fedecámaras instaba a los cuerpos de seguridad y a la Fuerza Armada a “mantener en resguardo la integridad física de las personas e instalaciones empresariales y comerciales del país durante la jornada”. (EUD, 15-10-2002, Mariela León, Nacional y Política).

La protesta se había fijado para un plazo de 12 horas pero siempre cabía la posibilidad de extenderla. (EUD, 15-10-2002, Nacional y Política). ¿Para qué un paro? Para plantear el reclamo mayoritario de la población, pidiendo la renuncia del presidente Chávez y convocar una consulta electoral inmediata. (EUD, 19-10-2002, Nacional y Política).

El gobierno buscaba desesperadamente medidas que evitaran manifestaciones de este tipo. Se había planteado la posibilidad de que la reforma del Reglamento de la Ley del Trabajo incluyera fórmulas para permitir que los trabajadores garantizaran la continuidad de las operaciones empresariales, en caso de que el paro convocado para el 21 se hiciera indefinido. (EUD, 15-10-2002, Taynem Hernández, Nacional y Política).

Las federaciones y sindicatos nacionales habían asegurado su pleno respaldo. Según Manuel Cova, secretario ejecutivo de la CTV, el apoyo sería del 90% de la masa laboral. (EUD, 16-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Los organismos representantes de los empresarios también habían manifestado que sus afiliados tendrían libertad de decidir. (EUD, 17-10-2002, Eugenio Martínez, Nacional y Política). Según Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, el paro no era de los trabajadores ni de los empresarios sino de todo el país. (EUD, 19-10-2002, Nacional y Política).

Sin embargo, las estimaciones del gobierno eran absolutamente contrarias a las de Manuel Cova, pues según Manuel Rosales, Ministro de Producción y Comercio, un 90% de la fuerza productiva del país trabajaría ese día. (EUD, 17-10-2002, Nacional y Política).

Aún cuando el Ejecutivo no tomaría medidas especiales de seguridad ese día, estaba planteada la posibilidad de decretar un estado de excepción si el paro se prolongaba. (EUD, 17-10-2002, Irma Álvarez, Nacional y Política).

Finalmente, llegado el día, el escenario no era el de un lunes normal. El Metro operó pero con pocos trabajadores y las franquicias permanecieron a puertas

cerradas, al igual que una gran cantidad de negocios y comercios. Caracas mostró dos caras: una que dibujaba numerosos locales con puertas abiertas o entre rejas, quioscos y tarantines que ofrecían sus productos a los consumidores y otra que asemejaba a un primero de enero u otro feriado, con calles solitarias y negocios con las santamarías abajo. (EUD, 22-10-2002, Elizabeth de Ornelas y Juan Francisco Alonso, Nacional y Política). Diversos sectores garantizaban el éxito del paro, mientras otros se dedicaban a desestimarlos. El vicepresidente, José Vicente Rangel, advirtió que “no había marcha ni paro que pudiera sacar a Chávez del gobierno”. (EUD, 22-10-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política). En todo caso, parecía que el paro convocado había superado las expectativas. Se calculaba que un 75% de la masa laboral se había sumado a la paralización. (EUD, 22-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

La Coordinadora encontraba el éxito del paro en un factor que iba más allá de los números. Para representantes de esta organización, el mayor éxito giraba en torno a la alineación de los diversos factores de la oposición frente a la iniciativa. (EUD, 23-10-2002, Elvia Gómez, Nacional y Política).

Todavía estaban por esperarse las consecuencias del tenso ambiente político y de las paralizaciones. (EUD, 23-10-2002, Mariana Párraga y Yolanda Ojeda, Clima Laboral). De todas formas, seguía latente la posibilidad de convocar un paro nacional indefinido. (EUD, 29-10-2002, Mariela León, Nacional y Política).

PLANTEADA REFORMA DE LA LOT: ¿ILEGAL E INCONSTITUCIONAL?

Para esta fecha se avanzaba en una reforma parcial del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. La reforma preveía la posibilidad de que en lugar de que se redujera el personal de una empresa o el cierre de ésta, se permitiera su recapitalización y reactivación a través de la participación de los trabajadores, gestión que contaría con el apoyo del Estado. Varios artículos de la reforma se concentraban en regular los despidos masivos y los cierres de empresas. (EUD, 4-10-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía). La exposición de motivos para el cambio aclaraba que “uno de los ejes fundamentales de la política económica del gobierno era la protección de las fuentes de empleo existentes, la creación de nuevos puestos de trabajo y la recuperación de la tasa de empleo”. (EUD, 4-10-2002, Economía).

El proyecto de reforma había despertado reclamos por parte de los empresarios, que interpretaban que se abrían las puertas a la posibilidad de “expropiar empresas”. Sin embargo, representantes del Ministerio del Trabajo explicaban que el articulado propuesto para la recapitalización de una empresa se aplicaba a casos tanto del sector privado como público y era de carácter voluntario. (EUD, 5-10-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía). A pesar de estas explicaciones, los empresarios insistían en calificar la reforma de “inconstitucional e ilegal”. (EUD, 9-10-2002, Mariela León, Economía).

DESEMPLEO: LAS CIFRAS PARECEN IRREVERSIBLES

Para el mes de julio la tasa de desocupación se ubicaba en 16,4% y la economía informal en un 51,3%, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (EUD, 2-10-2002, Raquel Barreiro C., Economía).

El decreto de inamovilidad dictado por el Ejecutivo vencía el 24 de este mes, pero se amenazaba con la posibilidad de prorrogar la medida en caso de que se produjeran despidos masivos. (EUD, 2-10-2002, Economía). Esta solución planteada por el gobierno era calificada como “ciencia ficción” por los representantes de la CTV, quienes opinaban que esta medida no había ayudado de ninguna manera a mantener la estabilidad en los niveles de empleo. (EUD, 3-10-2002, Raquel Barreiro C., Economía). Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, también rechazaba la propuesta de extender la inamovilidad, aclarando que por esa vía “no se resolverían los problemas económicos del país”. (EUD, 24-10-2002, Mariela León, Economía). Sin embargo, a pesar del rechazo que los diferentes sectores expresaban frente a la medida, el Ejecutivo decidía finalmente prorrogar la inamovilidad hasta el 15 de enero, por un total de 82 días. (EUD, 25-10-2002, Economía).

Otra de las soluciones planteadas por el Ejecutivo era el diseño de un Plan de Incentivo al Empleo, al cual se le destinarían 28 millardos de bolívares, con lo que se esperaba generar 50.000 puestos de trabajo en 18 meses, favoreciendo especialmente a la pequeña y la mediana industria. (EUD, 5-10-2002, Ana Díaz, Economía). Sin embargo, los esfuerzos del Ejecutivo parecían insuficientes y las cifras de desempleo seguían en aumento.

MESA SERVIDA: CONFLICTOS LABORALES A LA ORDEN DEL DÍA

Los policías reclaman

Desde el 1° de octubre, un grupo de policías de la PM se encontraban en paro por reclamos de orden reivindicativo. Días más tarde se resolvía el problema parcialmente, tras la cancelación de 4,4 millardos de un fideicomiso y con el anuncio del pago de un aumento de 20% en el salario de los efectivos y la incorporación del cesta ticket en los beneficios laborales. A pesar de ello, un grupo de 30 agentes metropolitanos se mantenían en situación de rebeldía a las puertas de la Comandancia de ese cuerpo en Cotiza. (EUD, 8-10-2002, Ciudad). Desde el viernes 11 de este mes, diez de los funcionarios, incluyendo una dama, decidieron dejar de comer y se esposaron a la cadena que regula el paso de vehículos a la sede. Exigían la renuncia de la directiva del cuerpo policial y la presencia del alcalde Peña. (EUD, 13-10-2002, Carlos Mollejas D., Ciudad). Sin embargo, las protestas eran dudosas, pues al revisar el historial de los policías huelguistas, resultó que al menos 20 de los funcionarios tenían una extensa lista de faltas. (EUD, 18-10-2002, Rafael Romero, Ciudad). Días más tarde el conflicto aumentaba, pues un grupo de estos funcionarios entraban con armas de fuego y ganadas fragmentarias a la sede de la Fundación de

Protección Social de la Policía Metropolitana (Fundapol) en Cotiza, para exigir el pago de unos créditos. (EUD, 29-10-2002, Rafael Romero, Ciudad). Estas acciones desencadenaron en el desalojo de los trabajadores de Fundapol, a pesar de la mediación intentada por la Defensoría del Pueblo. (EUD, 31-10-2002, Ciudad). Pero Caracas no era el único escenario en el que los policías reclamaban. En el Estado Trujillo, la policía llevaba más de 70 días de protestas por reivindicaciones laborales. El 8 de octubre, un grupo de más de 1.000 funcionarios protagonizaban la toma de la Gobernación de la entidad; el Gobernador atribuía la protesta a causas de orden político. (EUD, 9-10-2002, Nacional y Política).

Hablan los trabajadores del subterráneo

Francisco Torrealba, presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (Sitrameca), había anunciado, el 31 de septiembre, la convocatoria a un paro. Sin embargo, los 4.800 trabajadores del Metro de Caracas recibieron la primera parte de un bono de seis millones de bolívares que fue aprobado durante el mes de agosto, por lo que la paralización ya no se justificaba. (EUD, 1-10-2002, Migdalis Cañizales V., Ciudad). Muchos opinaban que la participación de Torrealba sólo buscaba figurar ante el sindicato, dado que el Tribunal Supremo de Justicia había anunciado la celebración de elecciones sindicales en 60 días hábiles. (EUD, 2-10-2002, María Elisa Espinosa, Ciudad). Sin embargo, la opinión de algunos de los trabajadores activos del Metro era distinta a la de la directiva y miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro de Caracas, que aplaudían la gestión de Torrealba para que el bono fuera extendido a éstos. (EUD, 7-10-2002, María Elisa Espinosa, Ciudad). En todo caso, las expectativas estaban centradas en la elección de la nueva junta directiva de Sitrameca, que ya habían sido acordadas para el mes de diciembre. (EUD, 30-10-2002, María Elisa Espinosa, Ciudad).

Los galenos protestan

Los médicos del Hospital José Gregorio Hernández se encontraban en paro. A punto de que esta institución cumpliera 30 años, las jubilaciones eran uno de sus mayores problemas, debido a que el Ministerio de Salud y Asistencia Social no había efectuado los trámites para pagarles a los empleados cuya edad laboral había expirado, ni a los incapacitados. (EUD, 2-10-2002, Ciudad).

Los médicos dependientes de la Alcaldía Mayor también encontraban razones para reclamar. A partir de las ocho de la mañana del 14 de octubre, los tres mil médicos activos y jubilados decidirían, en referendo, las acciones de protesta para presionar al alcalde Alfredo Peña a fin de que les cancelara las deudas asumidas y cumpliera las 21 cláusulas de la convención colectiva de condiciones de trabajo, que según ellos eran totalmente ignoradas. (EUD, 14-10-2002, María Yolanda García, Ciudad). Sin embargo, unos 300 médicos no pudieron expresar su voto pues en algunos centros de salud no se instalaron mesas de votación. (EUD, 17-10-2002, Ciudad). En todo caso, Fernando Bianco, presidente del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano anunciaba medidas de conflicto contra la Alcaldía Mayor,

aún cuando algunos calificaban sus intenciones de políticas. (EUD, 28-10-2002, Ciudad). El conflicto no cesaba y los médicos demandaban la cancelación de los pasivos laborales. El 29 de octubre, de seis de la mañana a seis de la tarde, empleados, obreros y demás personal de la Alcaldía Mayor se mantuvieron de brazos caídos. Estaba planteada la idea de efectuar un paro de actividades indefinido. (EUD, 30-10-2002, Ciudad).

Las clases también se dictaban en las calles

El 2 de octubre, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional le realizó una larga, intensa y debatida interpelación al Ministro de Educación Superior, Héctor Navarro, para buscar salidas a la crisis del sector. Al encuentro asistieron los presidentes de las federaciones de profesores universitarios y de institutos y colegios universitarios, José Rafael Casal y Juan Román, respectivamente. La petición parecía ser la misma: “democratizar las instituciones y honrar los pagos, so pena de agudizar el actual conflicto nacional”. (EUD, 3-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

El 8 de octubre, en demanda de las reivindicaciones económicas, se efectuaba un paro de 24 horas en las 21 universidades públicas nacionales, convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv). (EUD, 8-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). El paro fue posteriormente extendido a 48 horas, aunque la iniciativa fue calificada por algunos como un rotundo fracaso, como el caso de Luis Fuenmayor Toro, director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), quien además puso sobre la mesa la posibilidad de pagar con bonos públicos las deudas por la homologación salarial y otras incidencias salariales, al tiempo en que los profesores estudiaban la posibilidad de extender el paro a 72 horas, pues no estarían dispuestos a “trabajar por bolívares de papel”. (EUD, 18-10-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Otros sectores también protestaban

Los trabajadores de Imparques protestaban por las deudas laborales que mantenían con ellos desde el año 1997. (EUD, 5-10-2002, Migdalis Cañizales V., Ciudad).

Cincuenta mil trabajadores de la Alcaldía Metropolitana amenazaban con paralizar las actividades para exigirle al gobierno el pago de 300 millones que se les adeudaban por pasivos laborales. (EUD, 25-10-2002, Ciudad).

En Sidor, los trabajadores se mantenían en paro desde el 28 de octubre, protestando por el pago de una bonificación salarial. (EUD, 30-10-2002, Economía).

Noviembre de 2002

A pesar de la opinión de muchos de los dirigentes de la oposición, quienes recomendaban prudencia, y de los esfuerzos en la negociación, la idea de un paro

general indefinido cobraba fuerza hasta materializarse, lo cual exigía el protagonismo de los representantes sindicales y empresariales quienes se convirtieron en líderes y estrategas de la medida. La conformación de la mesa de negociación y acuerdos, a pesar de propiciar acercamientos y diálogos, no arrojó resultados palpables durante este mes que finaliza con la radicalización del conflicto político en el país.

LA RUTA AL PARO NACIONAL

Militares presionan a la CTV y a otros sectores

A principios del mes de noviembre, los altos oficiales, declarados en desobediencia "legítima", ratificaban su intención de convocar a un paro general indefinido con o sin el apoyo de la CTV. En conversación sostenida con César Gaviria y en reuniones con distintos sectores del país, insistieron en que no son golpistas y radicalizaron su posición frente al paro. Los oficiales insisten en pedir la renuncia del presidente Hugo Chávez sin pasar por un llamado previo a elecciones, estrategia que no comparte la Coordinadora Democrática. Alejandro Armas, miembro del organismo, expresó que existían diferencias pero que el objetivo lo compartían: la salida del Jefe de Estado (EUD, 1-11-2002, Alejandra Hernández).

El 2 de noviembre de 2002, en declaraciones realizadas a un diario capitalino, el líder de los militares disidentes, el General Enrique Medina Gómez, afirmaba que estaban dadas las condiciones para una huelga general indefinida y que dependía de la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática fijar la fecha exacta de la paralización (EUD, 2-11-2002, Alejandra Hernández). Otros sectores consideraron inconveniente el llamado de los militares, en tal sentido los Directivos de la Asociación Civil Asamblea de Educación, Leonardo Carvajal y Jesús Torrealba, indicaron que esa responsabilidad le correspondía a los dirigentes sindicales y empresariales. Torrealba hizo una invitación "cordial pero firme" para que se retiren de la plaza: "No permitamos que esa manifestación se desgaste sino que tenga un cierre triunfal..." (EUD, 2-11-2002, Elvia Gómez, Nacional y Política).

Mientras tanto el Inspector del Ejército, Melvin López Hidalgo, hacía un llamado a los militares disidentes a reincorporarse a la Fuerza pues de lo contrario serían sometidos a Juicio ante la Corte Marcial por deserción (EUD, 4-11-2002, Sara Carolina Díaz, Nacional y Política).

La CTV responde a militares

Manuel Cova, Secretario General de la CTV, manifestó que el paro nacional indefinido sería la última salida y marcó distancia con las "voces agoreras" que lo anunciaban. El representante de la CTV insistía en la importancia de seguir la ruta del diálogo con la OEA para definir las bases de la negociación la cual debía circunscribirse a resolver la situación por la vía electoral (EUD, 2-11-2002, Nacional y Política).

Industriales hacen un llamado al Ejecutivo a respetar la negociación

El directorio de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), tras una reunión extraordinaria, acordó ir a un paro indefinido "si el sector oficial boicotea el curso de las negociaciones de las mesas de trabajo". Mediante un comunicado leído por el presidente del organismo, Lope Mendoza, y avalado por ex presidentes de la Institución y presidentes de las Cámaras regionales y sectoriales, Conindustria fijó posición sobre la situación nacional y el conflicto político por el que atravesaba el país (EUD, 3-11-2002, Mariela León, Nacional y Política).

El protagonismo político de la CTV genera reacciones violentas

A finales de la tarde del 4 de noviembre de 2004, representantes del chavismo arremetían de manera violenta en contra de la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, generando destrozos millonarios. El asalto, protagonizado por unos 20 motorizados y treinta sujetos a pie con las caras cubiertas por pañuelos, tomó por sorpresa a la vigilancia de la Institución. (EUD, 5-11-2002, Félix Carmona, Ciudad).

Días más tarde se informaba en prensa sobre nuevos ataques a las sedes de la CTV y Fedecámaras. Ambos ataques que consistieron en la colocación de explosivos, se llevaban a cabo en la madrugada del día 10 de Noviembre de 2002 con una separación en tiempo de media hora de diferencia. (EUD, 11-11-2002, Ciudad).

Ante los hechos, Carlos Ortega, presidente de la CTV, declaró que el ataque no era otra cosa que una "estrategia diabólica" del Gobierno para que la oposición se levante de la mesa de negociación y agregó que "... ni con armas químicas podrán derrotar al movimiento sindical venezolano". Por su parte, Carlos Fernández, Presidente de Fedecámaras, no dudó en acusar a grupos violentos afectos al oficialismo como los responsables de los ataques afirmando que el paro ya estaba activado. (EUD, 11-11-2002, Sara Carolina Díaz, Nacional y Política).

Fedecámas y la CTV también advierten al Gobierno

Carlos Fernández y Carlos Ortega, presidentes de Fedecámaras y la CTV, en declaraciones por separado, condicionaban la convocatoria a un paro indefinido a la actitud del Gobierno en la mesa de negociaciones. Ortega afirmaba que la convocatoria a paro debía ser aprobada y consultada con todos los sectores de la Sociedad Civil. (EUD, 6-11-2002, Nacional y Política).

Arranca cuenta regresiva

En reunión extraordinaria, el Comité Ejecutivo de la CTV acordaba la activación de los mecanismos para convocar a paro cívico indefinido. Por otra parte, el presidente de Fedecámaras, Carlos Ortega declaraba su intención de reunirse con los militares disidentes para unificar criterios en torno a la paralización. El paro tendría como objetivo la salida del presidente Hugo Chávez. La reacción se genera tras la petición del presidente de la República de solicitar ante el Tribunal Supremo que se

desconociera a la directiva del Consejo Nacional Electoral, lo que a juicio de la oposición era una medida para obstaculizar una salida electoral. (EUD, 7-11-2002, Mariela León, Nacional y Política).

Instalada mesa de negociación

Luego de varios meses de conversaciones entre el gobierno y la oposición, fue instalada la mesa de negociación y acuerdos. Representantes del Gobierno y de la oposición con la intermediación del secretario General de la OEA, César Gaviria, preparaban una agenda de discusión cuyo principal objetivo sería la búsqueda de una salida al conflicto político por la vía electoral. Entre los temas a debatir propuestos por la Organización de Estados Americanos destacaban: el fortalecimiento del sistema electoral, la conformación de una comisión de la verdad y el desarme de la población civil. (EUD, 8-11-2002, Rodolfo Cardona, Nacional y Política).

El primer encuentro de la mesa se realizó en un ambiente tenso donde la Coordinadora Democrática se negó a discutir sobre el paro nacional. No obstante, los participantes calificaron las seis horas de duración del encuentro como positivas. (EUD, 9-11-2002, Nacional y Política).

Se inicia negociación electoral en la mesa de negociación

El lunes 11 de noviembre de 2002, representantes del gobierno y la oposición iniciaban uno de los puntos que se consideraban como más álgidos en la negociación, la vía electoral. Los 12 integrantes de la mesa ya habían fijado las reglas de juego que regirían las conversaciones y se encontraban en una etapa de "tanteo" para medir fortalezas y debilidades. (EUD, 11-11-2002, Taynem Hernández, Nacional y Política).

Dueños de medios de comunicación fijan postura

En una interesante entrevista realizada por el periodista Francisco Olivares, Marcer Granier, dueño de una de las empresas IBC y responsable de la gerencia de Radio Caracas Televisión, opinaba sobre la situación del país, la crisis y riesgo al que se enfrentaban los periodistas durante el ejercicio profesional. Granier criticaba la violencia de la que eran víctimas reporteros y periodistas de diferentes medios y la postura asumida por el Gobierno, que permitía que actos de vandalismo y agresión se realizaran con total impunidad. Además, hizo énfasis en la necesidad de encontrar salidas políticas a la crisis, resaltó la importancia del referéndum y de la mesa de diálogo. (EUD, 11-11-2002, Francisco Olivares, Nacional y Política).

El Desarrollo de las discusiones en la Mesa de Negociación

Ya para mediados de Noviembre la dinámica de las negociaciones desarrolladas por Gobierno y Oposición con la Intermediación del Secretario General de la OEA arrojaban ciertas tendencias, lo cual generaba un clima de poca confianza en el país en lo que respecta a acuerdos y salidas. Posiciones encontradas, ausencias justificadas o no, hacían pensar que la crisis política se agudizaría. Ya para esta

fecha la oposición ejercía presión anunciando el paro indefinido. En este sentido, Froilan Barrios, Secretario Ejecutivo de la CTV, informaba que se tenía previsto recorrer el territorio nacional para celebrar asambleas con las federaciones y sindicatos de base, destacaba que en esos encuentros participarían representantes de Fedecámaras y de la Coordinadora Democrática. (EUD, 13-11-2002, Gustavo Mendez, Nacional y Política).

Mientras tanto la CTV, Fedecámaras, la Coordinadora Democrática y los Militares disidentes suscribían un documento compromiso para la reconstrucción. El texto establecía la irreversibilidad del sistema democrático y el mantenimiento de la estabilidad política. (EUD, 13-11-2002, Elvia Gómez, Nacional y Política).

La negociación continuaba y mientras tanto los representantes de la oposición activaban mecanismos de consulta para decidir sobre la factibilidad del paro. Una de las consultas realizadas se centró en el sector comercio, cuyos representantes se inclinaban a aceptarlo pero condicionaban su apoyo a la definición de ciertos aspectos relacionados con la convocatoria, la duración, etc. Varios de los comerciantes opinaban que, de realizarse, debía pensarse en el mes de Noviembre y se negaban que éste se extendiera hasta Diciembre. (EUD, 14-11-2002, Mariela León, Economía).

Poco a poco algunos sectores hacían oír su voz, este es el caso del sector petrolero que ya venía confrontando problemas de tipo político. En Maracaibo un grupo de trabajadores del área de Producción y Exploración continuaba con sus protestas con cacerolas, pancartas y altavoces; reiterando su rechazo a la politización de la industria por parte del sector oficialista. También Caracas, específicamente la torre la Campiña era escenario de protestas. (EUD, 16-11-2002, Mónica Castro, Nacional y Política).

El 16 de noviembre de 2002, en un acuerdo inédito en la historia de Petróleos de Venezuela, los empleados y obreros suscribían un compromiso por la defensa de la institucionalidad de la compañía, la salida democrática a la crisis y su respaldo en caso de llamarse a un paro cívico nacional indefinido. (EUD, 17-11-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Semana crucial para el paro

La semana que se inicia el lunes 18 de noviembre de 2002, resultaba clave para la decisión del paro indefinido. A partir de esta fecha la CTV y Fedecámaras evaluarían la decisión definitiva en reuniones y comités extraordinarios, donde participarían Federaciones nacionales y regionales. (EUD, 18-11-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

La agenda de la oposición incluía protestas simultáneas en todo el país para rechazar la violencia y ratificar el llamado a referéndum. Pablo Castro, director de Contratación y Conflictos de la CTV, informaba que las acciones de protestas prepararían el camino al paro indefinido. (EN, 19-11-2002, Ana Díaz, D/6).

El martes 19, Carlos Fernández, Presidente de Fedecámaras, declaraba que el paro estaba activado y que sólo esperaban por la decisión de la Coordinadora

Democrática para decretarlo; afirmaba que el sector empresarial había decidido declararse en desobediencia civil "... para impedir que se instaure en el país un régimen totalitario y castrista" (EN, 19-11-2002, Katuska Hernández, Economía, D/6).

Mientras esto ocurría, la Coordinadora Democrática salía al paso a declaraciones realizadas por Enrique Medina Gómez, vocero de los militares declarados en desobediencia en la Plaza Altamira, quien había convocado al paro nacional. A través de un comunicado de prensa la Coordinadora Democrática respondía al General que el paro no sería inducido por la desesperación y que ningún acto de justa impaciencia o entendible desesperación rompería con su unidad. (EUD, 20-11-2002, Nacional y Política).

Todo listo para el llamado al paro

Finalmente, el jueves 21 de noviembre, se daba a conocer que Fedecámaras, la CTV y los partidos políticos habían llegado a un acuerdo para hacer el llamado al paro. La decisión se tomó tras cuatro horas y media de intensas discusiones. Aunque no había sido divulgado, la prensa anunciaba que el paro no sería indefinido y que tendría una duración máxima de 24 horas. (EUD, 21-11-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Antonio Ledezma, representante de la Coordinadora Democrática, afirmaba que el paro debía tener resultados fulminantes porque estaba relacionado directamente a un cambio de gobierno que estaba aturdiendo a todo el mundo. (EUD, 21-11-2002, Elvia Gómez, Nacional y Política).

Paralelamente, representantes de la oposición en el Zulia convocaban a un paro que se iniciaría el día lunes 25 de noviembre, el cual se desarrollaría, y así lo enfatizaban, independientemente de la postura que asumiera la CTV. El grupo opositor en la entidad occidental, declarado en "frente de guerra" ratificó su petición en torno a la renuncia del presidente de la República. El encuentro fue liderizado por el dirigente político y Secretario Ejecutivo de la CTV, Alfredo Ramos (EUD, 21-11-2002, Monica Castro, Nacional y Política).

La Coordinadora fija la fecha: 2D

A las seis de la tarde del jueves 21 de noviembre de 2002, en declaración conjunta, Carlos Ortega y Carlos Fernández, presidentes del la CTV y Fedecámaras y como voceros de la Coordinadora Democrática, fijaban la fecha de inicio del paro nacional para el 2 de diciembre de 2002. Tras una serie de consultas la decisión se tomaba considerando la posición de los sectores radicales y moderados de la oposición. Los dirigentes no precisaron la duración de la paralización y no descartaron la posibilidad de adelantar la acción de protesta. (EUD, 21-11-2002, Elvia Gómez, Nacional y Política).

Ante el anuncio, César Gaviria, Secretario General de la OEA y mediador en la mesa de negociación, mostró su preocupación e instó a los representantes de la oposición a aplazar la decisión. Gaviria también manifestó públicamente su

"suprema preocupación" por la intervención de la Policía Metropolitana. (EUD, 22-11-2002, Rodolfo Cardona Marrero y Gustavo Méndez, Nacional y Política).

El hecho también generó la reacción inmediata por parte del Gobierno quien a través de un comunicado leído por la Ministra del Trabajo y miembro de la mesa de negociación, María Cristina Iglesias, calificaba la acción de golpista: "... convocar a una huelga o paro con características claramente golpistas constituye un desafío a la voluntad democrática de la mayoría determinante del pueblo venezolano..." (EUD, 22-11-2002, Nacional y Política). El presidente de la República fue tajante al afirmar que no renunciaría a su mandato de ningún modo (EUD, 25-11-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

Durante los días que siguieron al anuncio diversos sectores se sumaron y ratificaron su intención a participar en la acción. Los representantes de Fedepetrol se contaron entre los primeros en manifestar su apoyo solidario y su intención de sumarse activamente. (EUD, 22-11-2002, Nacional y Política). Durante estas fechas, los representantes de la CTV profundizaron en conversaciones con representantes del sector petrolero, eléctrico, salud, comunicación, transporte y educación. (EUD, 23-11-2002, Sara Carolina Díaz, Nacional y Política).

Los representantes de la sociedad civil: Queremos Elegir, Ciudadanía Activa y Movimiento 1011, agrupados en la "Alianza Cívica" ofrecían ideas para organizar el paro cívico y garantizar su éxito. (EUD, 24-11-2002, Nacional y Política).

Los empresarios reunidos en el Consejo Nacional Ordinario de Fedecámaras respaldaron el llamado al paro y exhortaron a la sociedad civil a participar en las acciones de calle (EUD, 26-11-2002, Mariela León, Nacional y Política). Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, ratificaba el llamado al paro. (EUD, 28-11-2002, Mariela León, Nacional y Política).

El sector transporte, por intermedio de su vocero, Nelson Ojeda Valenzuela en representación de la Cámara de Empresas de Transporte Interurbano, la Cámara de Empresas de Transporte Extraurbano, la Cámara de Autobuses de Centro Occidente y la Cámara de Transporte Público de Personas del Centro, informó que se detendrían 9 mil autobuses y que el transporte público interurbano se sumaría al paro. (EUD, 29-11-2002, Teresa de Vincenzo, Nacional y Política).

El paro era el centro de todas las discusiones en el ámbito político, empresarial, sindical y de la sociedad civil (EUD, 27-11-2002, Nacional y Política).

La Coordinadora Democrática condiciona la suspensión del paro

De acuerdo a declaraciones de Carlos Ortega, presidente de la CTV y vocero de la Coordinadora Democrática, declaró que la protesta estaba activada y que la única forma de suspenderla era que el gobierno cumpliera con tres condiciones: 1) convocatoria a referéndum consultivo, 2) desmilitarización de la capital de la República; y 3) cese de la intervención de la Policía Metropolitana (EN, 28-11-2002, Marianela Palacios, Política, D/2) y (EUD, 28-11-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Horas antes de realizar el paro, Carlos Ortega, afirmaba que "...de las señales que envíe el gobierno dependerá la extensión de la huelga". (EUD, 30-11-

2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). El empresariado esperaba una paralización del 80% del aparato productivo (EUD, 30-11-2002, Mariela León, Nacional y Política)

Trabajadores petroleros continuaban presionando

Con acciones puntuales en todo el país, los trabajadores de la industria petrolera presionaban al sector oficial lo cual generaba un ambiente de gran conflictividad. Durante una entrevista realizada a Alí Rodríguez Araque, Presidente de la Empresa, el dirigente emplazó a la mesa de diálogo a encontrar una salida y expresó: "La política se enquistó en PDVSA". (EUD, 15-11-2002, Mariela León, Nacional y Política). La Junta Directiva de la Institución, mediante comunicado de prensa, apoyó al Presidente de la Corporación e hicieron un llamado de atención a quienes propiciaban la inestabilidad. (EUD, 15-11-2002, Patricia Ventura, Nacional y Política). Durante estas fechas se vivían momentos de tensión en algunas sedes, este es el caso de la sede de Chuao donde efectivos de la Guardia Nacional se instalaron en su entrada lo cual causó sorpresa e incertidumbre. (EUD, 15-11-2002, Nacional y Política). El martes 19 de noviembre trabajadores de PDVSA asistían a la marcha opositora en protesta por la intervención de la Policía Metropolitana (EN, 19-11-2002, Alfredo Carquez Savedra, Economía, D/6)

Todo hacía pensar que Petróleos de Venezuela entraría en crisis. Juan Fernández, líder de Gente del Petróleo, ante la inminente militarización de PDVSA generada por el paro, advertía que no operarían bajo amenaza o con una organización paralela. (EUD, 30-11-2002, Patricia Ventura, Economía). A finales de mes se publicaban rumores sobre la conformación de una Junta Directiva paralela que integrarían: Adina Bastidas, Carlos Mendoza Potellá, Víctor Poleo y Gastón Parra, lo cual se traducía en mayor confusión. (EUD, 30-11-2002, Economía).

¿Y la mesa de negociación?

El anuncio del paro impactó directamente la mesa de negociación y acuerdos. Los representantes del Gobierno trataron de debatir sobre el tema mientras que la oposición insistía en discutir sobre la salida electoral. Timoteo Zambrano, representante de la oposición, criticaba el discurso "maniqueista" del gobierno en la mesa "que insiste en calificar de golpista toda salida que no se ajusta a la figura de un referendo revocatorio" (EUD, 22-11-2002, Nacional y Política). Por su parte, Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación, Cultura y Deportes y miembro de la mesa de negociación, afirmaba que el anuncio era un trancazo a la Constitución y a la mesa. (EUD, 22-11-2002, Rodolfo Cardona, Nacional y Política).

El vicepresidente de la República y miembro de la mesa de negociación, José Vicente Rangel, afirmaba que el gobierno no aceptaba amenazas ni chantajes "... que terminen de lanzar el paro..." (EUD, 23-11-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política). "El paro es ilegal, golpista y terrorista" (EN, 28-11-2002, José Manuel Valladares y Adela Leal, Política, D/2).

Intervención de la Policía Metropolitana ¿una provocación?

El 17 de Noviembre de 2002, la prensa reseñaba la intervención de la Policía Metropolitana, realizada en la madrugada del sábado 16 de noviembre por el Ministerio de Interior y Justicia. El hecho generó fuertes reacciones de los representantes de la oposición quienes acusaron al Gobierno de interferir en el proceso de negociación. Timoteo Zambrano, vocero de la Coordinadora Democrática rechazó la medida afirmando que era violatoria de la Carta Democrática Interamericana y de la Declaración de Principios por la Democracia y la Paz. La oposición anunciaba marchas de protesta. (EUD, 17-11-2002, Rodolfo Cardona Marrero, Nacional y Política).

Carlos Ortega no se mostró sorprendido por la acción ya que a su juicio representaba otra fase del proyecto autoritario del Presidente Chávez. "En esta oportunidad fue contra la PM, posteriormente serán otras Instituciones". Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, informaba que la institución efectuaría un directorio ampliado para decidir si la intervención ameritaba la convocatoria a un paro indefinido. (EUD, 17-11-2002, Nacional y Política).

Por su parte, los parlamentarios oficialistas justificaban la acción y acusaban al Alcalde Alfredo Peña de incompetente. (EUD, 17-11-2002, Morelia Morillo, Nacional y Política).

Al día siguiente de la toma de la Policía Metropolitana, el presidente de la República, Hugo Chávez durante el programa "Aló Presidente" declaraba que la medida sería temporal y acusaba a Alfredo Peña de un manejo personalista de la Institución, "... los cuerpos de seguridad no pueden ser manipulados para convertirlos en punta de lanza de a oposición..." (UN, 18-11-2002, Celina Carquez).

La reacción de la oposición ante la medida fue inmediata y en una marcha que partió de la Plaza Altamira expresó su rechazo a la medida. A esta marcha asistieron representantes de diversos sectores de la oposición. Gobernadores, Alcaldes, líderes de diversos partidos y de la sociedad civil hacían un llamado de atención a lo que consideraban una violación de la autonomía de las instituciones "... estamos exigiendo que se respete la Carta Magna en cuanto a la Autonomía de Poderes: municipal, regional y nacional ..." (EN, 20-11-2002, Yesmariana Gómez y Mirelis Morales, Política, D/2).

En la mesa de negociación, a pesar de la gestiones del Secretario General de la OEA, César Gaviria, no parecía lograrse ningún avance. (EUD, 22-11-2002, Nacional y Política).

CONFLICTOS LABORALES EN DIVERSOS SECTORES

Finaliza el paro nacional de docentes. Amenazas de paro indefinido.

El día jueves 31 de octubre finalizaba el paro nacional de 48 horas protagonizado por los docentes universitarios y ante el silencio del Gobierno Nacional, los

consideraban la posibilidad de llamar a un paro indefinido. (EUD, 1-11-2002, Gustavo Méndez).

Paro en la Zona del Hierro

El paro de la acería llegaba a su cuarto día mientras los representantes de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) adelantan negociaciones. El paro se origina por diferencias que giran en torno al pago de una bonificación pendiente desde el mes de Septiembre cuando Sidor y Suttiss suscribieron acuerdos relativos al cálculo del salario. Así lo informó Yunis Hernández, de la unidad Matancera (EUD, 1-11-2002, Economía). Este conflicto se resolvería al día siguiente cuando los representantes del sindicato declaraban que el acuerdo logrado cubría sus expectativas (EUD, 2-11-2002, Economía).

Maestros en huelga indefinida toman zona educativa en el Zulia

Unos trescientos maestros interinos, que se mantenían en huelga durante tres días, tomaban indefinidamente la sede de la zona educativa en el estado Zulia, generando un caos por la obstaculización de las actividades administrativas y docentes. La causa de la protesta era la dilación en el nombramiento de los maestros titulares que, según la dirigente Zenaida Navas, era un problema que tenía más de diez años sin resolverse. Los maestros denunciaban la “contribución obligada” o “cobro por puesto de trabajo” por parte de algunos funcionarios de la administración pública regional (EUD, 6-11-2002, Mónica Castro, Economía). Días más tarde luego de una suspensión temporal de sus movilizaciones por la Feria de La Chinita, los maestros retomaban las acciones conflictivas tomando las instalaciones de la zona educativa. (EUD, 21-11-2002, Mónica Castro, Nacional y Política)

Conflicto laboral en Aeropostal

Durante la primera semana del mes de Noviembre, un grupo de 30 pilotos de la línea aérea Aeropostal, paralizaron las actividades por más de 4 horas solicitando reivindicaciones laborales. El motivo de la protesta era el supuesto despido de 5 pilotos por orden del presidente de la compañía. Los pilotos afirmaron que no tenían buenas condiciones de trabajo. Ante esta medida el presidente de la compañía Nelson Ramíz afirmó “puedo botar a quien yo quiera si le pago liquidación doble” (EUD, 7-11-2002, Economía).

Continua paralización de los médicos en el Sector Público

En un artículo de opinión, Douglas León Natera, Presidente de la Federación Médica de Venezuela expone y justifica las causas por las cuales la gran mayoría de los médicos del sector público habían protagonizado paros o conflictos durante meses. De acuerdo al dirigente, en Venezuela existen leyes que no se cumplen y denuncia que el gobierno no sólo no garantiza su cumplimiento sino que propicia su violación, poniendo como ejemplo el ejercicio ilegal de la profesión por parte de

médicos cubanos. A esta situación de crisis por la que atraviesa el sector salud se suma el incumplimiento del contrato colectivo por conceptos como el pago del bono nocturno, horas extras, fines de semana y días festivos. Los médicos pasan hasta un año sin cobrar... "desde finales de octubre de 2001, nos abocamos en exigir el cumplimiento de la contratación colectiva con los representantes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) e Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME), un año de intensa presión por la intransigencia, inoperancia, falta de vocación de servicio, irresponsabilidad y pocas ganas de resolver la situación por la vía conciliatoria... durante el 2002 se realizaron más de 130 reuniones con representantes del Ejecutivo... basándonos en tres puntos fundamentales que son: 1) dotación hospitalaria, cuya falla en todos los hospitales del país es más de 90% de materiales médico quirúrgicos, insumos, medicamentos de equipos médicos e infraestructura; 2) incumplimiento de gran número de cláusulas establecidas de mutuo acuerdo en la convención colectiva; 3) indefinición de la tabla salarial. (EUD, 10-11-2002, Douglas León Natera, Opinión).

Paralización en el Metro

El lunes 11 de Noviembre de 2002 el Metro de Caracas amanecía inactivo a causa de una huelga protagonizada por un grupo de operadores quienes reclamaban el incumplimiento de varias cláusulas contractuales. (EUD, 12-11-2002, Marisol Decarli, Ciudad).

Trabajadores toman sede del Instituto Nacional de Canalizaciones

Durante la mañana del martes 12 de noviembre de 2002, un grupo de trabajadores pertenecientes al Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) tomaron la sede en protestas por las precarias condiciones laborales y la creciente sustitución de dragas extranjeras y equipos importados por los de fabricación nacional. Fernando Hevia, presidente del Sindicato de Empleados Públicos del INC, denunciaba que quince máquinas de dragado estaban paralizadas o estacionadas, lo cual dejaba sin empleo a más de dos mil trabajadores de la zona. Durante la toma, que tuvo una duración de cuatro horas, se paralizaron algunas actividades administrativas y se suspendieron varios procesos de mantenimiento. (EUD, 13-11-2002, Mónica Castro, Economía).

LA SEGURIDAD SOCIAL, ETERNO TEMA DE DISCUSIÓN

Ejecutivo incumple con cotizaciones al Seguro Social

En un reportaje realizado por la periodista Mayela Armas se denunciaba el incumplimiento por parte del Ejecutivo de sus compromisos para con el Seguro Social, lo cual evidenciaba problemas de tipo financiero. De acuerdo a lo informado, el Gobierno debía haber entregado 400 millardos de bolívares por concepto de

cotizaciones de trabajadores de la Administración Pública, no obstante de ese monto sólo había aportado un 5%. El aporte al organismo es del 14% del salario de cotización, de ese monto el 70% es depositado por el patrono y el 30% por el empleado. Los recursos son utilizados para cubrir parte del presupuesto del Fondo de Asistencia Médica del IVSS. Las empresas públicas y privadas mantienen una acreencia de más de 900 millardos de bolívares con el ente, a lo cual se suma la evasión. Además, el Ejecutivo tampoco había efectuado las contribuciones al régimen de vivienda. El Gobierno tiene que depositar 90 millardos de bolívares mensuales pero desde principios de año no lo había hecho. (EUD, 5-11-2002, Mayela Armas, Economía).

Diputados discuten propuestas para la reforma de la Seguridad Social

Luego de la aprobación en primera discusión del proyecto de reforma de la Seguridad Social durante el mes de noviembre de 2001, la Comisión de Desarrollo Social, que tenía prevista su discusión, recibía una nueva propuesta por parte de algunos diputados la cual mantenía al IVSS con más funciones. Eso significaba que la discusión se iba a realizar sobre tres propuestas lo cual retrasaría el cronograma para la toma de decisiones. (EUD, 6-11-2002, Economía).

En esa misma fecha se daba a conocer el incremento de 73% de la partida presupuestaria del 2003 destinada a la Seguridad Social. El gobierno tenía prevista una erogación de 4,5 billones de bolívares durante el 2003 para el pago de pensiones, jubilaciones, asistencia social al personal jubilado y pensionado, al Instituto de Prevención Social las Fuerzas Armadas, entre otros. En la exposición de motivos del presupuesto del 2003 se indica que la modernización del régimen de Seguridad Social representa un importante salto cuántico en la institucionalización del mecanismo de protección y bienestar de los trabajadores y en general de la población venezolana. (EUD, 6-11-2002, Economía).

Días más tarde, la presidenta de la Asociación de Promotores de Administradoras de Fondos de Pensiones, Norma de Dueñas, denunciaba que el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Social, no había sido sometido a discusión y que los parlamentarios ignoraban las observaciones hechas por el sector privado. (EUD, 11-11-2002, Economía).

El hecho es que la aprobación de la Ley generaba dudas y posiciones encontradas incluso entre los propios representantes del oficialismo quienes se debatían ente un sistema público y un sistema mixto, es decir, con la participación del sector privado. (EUD, 15-11-2002, Economía).

Plan de cobranza

En información de prensa se supo que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales diseñaría un plan de cobranza para recuperar 730 millardos de bolívares que le adeudaban empresas públicas y privadas. Se conoció, además, que el 75% de la deuda corresponde al sector público y el 25% al privado. El plan fue anunciado por el presidente del Instituto, Edgar González. (UN, 19-11-2002, Miriam Morillo, La Vida).

Se mantendrán regímenes especiales

Según se dio a conocer en informaciones de prensa, los regímenes especiales de pensiones que mantenían algunas instituciones públicas no serían eliminados por el nuevo sistema de Seguridad Social. El proyecto de Ley que estaba por discutirse señalaba que al entrar en vigencia, todos los trabajadores que están afiliados a los esquemas especiales tendrían que cotizar al viejo y al nuevo modelo. (EUD, 23-11-2002, Mayela Armas, Economía).

Impacto Financiero de la Reforma del Sistema de Seguridad Social

De acuerdo a cifras preliminares presentadas por el Ministerio de Finanzas, la reforma de la Seguridad Social generaría un costo fiscal entre un 11,5% y 12% del Producto Interno Bruto. El impacto en los cambios se debe a que la propuesta diseñada por el Parlamento es un esquema Público. (EUD, 30-11-2002, Mayela Armas, Economía).

LA INFORMALIDAD, EL DESEMPLEO Y LA INFLACIÓN CARACTERIZAN AL MERCADO LABORAL

Altas cifras de desempleo e informalidad

De acuerdo a información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo durante el mes de agosto se ubicaba en 16,2%, lo cual representa un incremento del 2,3% con respecto al mismo período del año 2001. Por otra parte, la cifra de informalidad alcanzó el 52% de la Población Económicamente Activa, un 1,9% más de la cifra correspondiente al año 2001. (EUD, 2-11-2002, Raquel Barreiro, Economía).

En esa misma fecha el presidente Hugo Chávez declaraba que con el pago de los aguinaldos a partir de mediados de noviembre la cifra podría bajar a 11% o 12%. Además se refirió al crecimiento de la economía informal a través de la cual la población habría resuelto de alguna manera su problema de ingreso real. (EUD, 2-11-2002, Economía).

El mercado laboral en el 2002: ¿paz laboral o bomba a punto de estallar?

En un reportaje de la periodista Patricia Ventura Nicolás se hace referencia a la situación del mercado laboral venezolano durante el año 2002, el cual se caracterizaba por una fuerte caída del poder adquisitivo y un incremento del desempleo y la informalidad. Además la periodista hace mención al nivel de conflictividad del mercado. A este respecto, comenta, que si la conflictividad se entendiera en términos exclusivos de negociaciones contractuales, los diez meses del año 2002 parecen más tranquilos que los años anteriores de la administración Chavez. Esta percepción, así lo indica, quizás tiene su raíz en la rápida negociación del siempre polémico convenio colectivo petrolero, que durante el 2002 se negoció en tiempo récord. Sin embargo, esta misma suerte no la habían tenido los médicos y docentes quienes ya, durante largo tiempo, venían discutiendo sus respectivas

convenciones sin obtener buenos resultados. La gran incógnita recaía en los trabajadores de la Administración Pública a quienes se les vencía el contrato el 1ro de Diciembre de 2002. (EUD, 3-11-2002, Patricia Ventura Nicolas, Economía).

En otra reseña de esta misma fecha se informaba que durante el año 2002 se vencían 18 convenciones colectivas de la Administración Pública o empresas estatales, de las cuales sólo se habían concretado las firmas de dos (Petróleos de Venezuela y Edelca). Además se indicaba que la negociación del Convenio del Metro de Caracas se había postergado; que hasta la fecha se habían vencido siete de los dieciocho Convenios; y que, durante los meses restantes del año, se vencerían las siguientes Convenciones: IVIC, Seguro Social, Administración Pública (obreros y empleados), Venalum, Bauxilum, Carbonorca y Alcasa. Otro aspecto que se resaltó es que durante casi todo el año 2002 hubo inamovilidad laboral y que el Ejecutivo Nacional había anunciado extensiones de este control laboral en tres oportunidades (30, 90 y 82 días). (EUD, 3-11-2002, Economía).

Conindustria: las empresas son menos competitivas

Mediante un Análisis de Coyuntura Conindustria estimaba que al cierre del 2002 el sector industrial reportaría una disminución aproximada de mil industrias (pequeñas y medianas) y un desempleo de 16% (200 mil puestos de trabajo). El organismo atribuía esas cifras a la caída del PIB manufacturero entre 5% y 6%. De acuerdo al informe la situación económica, política y social signada por una gran incertidumbre hacen que las empresas venezolanas sean menos competitivas (EUD, 3-11-2002, Economía).

Resultados del CENSO 2001

En nota de prensa publicada el lunes 18 de noviembre de 2002, se presentan algunos de los resultados de CENSO 2001 relacionados con el mercado de trabajo: PEA: 15.419.648 (55,1% de la población total); Desempleados o fuera de la fuerza de trabajo: 7.715.264 (50% de la PEA); En la fuerza de trabajo: 7.704.384; En el Sector Informal: 3.240.678 (42,1%); En el Sector Formal: 4.352.484 (56,5%) (UN, 18-11-2002, Gabriela Iribarren, El País).

Diciembre de 2002

Este mes resultó realmente especial, no existe precedente en la vida democrática de Venezuela que se compare al conflicto político que explota durante diciembre de 2002. Los representantes de empresarios y trabajadores encarnados en Fedecámaras y la CTV se metieron hasta los tuétanos en la dinámica política del país, no sin consecuencias y efectos sobre sus estructuras y liderazgo. Se arriesgaba mucho al apostar todo a esta lucha de poderes, sin evaluar con suficiente objetividad al contrincante, subestimando su capacidad para soportar y responder... el resultado un país hecho pedazos, sumido en la más grave crisis petrolera de su historia y atrapado entre dos polos enfrentados por el poder.

PARO NACIONAL. EL TODO POR EL TODO

El primer día del mes de diciembre de 2002, la prensa reseñaba como noticia principal, diversos aspectos relacionados con el paro que brevemente se iniciaría. Hasta ese momento no se había decidido sobre su duración, al respecto, los representantes de la oposición afirmaban "todos sabemos cuando comienza la guerra, pero no cuando termina". El anuncio definitivo sobre su inicio lo realizó Carlos Ortega. Flanqueado por Carlos Fernández y el diputado Andrés Velásquez, el máximo representante de la CTV anunciaba que "por unanimidad y de manera concertada" la paralización se iniciaría a las 6 de la mañana del lunes 2 de diciembre de 2002. Luego del anuncio, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, explicó que las razones para la acción eran: presionar para encontrar la salida democrática a la crisis y apoyar a la mesa de negociación y acuerdos. Finalmente, Andrés Velásquez aprovechó la ocasión para denunciar un presunto plan preparado por el Ejecutivo Nacional para minimizar el alcance del paro nacional, el cual consistiría en la movilización de 18 mil vehículos desde el interior hacia la capital y así hacer creer que en Caracas nada se paró. (EUD, 1-12-2002, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).

Precedentes al cuarto paro en menos de un año

El paro que se iniciaba era el cuarto que se convocaba en menos de 365 días. La primera paralización realizada el 10 de diciembre de 2001 unía por primera vez en décadas a Fedecámaras y a la CTV en lucha común contra el contenido de los 49 decretos-ley contenidos en la Ley Habilitante. El éxito de la acción aunado a la "crisis meritocrática" de PDVSA en el mes de abril de 2002, dio pie a un segundo y más largo paro cívico en el territorio nacional, el paro sería de 24 horas pero finalmente se extendía 24 horas más y finalizaba con un anuncio de una huelga indefinida hasta que el primer mandatario nacional abandonara Miraflores. Seis meses después se convocaba a una tercera paralización. El 21 de octubre fue la fecha elegida para exigir un adelanto de las elecciones o la convocatoria a un referéndum consultivo. El plan era repetir el formato de abril pero la estrategia del ejecutivo y la poca adhesión llevó a los organizadores a desistir de la idea de prolongarlo. En lugar de la huelga se decidió apostar a una salida electoral y se inició un intenso operativo de recolección de firmas para solicitar un referéndum consultivo. Dos semanas después se entregaron ante el CNE dos millones de firmas. Estos hechos aunados a otros como la intervención de la policía metropolitana y los pocos avances en la mesa de negociación desencadenaron un nuevo paro "el cuarto y definitivo, según la oposición, contra Hugo Chávez" (EUD, 1-12-2002, Eugenio Martínez, Nacional y Política). Se estimaba que los paros anteriores habían sido un éxito, logrando entre el 80% y el 90% de acatamiento. (EUD, 1-12-2002, Eduardo Camel Anderson, Economía).

La Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) toma medidas.

Ante el anuncio, la Fuerza Bolivariana de Trabajadores afirmaba que tomaría acciones para garantizar el acceso a los centros de trabajo. Al respecto, Angel Rodríguez, representante de la organización chavista afirmaba: "nosotros venimos coordinando con diversos sectores, no solo de PPT y otros cercanos, sino también con factores socialcristianos y de Acción Democrática que no están de acuerdo con una huelga que no fue consultada con los trabajadores." (EUD, 1-12-2002, Nacional y Política).

¿Qué pasaría con la mesa de negociación?

Horas antes de su inicio se daba a conocer la suspensión, durante el paro, de las actividades en la mesa de negociación. La decisión se tomó luego de un intenso debate que se extendió por más de 13 horas en el que gobierno y la oposición no pudieron llegar a un acuerdo. (EUD, 1-12-2002, Sara Carolina Díaz y Taynem Hernández, Nacional y Política). Sin embargo, José Vicente Rangel, Vicepresidente de la República y miembro de la mesa de negociación manifestaba que la negociación no había fracasado y que debía seguir adelante. "...todos los procesos de paz son duros y difíciles..." (EUD, 1-12-2002, Taynem Hernández, Nacional y Política).

¿Y con la Industria Petrolera?

Para salir al paso a la situación de paro, la Junta Directiva de la empresa informó sobre la aplicación de la primera fase de un Plan de Contingencia. Concentrados particularmente en un plan preventivo, los objetivos específicos del plan eran mantener la continuidad operativa de la industria y tomar las acciones necesarias para garantizar el suministro normal de combustible, lubricantes, gas licuado, gas natural y demás productos en el territorio nacional. Para cumplir la misión, PDVSA mantenía un convenio con la Guardia Nacional. (EUD, 1-12-2002, Economía).

Para los entendidos la participación de PDVSA sería decisiva... "el petróleo lo decidirá todo" (EUD, 2-12-2002, Roberto Giusti, Economía).

"Por si acaso..." Los consumidores se apertrechan

De acuerdo a información de prensa, apenas un día antes del paro anunciado, tiendas y supermercados fueron abarrotados por compradores "nerviosos". Por segundo día consecutivo las ventas en automercados y afines registraban un incremento de aproximadamente 40%, según estimaciones de Nelson Da Gamma, líder de los empresarios del sector. (EUD, 2-12-2002, Eduardo Camel, Economía).

Amaneció de paro

Durante el primer día de la paralización no se reportaron hechos violentos ni conflictos importantes, para algunos el ritmo del día lunes se correspondía al de un domingo en la tarde, con comercios cerrados y poca circulación. (EUD, 3-12-2002, Eduardo Camel, Nacional y Política). Ante este panorama el gobierno, a través de su

Vicepresidente, José Vicente Rangel, sentenciaba una derrota de la oposición calculando un 80,85% de actividad. De igual forma, Diosdado Cabello, representante del oficialismo, desestimó la extensión de la huelga "llegará un momento cuando sólo se van a parar ellos mismos". (EUD, 3-12-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política). La región sur del país, específicamente en las empresas básicas se reportaba normalidad en las actividades (EUD, 3-12-2002, Economía).

En lo que respecta a la Industria Petrolera, la prensa informaba sobre la posibilidad de que se generaran problemas en el suministro de combustible por efectos del paro. Alí Rodríguez Araque, Presidente de la Industria, exhortaba a los trabajadores a cumplir con sus responsabilidades y les alertaba sobre la posibilidad de sanciones. (EUD, 3-12-2002, Mónica Castro, Economía).

Dirigentes deciden extenderlo: 24 horas más

Aún cuando las voces del oficialismo minimizaban el impacto del paro, la dirigencia de la oposición, encabezada por los representantes de la CTV y Fedecámaras, decidían extenderlo por 24 horas más. En rueda de prensa transmitida a las 6 pm por los principales canales del país, Carlos Ortega, anunciaba la decisión y afirmaba que la respuesta había sido contundente. Además denunciaba una campaña de intimidación, amenaza y persecución en contra de los trabajadores petroleros. "...de la actitud del gobierno este martes, dependerá que el paro se extienda por 24 horas más...". La CTV manejaba una cifra de acatamiento de entre el 79% y el 82%. El primer parte, a cargo del secretario ejecutivo de la CTV, Manuel Cova, se realizó a las 10 am. En él se confirmaba la presencia de los sectores más importantes del país: educación, 92%; salud, 90%; empleados públicos, 80%; petróleo, 82%; comercio, 90%; construcción, 95%; transporte, 55%; bebidas, 90%; agrícola, 90%; plástico, 90%; metalúrgicos, 70% y comunicaciones, 85%. (EUD, 3-12-2002, Gustavo Mendez, Nacional y Política).

Por su parte, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, desde la sede de la Institución, exhortaba a la sociedad civil a "seguir en la búsqueda democrática por encontrar una salida a la crisis política... el paro continúa y debe ser acatado por la mayoría de los venezolanos en forma pacífica...". Asimismo precisó la necesidad de "preservar la poca gasolina que queda ya que sabemos que habrá desabastecimiento de combustible". (EUD, 3-12-2002, Mariela León, Nacional y Política).

El paro continúa. Ahora de forma "activa"

Por tercer día, la Coordinadora Democrática, la CTV y Fedecámaras resolvían extender el paro cívico. Los representantes de la oposición denunciaban la falta de voluntad por parte del gobierno para encontrar una salida electoral. No obstante, lo que inclinó la balanza para que se tomara la decisión fue la represión de la que fueron víctimas un grupo de manifestantes por parte de la Guardia Nacional cuando protestaban frente de la sede de Pdvsa-Chuao. Carlos Ortega convocaba a la gente a la calle a protestar en forma pacífica, también hizo un llamado a César Gaviria,

Secretario General de la OEA, a activar la Carta Democrática. (EUD, 4-12-2002, Gustavo Mendez, Nacional y Política).

Un aspecto importante de la paralización era la situación de Pdvsa. Dos versiones muy distintas circulaban, pero el verdadero indicador era el mercado de combustible y su logística de distribución. (EUD, 4-12-2002, Mónica Castro y Patricia Ventura, Economía).

Las empresas de telecomunicaciones reportaban un ausentismo de 90%, así lo manifestaban los directivos de Telcel, Movilnet y Digitel. El presidente de Fetratel, Igor Lira, explicaba que el llamado al paro había sido acatado por un alto porcentaje de los trabajadores sindicalizados. (EUD, 4-12-2002, Elizabeth De Ornelas, Economía).

Buena parte del sector comercio acataba la medida, los principales centros comerciales mantenían sus puertas cerradas. Sin embargo, los pequeños comercios ubicados en ciertas zonas de la capital mantenían su actividad normal. Las actividades en los aeropuertos nacionales e internacionales se mostraban muy lentas. (EUD, 4-12-2002, Eduardo Camel, Ciudad) y (EUD, 4-12-2002, Elizabeth De Ornelas, Ciudad).

Se extiende el paro por un "mandato de la Sociedad Civil"

En vista de los resultados obtenidos y de la presión a la que había sido sometido el sector petrolero, la oposición decidía una nueva extensión del paro cívico por 24 horas más. Carlos Ortega justificaba la postura aduciendo que respondía a un "mandato de la sociedad civil... no podemos defraudarla" (EUD, 5-12-2002, Alejandra Hernández y Gustavo Méndez, Nacional y Política). Los empresarios, a través de sus representantes, manifestaban que no cederían hasta tanto se acordara una salida electoral. (EUD, 5-12-2002, Mariela León, Nacional y Política). Mientras tanto la mesa de negociación y acuerdos se mantenía congelada y la sociedad civil mantenía la presión en la calle mediante marchas y manifestaciones pacíficas. (EUD, 5-12-2002, Sara Carolina Díaz y Rodolfo Cardona Marrero, Nacional y Política).

Durante esta jornada, la prensa reseñaba algunos hechos violentos ocurridos en el interior del país. De las once concentraciones que se escenificaron, cinco terminaban con enfrentamientos entre oficialistas y opositores, que fueron fuertemente reprimidos por la Guardia Nacional y las policías regionales. (EUD, 5-12-2002, Jeanette Herrera, Nacional y Política).

El Gobierno manifestaba preocupación por la situación de Pdvsa, esto interrumpía los planes del presidente de la República, Hugo Chávez, de viajar a Brasil. (EUD, 5-12-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

Algunas denuncias indicaban que el Ministerio del Trabajo intentaba multar a los comercios cerrados y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social amenazaba con sancionar a las farmacias que se sumaron al paro. (EUD, 5-12-2002, Marisol Decarli, Economía).

Paralización de tanqueros. Otro detonante que radicaliza el conflicto

La actividad petrolera se dirigía al colapso. Para el cuarto día de paro, se informaba una paralización de la entrada y salida de productos, la falta de despacho de gas, la paralización de dos destiladoras de crudo y la situación de las principales refinerías. (EUD, 5-12-2002, Mónica Castro y Patricia Ventura, Economía).

Durante esta jornada ocurre un hecho importante que servirá de detonante para que la oposición continuara extendiendo el paro cívico: la paralización del buque "Pilín León", perteneciente a la flota de PDV Marina. Los tripulantes de esta embarcación se pronunciaron a través de los medios de comunicación, anunciando el anclaje indefinido de la nave en el Lago de Maracaibo. (EUD, 5-12-2002, Marisol Decarli, Economía). El presidente de la República, Hugo Chávez daba la orden, en cadena nacional, a un comando del ejército de tomar las instalaciones del buque Pilín León (EUD, 6-12-2002, Economía). El sábado 7 de diciembre en una operación digna de guión cinematográfico, donde participaron quince efectivos militares, el gobierno tomaba el control del buque. (EUD, 8-12-2002, Mónica Castro, Marianna Parraga y Patricia Ventura Nicolás). Estos hechos iban a agravar el problema de la gasolina, la cual comenzaba a escasear en todo el país. (EUD, 6-12-2002, Luisa Amelia Maracara, Angel Méndez y Kenny Aguilar, Economía).

La situación generada por el paro obligaba a la industria a declarar "fuerza mayor". La declaratoria de fuerza mayor plantea una excusa ante los clientes, que permite la exoneración de penalizaciones por incumplimiento de las entregas. Jorge Kamkof, vicepresidente de la Estatal petrolera, hacía un llamado a los trabajadores petroleros a no incorporar a Pdvsa en la lucha política "nadie gana, perdemos todos..." (EUD, 6-12-2002, Patricia Ventura Nicolás y Mónica Castro, Economía)

Por su parte, Fedeindustria, a través de su presidente, Miguel Angel Pérez Abad, solicitaba al gobierno y a la oposición, moderar posturas, de lo contrario "los hacemos responsables de convertir a Venezuela en el Medio Oriente de América Latina". ... (EUD, 6-12-2002, Mariela León, Nacional y Política).

El paro... pica y se extiende

La incidencia de la crisis de producción y distribución de combustible en el país, además de las fallas en el abastecimiento, fortalecían la postura de la oposición que anunciaba la continuación del paro cívico por sexto día. Carlos Ortega y Carlos Fernández en su parte acostumbrado de finales de la tarde anunciaban la decisión y alababan la actitud de la sociedad civil y de los diversos sectores que respaldaban la medida, especialmente el de los trabajadores petroleros y el de la Marina Mercante. (EUD, 7-12-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Tragedia en Altamira

Otro de los hechos que encendió la polémica fue el ocurrido la noche del 6 de diciembre de 2002 cuando un francotirador de nombre, Joao de Gouveia, sin mediar palabras descargó su pistola contra una muchedumbre que se encontraba en la Plaza Altamira. El saldo: cuatro personas muertas y veintiocho heridas. César Gaviria,

Secretario General de la OEA lamentó que el hecho ocurriera durante una etapa de máximas tensiones en las relaciones entre el gobierno y la Coordinadora Democrática, además insistió en la importancia de reunir nuevamente a la mesa de negociación (EUD, 7-12-2002, Rodolfo Cardona Marrero y Teresa de Vincenzo, Nacional y Política). Inmediatamente después del suceso, la oposición acusaba al gobierno de instigar a la violencia. Carlos Ortega fue enfático al anunciar que los sucesos ameritaban la radicalización de las acciones. Al secretario de la OEA le indicó: "Usted es el mejor testigo de lo que ocurre. No tenga ninguna duda, doctor Gaviria, de que Chávez es un asesino" (EUD, 7-12-2002, Marisol Decarli, Ciudad).

La sociedad civil mantenía sus manifestaciones de calle ondeando banderas y sonando cacerolas en todo el país, esto trajo consigo algunos inconvenientes cuando algunos miembros de los Círculos Bolivarianos trataron de ocupar espacios tradicionalmente utilizados por la oposición. La policía regional y la Guardia Nacional disolvían los enfrentamientos con bombas lacrimógenas. (EUD, 7-12-2002, Nacional y Política).

Los hechos de Altamira derivaron en la adhesión por parte de toda la Unión de Transportistas Distribuidores de Derivados de Hidrocarburos al paro. En comunicado de prensa, la Junta Directiva indicó: en vista de que los sucesos "donde murieron y fueron agredidos varios hermanos venezolanos, nos solidarizamos y apoyamos irrestrictamente los lineamientos de Fedecámaras, la Coordinadora Democrática y la CTV y nos declaramos en luto activo desde el momento de los acontecimientos". Extrañamente varios transportistas eran allanados por efectivos de la Guardia Nacional (EUD, 8-12-2002, Eduardo Camel Anderson, Economía).

Directiva de PDVSA pone sus cargos a la orden. Baja la producción

La situación interna de la industria petrolera se agravaba cuando su presidente, Alí Rodríguez Araque, informaba públicamente que la directiva de Pdvsa había puesto sus cargos a la orden; "...Fue una larga conversación, pero en términos muy cordiales... hablamos de la situación de conflictividad política y de la situación interna de la industria". De acuerdo a información emitida por distintos voceros del sector, la verdadera razón tenía que ver con una supuesta siembra de armas dentro del edificio de la estatal petrolera (EUD, 7-12-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía). El mercado petrolero internacional reaccionaba y los precios del barril de petróleo se incrementaban (EUD, 7-12-2002, María Elena Matheus, Economía). El sábado 7 de diciembre, el presidente de Pdvsa, autorizaba la parada de la Refinería El Palito, la prensa informaba que la producción petrolera había caído en 1,5 millones de barriles. (EUD, 8-12-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía). Al día siguiente se reportaba una merma en la producción de 1,9 millones de barriles. (EUD, 9-12-2002, Economía). El problema del suministro de gasolina se agudizaba en todo el país. (EUD, 8-12-2002, Marianna Parraga, Economía).

Se "alza" la Marina Mercante

El pronunciamiento por parte de varios capitanes de tanqueros y buques a lo largo del país, generó una reacción en cadena por parte de los miembros de la Marina Mercante. Uno de los hechos más particulares fue el bloqueo del canal de navegación del río Orinoco, por el cual salen todos los despachos originados por las empresas básicas del país. La situación generó un cierre inmediato de las exportaciones de las industrias del aluminio, acero y hierro, entre muchas otras que componen la zona. El golpe fue asestado por los capitanes de dos buques de la Marina Mercante en la Capitanía de Puerto Ordaz quienes atravesaron sus naves en pleno canal. (EUD, 8-12-2002, Eduardo Camel Anderson).

Pdvs principal foco de resistencia de la oposición

Luego de cumplirse la primera semana del paro cívico nacional el peso principal recaía sobre Petróleos de Venezuela cuyas áreas administrativas y productivas se encontraban prácticamente paralizadas. A medida que transcurrían los días miembros del sector se sumaban al paro. Así lo hacía saber la Cámara Petrolera de Venezuela que a través de un comunicado publicado el 8 de diciembre manifestaba que apoyaba la salida electoral. (EUD, 9-12-2002, Economía). Comenzaban en la industria una serie de despidos masivos y cambios de personal (reestructuración) en un intento por restablecer el control oficial. El Ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, ordenaba la remoción de los gerentes de distintas áreas operativas y desafiante afirmaba que "quienes se nieguen a cumplir órdenes de los nuevos gerentes serán despedidos". (EUD, 9-12-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía)

Los representantes de la oposición insistían en que el paro contaba con un sólido respaldo popular, especialmente con el de la industria petrolera y la Marina Mercante. A esto se sumaba un elemento, la declaratoria de luto nacional por los sucesos de la Plaza Francia de Altamira. (EUD, 9-12-2002, Alejandra Hernández, Economía)

El presidente de Consecomercio, Julio Brazón, hacía un llamado a sus colegas a no claudicar y a mantenerse firmes al lado del pueblo venezolano. (EUD, 9-12-2002, Economía)

El día 9 de diciembre la prensa publica una breve crónica sobre el paro. (EUD, 9-12-2002, Nacional y Política)

Segunda semana de paralización. El conflicto se acentúa

La segunda semana del paro cívico se inicia con informaciones sobre la situación de la industria petrolera (EUD, 10-12-2002, Economía), de la Marina Mercante (EUD, 10-12-2002, Mónica Castro y Mayela Armas, Nacional y Política) y con el anuncio por parte de la Banca de su adhesión al paro. Mientras los problemas del sector petrolero se agudizaban, los capitanes y miembros de la Marina Mercante se pronunciaban apoyando la medida y el sistema financiero, a través de un comunicado de prensa, anunciaba que se sumaba al paro cívico y que la red de agencias prestaría servicio sólo entre las nueve de la mañana y las doce del

mediodía. (EUD, 10-12-2002, Víctor Salmerón, Economía). Ante esta decisión del sector bancario, el gobierno ponía en marcha medidas de presión a través de sus simpatizantes y de la Defensoría del Pueblo. (EUD, 13-12-2002, Víctor Salmerón, Ciudad).

De acuerdo a algunos analistas, el paro tomaba un segundo aire gracias a la participación de nuevos sectores. Sin embargo la mayoría de los pequeños comerciantes habían rebasado su capacidad de aguante. La incorporación del sector financiero, de algunos trabajadores del metro, de los controladores aéreos, del transporte extraurbano, al igual que la intención manifiesta de algunos de los trabajadores del Seniat (8.000 empleados según el presidente del sindicato de trabajadores), acentuaban el conflicto. La oposición declaraba que el paro se mantendría hasta la salida del presidente de la República. Según Carlos Ortega el paro entraba en su etapa crucial y decisiva. (EUD, 10-12-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). (EUD, 10-12-2002, Eugenio Martínez, Economía).

Para el 10 de diciembre se reportaba una caída de la producción de dos millones de barriles de petróleo diarios. Además se conocía que los trabajadores de Intesa, empresa proveedora de los servicios de informática, habían decidido apoyar al paro (EUD, 11-12-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía). Durante la madrugada de ese mismo día, centenares de personas, afines al gobierno, rodearon la sede de Fedecámaras para protestar por la actuación del empresariado en el país. Los manifestantes rompieron una ventana lateral y escribieron "graffitis" en los vidrios de la fachada del edificio sede (EUD, 11-12-2002, Mariela León, Nacional y Política).

Simpatizantes del oficialismo arremeten contra medios de comunicación

El mismo martes 10 de diciembre de 2002 la opinión pública presenciaba el "asedio" a los medios de comunicación por parte de un grupo de simpatizantes del oficialismo, los cuales se hicieron presentes en la sede de canales de televisión y estaciones de radio. (EUD, 11-12-2002, Eugenio Martínez, Nacional y Política).

Por su parte, los representantes de la oposición llamaban a la fortaleza "no hay vuelta atrás" el llamado era a la "resistencia total" (EUD, 12-12-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Marcha del sector educativo

El miércoles 11 de diciembre de 2003 se realizó la marcha multitudinaria convocada por los representantes del sector educativo. Los marchistas recorrieron el circuito Las Mercedes-Chuao-Chacao-Chacaito-Las Mercedes. Esta manifestación terminó con el anuncio emitido por Octavio De Lamo, presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada: "no habrá actividades hasta enero..." (EUD, 12-12-2002, Teresa De Vincenzo y Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).

Un 75% de inactividad registran las empresas básicas

A pesar de que las empresas básicas se habían convertido en el principal bastión de resistencia del oficialismo y de las repetidas declaraciones de sus dirigentes afirmando la continuidad de las operaciones y una situación de completa normalidad, para mediados del mes de diciembre, las empresas reportaban una inactividad del 75%. La estrategia de "bloqueo" aplicada por la Marina Mercante y la falta de combustible y materia prima para operar se atribuían como las principales causas de la paralización. Diez de las trece compañías que integran a la Corporación Venezolana de Guayana se veían afectadas. Como en todo el país habían posiciones encontradas, por ejemplo en el sector aluminio los trabajadores estaban divididos en Fetrabolívar (simpatizantes de la oposición) y la Fuerza Bolivariana de Trabajadores. (EUD, 12-12-2002, Eduardo Camel Anderson y Mariela León, Economía).

Lentamente comienza movilización de los buques tanqueros

Luego de las acciones emprendidas por los capitanes de los buques tanqueros a lo largo del país, lo cual afectaba sensiblemente la actividad petrolera, el gobierno hacía esfuerzos por reestablecer la actividad y poner nuevamente en movimiento a las embarcaciones. No obstante, para el 12 de febrero sólo se habían logrado movilizar tres cargueros de un total de cuarenta y dos. (EUD, 13-12-2002, Patricia Ventura Nicolas, Mayela Armas y Mónica Castro, Economía).

Oposición se declara en desobediencia civil

Los representantes de la oposición, a través de su vocero, Carlos Ortega, anunciaban que el paro cívico había entrado en su fase crítica. El líder sindical recomendó insuflarse de energía para sostener el "sacrificio solidario por la democracia... En esa línea la desobediencia civil será la nueva arma de la oposición para afrontar la intimidación del gobierno". (EUD, 13-12-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Alí Rodríguez reconoce paralización de Pdvsa

El 14 de diciembre de 2003 la máxima autoridad de Petróleos de Venezuela admitía la magnitud de la crisis y reconocía la paralización de la industria. "Si esa es la victoria que ellos cantan, pues es una triste victoria, porque esto está afectando al país". Esta misma fecha, en asamblea general de trabajadores, el Instituto Tecnológico Venezolano de Petróleo (Intevep) acordaba su adhesión al paro. (EUD, 15-12-2002, Nacional y Política).

LA SEGURIDAD SOCIAL. NUEVA REFORMA LEGAL

Diciembre también traería consigo la aprobación de algunas leyes importantes, especialmente la discusión previa a la aprobación del Proyecto de Ley de Seguridad

Social. Mientras algunas notas de prensa hacían referencia a la difícil situación del Sistema de Seguridad Social, especialmente por el alto índice de morosidad por parte de las empresas del sector público y privado (EUD, 1-12-2002, Eugenio Martínez, Nacional y Política); la discusión en el Parlamento tomaba calor. El sábado 7 de diciembre, en pleno paro nacional, la prensa reseñó la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Social. La autorización del instrumento contó solamente con los votos del MVR debido a que la oposición estuvo ausente durante la plenaria. La nueva Ley desecha la creación de los fondos privados de pensiones y establece que los trabajadores cotizarán a un régimen de aseguramiento colectivo que será administrado por el Estado. El modelo aprobado era similar al actual, es decir, todas las contribuciones van a un pote. El esquema contempla regímenes prestacionales de empleo, vivienda y salud, seguridad en el trabajo y vejez. En este sistema, los trabajadores informales podrán cotizar y el Estado les subsidiará el 50% de la contribución. (EUD, 7-12-2002, Mayela Armas, Economía).

Quince días de paro cívico

Transcurridos los primeros quince días del paro cívico, la lucha se mantenía. Ambas partes aseguraban tener el control de la situación. En la capital y en el interior del país se observaban colas kilométricas para el abastecimiento de combustible. A pesar de que el sector comercio había atendido al llamado parcialmente, las franquicias y centros comerciales se mantenían firmes en su decisión. La industria petrolera se encontraba paralizada y el gobierno hacía esfuerzos por organizar planes de contingencia. (EUD; 16-12-2002, Lyndis Navas, Nacional y Política).

Por su parte, Carlos Ortega y Carlos Fernández, presidentes de la CTV y Fedecámaras y principales voceros de la oposición, ratificaban diariamente su posición e invitaban a todos los sectores a mantenerse en paro. Acusaban reiteradamente al presidente Hugo Chávez de propiciar la violencia y el enfrentamiento. (EUD; 17-12-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Otro problema que se agudizaba era el de la distribución de medicinas, principalmente por la ausencia de entre un 70% y 90% del personal del área de comunicaciones. Los servicios sólo se limitaban a casos de emergencia. (EUD; 17-12-2002, Yolanda Ojeda Reyes, Economía).

Las medidas de calle continuaban, día y noche, los simpatizantes de la oposición realizaban cacerolazos y minimarchas en distintas urbanizaciones y barriadas a lo largo del país. Otras formas de protesta como el denominado “trancazo” también se organizaban en las principales avenidas de la capital. (EUD; 18-12-2002, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

En la zona del hierro la situación también se tornaba difícil, la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) y Bauxilum anunciaban la paralización de sus operaciones a causa de insuficiencia en el suministro de gas por parte de la industria petrolera. (EUD; 17-12-2002, Economía) y (EUD; 18-12-2002, Economía). Días más tarde se daba a conocer que Pdvs-Gas, luego de una visita de delegados del sector sindical, había

reestablecido en 50% el suministro a las empresas básicas, lo cual permitía reiniciar parcialmente las operaciones. (EUD; 20-12-2002, Nacional y Política). Al respecto, Juan Fernández, presidente de Gente del Petróleo, desmentía las versiones oficiales asegurando que la producción de gas en el país se mantenía paralizada. (EUD; 23-12-2002, Economía).

El sábado 21 de diciembre de 2002 la prensa informaba sobre la reanudación en un 80% del tránsito en el canal de navegación del río Orinoco. Las autoridades fluviales de Guayana apoyadas en un “Decreto Oficial Confiscatorio” y en los miembros de la Armada y la Guardia Nacional emplazaron a los trabajadores navieros a reincorporarse en sus labores. (EUD; 21-12-2002, Mariela León, Nacional y Política).

La escasez de alimentos comienza a sentirse. Allanamientos a empresas privadas enciende la polémica

A causa del paro cívico, especialmente del problema en la distribución del combustible, el país comenzaba a sentir los efectos del desabastecimiento. El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Producción y Comercio y del Indecu, realizaba operativos para obligar la distribución de alimentos y sancionar a los acaparadores, para ello se valían de personal autorizado o de la misma Fuerza Armada Nacional. (EUD; 18-12-2002, Raquel Barreiro, Economía).

La prensa nacional daba a conocer algunas medidas de allanamientos practicadas por la Guardia Nacional en establecimientos privados, específicamente pertenecientes a Empresas Polar. (EUD; 18-12-2002, Economía).

El ministro de Agricultura y Tierras, Efrén Andrades, aseguraba que el ejecutivo mantendría el abastecimiento de todos los rubros básicos sin necesidad de importar. (EUD; 19-12-2002, Raquel Barreiro, Economía).

En algunos supermercados la escasez y nerviosismo obligaban a sus dueños a racionar la venta de alimentos (EUD; 20-12-2002, Raquel Barreiro, Economía).

Panorama sombrío en el país

De acuerdo a declaraciones de Miguel A. Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, el costo del paro lo pagarían los venezolanos en “cortísimo” plazo. “Seguramente cuando se desmonte la paralización del aparato productivo del país, volveremos al punto inicial en la Mesa de Negociación y Acuerdos... a la vuelta de esa acción de protesta, tendremos unas cuentas públicas alteradas y un mermado sector privado”. El directivo pronosticaba una nueva devaluación de la moneda y el cierre de entre un 30 y 35% de la pequeña y mediana industria. (EUD; 19-12-2002, Mariela León, Economía).

¿Ministerio del Trabajo reclutando personal?

La paralización de la industria petrolera generaba acciones verdaderamente curiosas por parte del gobierno. La inasistencia de trabajadores motivó a que el Ministerio del Trabajo, a través de un comunicado de prensa iniciara un proceso de

reclutamiento de ingenieros, técnicos y expertos petroleros. (EUD; 19-12-2002, Nacional y Política).

Días más tarde publicaban un nuevo anuncio solicitando capitanes de altura, jefes de máquinas, primeros oficiales de cubierta y máquina, segundos oficiales de cubierta y máquina, terceros oficiales de cubierta y máquina y electricistas con experiencia en buques mercantes. (EUD; 24-12-2002, Economía).

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pone en jaque al paro petrolero

El 19 de diciembre de 2002 la Sala Constitucional del TSJ por decisión unánime de cinco de sus magistrados emitía un pronunciamiento mediante el cual se ordenaba, a todas las autoridades y particulares, a reestablecer las operaciones de Petróleos de Venezuela. Los infractores serían sometidos a prisión por sentencia de no cumplir con dicho ordenamiento. (EUD; 20-12-2002, Irma Alvarez, Nacional y Política).

Ante el anuncio, Juan Fernández, presidente de Gente del Petróleo, afirmaba que el dictamen no afectaba la decisión de los trabajadores de la industria y que estos continuarían firmes en su decisión. Fernández expresó que el dictamen era cauteloso y por tanto no definitivo. (EUD; 20-12-2002, Patricia Ventura, Nacional y Política).

Un grupo de juristas cuestionó la sentencia del máximo tribunal, haciendo un llamado a que “ni las autoridades administrativas, ni los fiscales del Ministerio Público, ni los jueces deben ni pueden acatar la orden ilegal e inconstitucional dada en forma apresurada”. (EUD; 20-12-2002, Yolanda Ojeda Reyes, Economía).

Durante el programa “Aló Presidente”, Hugo Chávez mantenía una actitud triunfalista al señalar que el paro petrolero había acabado y que los huelguistas enfrentarían cargos por lesa humanidad. (EUD; 23-12-2002, Alicia Rotta Morán, Nacional y Política).

Trancada la mesa de negociación y acuerdos

Mientras se desarrollaba el paro cívico, gobierno y oposición mantenían un diálogo con muy pocos avances. Muchos pedían la resolución del conflicto a través de una salida política que parecía sólo poder concretarse en este espacio. (EUD; 22-12-2002, Rodolfo Cardona Carrero, Nacional y Política).

Logran movilizar el buque tanquero “Pilín León”

Al tiempo en que los representantes de la oposición anunciaban el balance del vigésimo día de paro y la continuación de la medida, el gobierno, a través de cadena nacional, informaba sobre la movilización del buque Pilín León el cual se había mantenido “fondeado” durante dieciséis días. Carlos Ortega, presidente de la CTV, desestimó el impacto de la acción sobre el paro. (EUD; 22-12-2002, Eugenio Matínez, Nacional y Política).

Para finales de diciembre de 2002, el ejecutivo había movilizado sólo 5 de los 13 buques que permanecían “fondeados” (EUD; 28-12-2002, Economía).

Durante la noche del viernes 20 de diciembre de 2002, el presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, afirmaba que las pérdidas de la industria a causa de la

paralización de buena parte de sus 40.000 trabajadores ascendían a más de 1.000 millones de dólares. Rodríguez hizo un llamado a los trabajadores a levantar la medida. (EUD; 22-12-2002, Economía).

Si hubo “regalitos” de Navidad

En víspera de la Navidad una granada fragmentaria de guerra era lanzada contra la sede de Fedecámaras ubicada en la urbanización El Bosque de Caracas. El artefacto causó daños al ala sur del edificio empresarial. (EUD; 24-12-2002, Félix Carmona, Ciudad).

Carlos Ortega, durante su acostumbrada alocución vespertina, enviaba un mensaje de Navidad al pueblo de Venezuela. (EUD; 26-12-2002, Nacional y Política). Ortega solicitaba al presidente de la República, que aceptara una salida electoral y agradecía a los venezolanos su participación en las jornadas de protesta cívica escenificadas durante la nochebuena. (EUD; 26-12-2002, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).

También algunos gerentes de la industria petrolera recibían sus “regalos” de Navidad: sendas cartas de despido a más de 90 gerentes. La medida formaba parte de los mecanismos de presión impuestos por el gobierno para quebrar el paro. Ante el hecho, los trabajadores manifestaban que se mantendrían firmes en su posición. (EUD; 26-12-2002, Economía).

Luego de la Navidad, la oposición retomaba sus acciones de calle en todas las regiones del país. Marchas, cacerolazos, antorchas y declaraciones de los dirigentes de la Coordinadora Democrática estaban a la orden del día (EUD; 27-12-2002, Nacional y Política).

En cuanto a la industria petrolera, la situación de paralización se mantenía, a pesar de los intentos por parte del gobierno de reactivar las operaciones. A finales del mes de diciembre se reportaban errores operativos y accidentes en todas las áreas productivas. (EUD; 29-12-2002, Patricia Ventura Nicolás, Nacional y Política).

En otras noticias se daba a conocer la decisión de castigar salarialmente a los trabajadores de Pdvsa. Para finales del mes de diciembre, sólo los trabajadores de la nómina contractual cobraban su quincena, a los 19 mil trabajadores de la nómina mayor y ejecutiva de la industria se les “castigaba salarialmente”. (EUD; 31-12-2002, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

José Vicente Rangel, Vicepresidente de la República, declaraba en prensa que el orden mantenido por el gobierno era “excesivamente normal” (EUD; 29-12-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

¿Año nuevo patria nueva?

Al acercarse un nuevo año, los representantes de la oposición declaraban que al terminar el año 2002 la lucha continuaría y prometían a la población una nueva patria para el año 2003. La Coordinadora Democrática pedía mantenerse en pie de lucha y acatar el llamado a la “desobediencia civil”. (EUD; 31-12-2002, Teresa de Vincenso, Nacional y Política). Por su parte, el gabinete económico analizaba

medidas para un ajuste presupuestario orientado a enmendar las secuelas del paro. (EUD; 31-12-2002, Mariela León, Economía).

El gobierno reclamaba “mano dura” de la Ley. El presidente Hugo Chávez exigía a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial “castigar a los traidores de la patria”. (EUD; 30-12-2002, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

SEMESTRE

Enero de 2003 a Junio de 2003

Enero de 2003

El mes de enero resultó una continuación de lo que venía ocurriendo durante el mes de Diciembre. Un país petrolero con una industria petrolera paralizada en la que se había iniciado un proceso de reestructuración que involucraba despidos masivos de su personal. La posición asumida por el sector educativo también resultaba clave y determinaba el rumbo y temperatura del paro cívico. En tanto que el sector comercio, a pesar de haber mermado su participación, mantenía como bastión a las franquicias y centros comerciales que permanecieron cerrados durante todo el mes. El paro continuaba en enero lo cual sorprendía y aún hoy sorprende.

EL AÑO NUEVO EN UN PAIS EN PARO

El año 2002 finalizaba con una paralización derivada de un conflicto político que mantenía en jaque la economía del país. La celebración del nuevo año se mezclaba con las protestas cívicas realizadas por la oposición. Específicamente en una "concentración", o mejor llamarla "celebración", cuya naturaleza no tenía precedentes, los simpatizantes de la oposición se reunieron en el Distribuidor Altamira, ubicado en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, y festejaron "el cañonazo" gritando consignas y ondeando banderas. Este resultó ser un espectáculo muy colorido. Al tiempo, Carlos Ortega y Carlos Fernández, los "Carlos", protagonistas principales de este guión, enviaban un mensaje de fin de año a la población. Carlos Ortega manifestaba que el presidente Chávez era sólo un triste accidente en el camino y que restaba luchar por la reconstrucción del país. (EUD, 1-1-2003, Raquel García, Nacional y Política).

Durante el acostumbrado parte de final de la tarde y luego de las palabras de Carlos Ortega, el presidente de Gente del Petróleo y vocero principal de este sector de oposición, Juan Fernández, informaba que la producción de crudo se mantenía en 150.000 barriles diarios (la mínima en la historia), que la gasolina que se estaba vendiendo no reunía el nivel de calidad básico y que sólo se estaba produciendo el mínimo de gas necesario para mantener la generación eléctrica. (EUD, 1-1-2003, Raquel García, Nacional y Política).

Los miembros de la mesa de negociación y acuerdos continuaban reuniéndose pero los resultados de sus conversaciones eran pocos. Era notable el ausentismo de sus miembros lo cual transmitía desinterés (EUD, 1-1-2003, Nacional y Política).

PARO CÍVICO CUMPLE UN MES

Un mes de paro cívico. La desobediencia tributaria es la nueva consigna

Al cumplirse un mes de paro cívico, la oposición se prestaba a radicalizar su postura con el objeto de lograr la tan anhelada salida electoral vía referéndum. Para ello hacían un llamado a la desobediencia civil activa, lo cual incluía la desobediencia tributaria. Durante su primera alocución del 2003, el presidente de la CTV, Carlos Ortega afirmaba: "Continúa el paro cívico nacional con desobediencia civil activa, vamos a más ni un paso atrás". (EUD, 1-1-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Ya empezaba a deslindarse de manera más acentuada lo que algunos llamaban paro "mercantil" del "paro petrolero". Cumplido el papel de diversos sectores del área comercial (pequeños comercios, banca, etc.) el peso principal del paro recaía sobre el sector petrolero. A principios del mes de Enero algunos pensaron e incluso llegaron a declarar sobre un "levantamiento parcial" del paro. (EUD, 3-1-2003, Edymar Ablan Pacheco, Nacional y Política). A algunos dirigentes no les parecía buena idea dejar todo el peso del paro en hombros del sector petrolero. Así lo declaraba Horacio Medina, presidente de Unapetrol, que arremetió contra la idea de dividir el paro. (EUD, 3-1-2003, Nacional y Política).

Este llamado de desobediencia tributaria hizo reaccionar al presidente de la República quien afirmó que el que no pagara los impuestos tenía que ir preso. (EUD, 4-1-2003, Economía).

Operativamente la desobediencia tributaria no era tan sencilla. Según Nelson Da Gamma, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados, explicó que el gremio al cual representaba no podía dejar de cobrar el IVA a sus clientes ya que operativamente las máquinas registradoras tenían una memoria fiscal que cobraba automáticamente este tributo. (EUD, 5-1-2003, Economía).

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) responsable de la recaudación de impuestos, alertaba sobre las consecuencias penales que tendría la desobediencia tributaria. (EUD, 7-1-2003, Economía).

El martes 7 de Enero de 2003, simpatizantes de la oposición marcharon hasta el Consejo Nacional Electoral. El motivo era manifestar a favor del Sí en el referéndum revocatorio y de la desobediencia tributaria amparada en la Constitución. Carlos Ortega, emulando a Chávez, sacó un ejemplar de la Constitución para recordarle que las acciones de las protestas en desarrollo están consagradas y por ende no eran un golpe de estado o saboteo. (EUD, 8-1-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Reinicio de las clases en duda

Al acercarse el fin del período vacacional de Navidad, se ponía en duda el comienzo de las actividades. Los sectores de la enseñanza públicos y privados acordaban continuar plegados al paro cívico bajo la figura de "desobediencia civil activa". En una asamblea realizada en la sede de Fedecámaras, los representantes de ambos sectores justificaban la decisión de protestar por el estado actual del país y el rechazo al presidente de la República. (EUD, 4-1-2003, Nacional y Política). El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, reaccionaba ante tal anuncio y hacía un llamado a directivos y docentes a incorporarse a las aulas. Las autoridades educativas reiteraron la necesidad de recuperar el tiempo perdido. (EUD, 5-1-2003, Nacional y Política).

Se paraliza el sector educativo

La paralización de las actividades educativas generó reacciones por parte del presidente de la República, Hugo Chávez, quien emplazó al pueblo a tomar las escuelas. "Procederemos a intervenir las Escuelas Cerradas". Chávez calificó la paralización como un "sabotaje" y una "conspiración"; también se refirió a la suspensión de actividades en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de los Andes: "si no hay clases el gobierno bolivariano no les mandará un centavo". (EUD, 12-1-2003, Nacional y Política). El llamado fue rechazado por el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, afirmando que durante la semana se habían realizado más de 650 asambleas de padres y representantes y el 93,5% de los padres se negaban a enviar a sus hijos al colegio. (EUD, 12-1-2003, Economía).

A mediados de enero los maestros celebraron su día en la calle, marchando y en desobediencia civil. La marcha fue acompañada por un multitudinario grupo de simpatizantes de la oposición y cubrió el trayecto desde la Previsora hasta la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. (EUD, 16-1-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). El presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada, Octavio De Lamo, al ser consultado mientras se preparaba para presidir la marcha, señaló que el regreso a clases estaba condicionado a la realización del referéndum y que el paro cívico nacional activado desde el 2 de diciembre de 2002 estaba orientado a defender los "ideales y no las mensualidades". (EUD, 16-1-2003, Teresa De Vincenzo, Nacional y Política).

El 22 de enero, el rector de la Universidad de Carabobo, Ricardo Maldonado, anunciaba el pronto reinicio de las actividades académicas. La decisión fue tomada por el Consejo Universitario. No obstante, la determinación de esta casa de estudios estaba supeditada al cumplimiento de varias exigencias entre las que destacaba la cancelación, por parte del gobierno, de la mitad de la deuda correspondiente al año 2002, la cual ascendía a 50 mil millones de bolívares. (EUD, 22-1-2003, Nacional y Política). El lunes 27 de enero la Coordinadora Democrática del sector educativo integrado por los gremios públicos y privados resolvía no reiniciar las clases por cuanto no estaban dadas las condiciones para hacerlo. (EUD, 28-1-2003, Nacional y Política).

El sector bancario también presiona

A principios del mes de enero, los bancos informaban sobre su decisión de mantener sus actividades durante tres horas diarias tal como lo habían hecho durante el mes de diciembre. No obstante advertían que la apertura de las agencias en los próximos días estaría sujeta a la asistencia del personal debido a que los trabajadores proponían un paro total del sector. Ante esta posibilidad de cierre, el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel advirtió que se tomarían las medidas si las entidades bancarias llegaban a paralizarse. "Si la banca se lanza a un paro hay medidas concebidas y estudiadas para dar una respuesta contundente a los banqueros". (EUD, 5-1-2003, Mayela Armas, Economía). La Superintendencia de Bancos, emitía resolución para obligar a trabajar normalmente a las Instituciones Bancarias. Esta resolución ordenaba a los bancos "atender a sus clientes y usuarios sin limitación o restricción alguna en su horario habitual". (EUD, 7-1-2003, Víctor Salmerón, Economía).

El 9 de enero se daba a conocer la decisión de los trabajadores bancarios de paralizar totalmente las actividades por 48 horas. Así se decidió en Asamblea de los trabajadores afiliados a Fetrabanca. El Consejo Bancario dejaba en manos de los trabajadores la decisión de acatar o no el paro. (EUD, 9-1-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía). Un 80% de los trabajadores acataron el paro. (EUD, 10-1-2003, Economía). La medida también afectó operativamente a los supermercados, lo cual obligó a que permanecieran cerrados durante dos días; el anuncio lo hizo el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados (ANSA) (EUD, 10-1-2003, Raquel Barreiro, Economía).

Los tanqueros: emblema del paro

La situación de los buques tanqueros seguía siendo emblemática en el conflicto que vivía la industria petrolera. El domingo 5 de diciembre de 2003 en el Lago de Maracaibo, se realizó una manifestación de respaldo por parte de la población a los tripulantes de estas naves. La manifestación fue encabezada por un grupo de la Marina Mercante y contó con la asistencia de algunos líderes políticos de la oposición, representantes del sector ganadero y miembros de la Federación de Trabajadores del Estado Zulia. (EUD, 6-1-2003, Mónica Castro, Nacional y Política). El gobierno, a través del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), buscaba solventar la situación certificando oficiales para que se ocuparan de la capitanía de los buques. La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima solicitaba una medida cautelar para que el INEA no emitiera certificados a oficiales que no cumplieran con los requisitos. (EUD, 16-1-2003, Mayela Armas, Nacional y Política).

Días más tarde, José Luis Blandín, presidente del Sindicato Único de la Marina Mercante, denunciaba el asalto de buques por tripulación extranjera. Tripulaciones de origen libio, indio e iraquí estarían tomando el control de la embarcaciones. (EUD, 21-1-2003, Gustavo Méndez, Economía).

El presidente de la República arremete contra los medios

En cadena nacional, Hugo Chávez hizo un llamado a los poderes públicos a hacer cumplir las leyes y acusó a los medios de comunicación, específicamente a las cadenas privadas, de participar en la conspiración, de torcer la verdad y de presentar como héroes a los "saboteadores" de la empresa petrolera nacional. "A esos terroristas de los medios privados televisivos e impresos los pintan como héroes de la patria cuando son traidores a la patria, a los piratas que bloquearon nuestras costas, criminales es lo que son, saboteadores y terroristas, ante los venezolanos y ante el mundo..." (EUD, 6-1-2003, Félix Carmona, Nacional y Política).

Medidas por el control de Pdvsa

La lucha por el control de la industria petrolera por parte del gobierno se iniciaba con una serie de medidas que incluían despidos de gran parte de su personal y la militarización de las instalaciones. Las notificaciones de despido llegaban por vía informal, el lunes 6 de enero de 2003 el personal de seguridad apostado en las edificaciones petroleras se encargó de decirles a un grupo de empleados que estaban despedidos. Todos los empleados administrativos y ejecutivos de Pdvsa de los edificios ubicados en las zonas de Chuao y de los Chaguaramos, en Caracas, se encontraron con que sus carnets magnéticos de acceso a las instalaciones habían sido desactivados. El presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, informaba que en el marco de la reestructuración de la empresa se estaban llevando a cabo despidos y remociones. (EUD, 7-1-2003, Eduardo Camel Anderson, Nacional y Política).

El Ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, informaba a la prensa que se había ordenado un trabajo que estaba desarrollando la empresa MacKensie, el cual arrojaba como resultados preliminares que la industria tenía altos costos operativos y una estructura muy complicada que no le permitía ser competitiva frente a otras compañías. (EUD, 7-1-2003, Nacional y Política).

Reestructuración a trancas y barrancas

De acuerdo a declaraciones del Ministro, Pdvsa sería dividida en dos estructuras: Pdvsa Oriente y Pdvsa Occidente, descentralizando la actividad administrativa de Caracas. La eliminación del personal se concentraría en el nivel ejecutivo de mediano y alto nivel. Este grupo estaba conformado por 18.584 personas, del total de 37.942 trabajadores. Al respecto, el Ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega declaraba que existían funciones en Pdvsa que estaban triplicadas o duplicadas porque venían del viejo esquema de las filiales Corpoven, Lagoven y Maraven. "El tema es que muchas de esas duplicidades o triplicidades terminaron concentrándose en Chuao y el análisis que hace esta firma consultora... es que ahí cerca de un 80% de la gente de Chuao sobra, o sea la famosa plaza de la meritocracia; una vez que limpiemos todas esas cifras... vamos a tener que cambiarle el nombre al menos el prefijo no será mérito, sino buró, burocracia" (EUD, 8-1-2003, Nacional y Política).

Inmediatamente de publicadas estas cifras y resultados, el Director de Relaciones Externas de la firma de consultoría McKinsey & Company para las Américas,

Michel Stewart, manifestaba, a través de una carta, preocupación por la tergiversación por parte de terceros del trabajo realizado por la firma. Ante esta situación aclaró: "sentimos que es importante enfatizar que nuestro trabajo para Pdvsa no incluye, ni se ha hecho por lo tanto recomendaciones en referencia a la organización, la estructura corporativa y los costos de las oficinas corporativas, como ha sido informado. Sin embargo, dada nuestra política de no discutir con terceros el trabajo que hacemos para nuestros clientes, no comentaremos acerca de aspectos específicos de nuestro trabajo para Pdvsa ni haremos públicos los reportes entregados a la compañía". (EUD, 9-1-2003, Nacional y Política).

Días más tarde Pdvsa reconocía mediante comunicado, que la reestructuración no era producto de la compañía consultora McKinsey. "Los cambios son productos de estudios anteriores". (EUD, 15-1-2003, Nacional y Política).

El miércoles 8 de enero se daba a conocer el despido de 254 empleados civiles y oficiales pertenecientes a la empresa PDV-Marina. (EUD, 8-1-2003, Mayela Armas, Nacional y Política). Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo comenzaba el proceso de reclutamiento de personal para el Centro Refinador de Paraguaná. A través de avisos de prensa demandaban marinos mercantes, pero los que no era limitante la experiencia en manejo de buques; expertos petroleros, ingenieros, etc. (EUD, 8-1-2003, Nacional y Política). Por su parte, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) en un aviso de prensa, solicitaba oficiales de la Marina Mercante para ingresar al servicio de pilotaje. (EUD, 9-1-2003, Nacional y Política).

A mediados del mes de enero, los trabajadores de Intesa, empresa que presta servicios de tecnología de información a Pdvsa, decidían suspender por completo sus actividades. El argumento principal en el que se basaba la decisión era "la inseguridad, los actos de amedrentamiento, acusaciones, actos de sabotaje y la presencia de personas no autorizadas ni debidamente preparadas". Para el gerente de sistemas (encargado) de Pdvsa, David Díaz, Intesa se convirtió en un Caballo de Troya mediante el bloqueo de claves de acceso e impidiendo el funcionamiento del sistemas estratégicos. (EUD, 15-1-2003, Nacional y Política).

El presidente de la República, acusaba a Intesa de sabotaje e informaba sobre la creación de una nueva filial que se ocuparía de los procesos de tecnología de la información de la corporación. Chávez aseguró que el 80% de los sistemas "estaban tomados por patriotas". (EUD, 20-1-2003, Economía).

Ruedan cabezas. "El ciclón de los despidos"

A partir de la primera semana de enero comienzan los despidos masivos en la industrial petrolera. Para esa fecha la prensa informaba sobre un acumulado de 600 trabajadores despedidos desde el inicio del paro. La notificación formal de la medida se realizaba a través de la prensa nacional. Además de la amenaza y ejecución de los despidos, los trabajadores de la nómina mayor de Pdvsa tenían suspendido el pago de sus sueldos. (EUD, 10-1-2003, Nacional y Política).

El 15 de enero de 2003 se informaba sobre 100 despidos más y se amenazaba con otros 150. (EUD, 15-1-2003, Mónica Castro y Patricia Ventura, Nacional y

Política). Los representantes de los trabajadores despedidos denunciaban que entre los botados habían personas que se encontraban de vacaciones o de permiso maternal. Denunciaron además que la lista de despedidos ascendía a 700 trabajadores. (EUD, 16-1-2003, Patricia Ventura Nicolás, Nacional y Política).

El 17 de enero la lista de los trabajadores despedidos llegaba a 1000. El procedimiento era el mismo, la publicación en un diario de circulación nacional de los nombres de los trabajadores. (EUD, 17-1-2003, Patricia Ventura Nicolás, Nacional y Política).

Apenas dos días después la cifra se incrementaba a 1.500 trabajadores despedidos, la información fue publicada en prensa; estos nuevos despidos se distribuían entre Caracas (62) y Occidente (445). Las personas afectadas pertenecían a las áreas de automatización, perforación, finanzas, infraestructura, gas, protección y control de pérdidas y recursos humanos. (EUD, 19-1-2003, Economía).

La tendencia se mantenía y para el 24 de enero la prensa reseñaba que el número de trabajadores despedidos había llegado a los 2.475. (EUD, 24-1-2003, Nacional y Política). Al día siguiente se publicó una noticia donde se señalaba un número más preciso resultante de la contabilización de las listas publicadas en prensa. De acuerdo a estas cifras los despidos llegaban a 3.545 trabajadores, es decir, un 9,38% de la nómina total. (EUD, 25-1-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

La avalancha de despidos continuaba y el 29 de enero se hacía saber que estos ascendían a 5.111. (EUD, 25-1-2003, Mónica Castro y Patricia Ventura Nicolás, Economía). Al día siguiente se publicaba una nueva lista de despidos, ahora de 222 trabajadores de PDV-Marina, lo cual sumaban 5.333 despidos. (EUD, 30-1-2003, Economía).

Inamovilidad laboral y relaciones laborales

Durante un nuevo decreto, el gobierno nacional prorrogó la inamovilidad laboral por seis meses. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial No 37.608 y extendía la orden decretada el 28 de abril de 2002. Esta era la cuarta vez que se prorrogaba la inamovilidad. Para Albis Muñoz, presidenta encargada de Fedecámaras, la normativa era un instrumento político y mediático del gobierno. Los empresarios advertían que la medida inhibía la generación de empleo. (EUD, 15-1-2003, Economía). Esta medida estaba dirigida a quienes ganaban un salario mensual inferior a 633 mil 600 bolívares. (EUD, 15-1-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

Otro aspecto que resultó polémico por su particularidad tenía que ver con las relaciones y las condiciones del contrato de trabajo entre empleadores y trabajadores. El motivo era la falta de ingreso de muchas empresas por efectos del paro y su incapacidad para el pago de sueldos y salarios. Múltiples salidas y arreglos se dieron, entre los que destacaban: las vacaciones forzadas, la reducción de la jornada y los permisos no remunerados. Los escritorios jurídicos y expertos en derecho del trabajo eran agobiados por innumerables consultas durante estas fechas. Para algunos expertos se estaba frente a una suspensión de la relación de trabajo.

Durante la suspensión los trabajadores no estaban obligados a prestar servicio ni el patrono a pagar el salario. (EUD, 15-1-2003, Economía).

El gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, exigía a las empresas plegadas al paro, que honraran sus compromisos para con los trabajadores. (EUD, 16-1-2003, Economía). Además opinaban que la suspensión no era procedente en estos casos. (EUD, 17-1-2003, Economía).

El 18 de enero se publicaba en prensa la información sobre la suspensión de la relación de trabajo de buena parte de los trabajadores del sector turismo. El presidente de la Cámara de Turismo de Margarita, Eustacio Aguilera, informaba que la primera etapa de la suspensión sería de 30 días. (EUD, 17-1-2003, Economía).

Pocos días después se daba a conocer que los trabajadores y los representantes de las tiendas por departamento habían acordado utilizar la figura de permisos no remunerados, lo cual permitiría soportar la carga del paro. Así lo informaba el presidente de la Asociación Venezolana de Tiendas por Departamento, William Cohen. “Cerca de diez mil trabajadores de tiendas por departamento lograron acuerdos para evitar los despidos”. La Ley Orgánica del Trabajo establece un lapso de 60 días para estos permisos. (EUD, 22-1-2003, Mariela León, Economía).

Para garantizar la continuidad de sus operaciones, la empresa Aeropostal, suspendía temporalmente de sus funciones a 304 empleados de tierra y 129 de aire. Esto se debía a una disminución de la demanda de 325.000 pasajeros promedio mensuales a 4.000 que se registraban para la fecha. (EUD, 25-1-2003, Economía).

Gobernaciones y Alcaldía opositoras sufren consecuencias

Otro mecanismo de presión utilizado por el gobierno nacional estaba relacionado con la asignación de recursos económicos a las Gobernaciones y Alcaldías. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Said Bijani, señalaba que el retardo en la asignación del situado constitucional de diciembre y enero afectaba la cancelación de sueldos. (EUD, 16-1-2003, Economía).

Para mediados de enero la deuda de las Gobernaciones ascendía a los 7 billones de bolívares. Enrique Salas Feo, presidente de la Asociación de Gobernadores, dijo que a primera vista no se veía la gravedad del asunto pero que este retraso en la asignación del situado afectaba planes y programas de asistencia. El número de trabajadores perjudicados ascendía a 200 mil. (EUD, 17-1-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

Allanamientos a empresas de consumo masivo

El gobierno nacional, a través del Indecu y de la Guardia Nacional protagonizaba una serie de allanamientos a depósitos de empresas del sector privado de consumo masivo, como medida de presión para garantizar la distribución de los productos. Ante estos hechos, una de las empresas más afectadas, Polar, imposibilitada de contabilizar las pérdidas de sus depósitos, estudiaba algunas acciones legales. El presidente de Cavidea, Rafael Alfonzo, indicaba que de seguir las acciones de amedrentamiento en contra de la empresa privada, éstas dejarían de producir hasta

los bienes de la cesta básica que, hasta la fecha, habían sido garantizados mediante un plan de abastecimiento. (EUD, 19-1-2003, Economía).

La Cámara Venezolana Americana de Comercio (Venamcham) denunciaba terrorismo de Estado en contra del empresariado. El presidente de la institución, Andrés Mata Osorio hizo el señalamiento y agregó que el terrorismo se originó cuando los crímenes y desmanes evidenciados en el país empezaron a permanecer sin investigación ni castigo. (EUD, 22-1-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

El sector transporte se suma al paro por 24 horas

Luego de una serie de preparativos, consultas y discusiones previas, los transportistas, representados por Fedetransporte decidían convocar a un paro de 24 horas, cuyo objetivo era agilizar la salida electoral a la crisis política del país. Los voceros de la federación aseguraban que el 85 o 90% de los transportistas se plegarían al paro. (EUD, 22-1-2003, Migdalia Cañizales, Ciudad).

El paro se cumplía sólo parcialmente y la prensa titulaba “transporte no le paró al paro”. Dirigentes de Fedetransporte afirmaban que la medida se había cumplido en un 70%. Ni el transporte subterráneo ni la aviación comercial se adherían al paro. (EUD, 23-1-2003, Migdalia Cañizales, Ciudad).

Un espaldarazo de instituciones internacionales a la mesa de negociación

El 21 de enero de 2003 el Centro Carter, luego de sostener reuniones bilaterales con el sector oficial y de la oposición, formulaba dos propuestas a la mesa de negociación y acuerdos. La enmienda constitucional y el referéndum revocatorio, ambos con sus respectivos procedimientos y condiciones. El Secretario General de la OEA y mediador en la mesa de negociación, César Gaviria, agradeció al ex-presidente Jimmy Carter por la labor prestada. Ambas propuestas tenían como condición inicial que la oposición anunciara la finalización del paro y que el gobierno se comprometiera a que no habría represalias contra los trabajadores que recurrieron a sus derechos sindicales. La propuesta del referéndum revocatorio exigía que el presidente de la República garantizara su disposición para que la consulta se realizara a más tardar el 19 de agosto. (EUD, 22-1-2003, Teresa De Vincenzo, Nacional y Política).

No habría flexibilización del paro sin acuerdo previo

Atrincherados en sus posturas, gobierno y oposición se negaban a dar el primer paso que permitiera superar el conflicto político que atravesaba el país. Carlos Ortega, presidente de la CTV, afirmaba que la flexibilización del paro dependía de ambas partes y que la oposición no cedería hasta tanto se lograra un acuerdo previo. (EUD, 22-1-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

El 23 de enero, el Ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, anunciaba la suspensión de la venta de divisas, lo cual evidentemente se traducía en el inicio de una nuevo período de control cambiario en el país. Se iniciaría entonces una discusión sobre el método y esquema asociado al control. (EUD, 24-1-2003,

Nacional y Política). Algunos empresarios y entendidos opinaban que la medida era otra forma de presión en contra del sector productivo. (EUD, 24-1-2003, Mariela León, Nacional y Política).

Finaliza el mes de enero

A finales del mes de enero los líderes de la oposición mantenían su postura frente al paro. (EUD, 29-1-2003, Nacional y Política). Sin embargo se lograba percibir que la postura hacia la flexibilización del paro estaba tomando fuerza y que la lucha se centraría en resolver el conflicto petrolero y en encontrar una salida al conflicto político. (EUD, 31-1-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

En cuanto a la situación de la crisis petrolera, el suministro y distribución de gasolina tendía a normalizarse, sin embargo las 58 bombas ubicadas en el este de la ciudad de Caracas no habían recibido suministro desde el inicio del paro. Esta discriminación obligaba a la suspensión temporal de los salarios de 800 trabajadores que laboraban en gasolineras. (EUD, 29-1-2003, Marianna Párraga, Economía).

Por otra parte los despidos en la industria petrolera continuaban y el presidente de la República negaba cualquier tipo de perdón a los ex-trabajadores de Pdvsa y reclamaba a la Fiscalía y al Poder Judicial el castigo a los "traidores de la patria". (EUD, 30-1-2003, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

Febrero de 2003

El mes de febrero fue traumático para muchos, la tan anhelada salida no llegó y la fuerza de la oposición demostrada durante el paro cívico no era la misma. La flexibilización de la medida era inminente y la vuelta a la "normalidad" la tendencia. El "inmediatismo" había fracasado. Para finales del mes, la mayoría de los sectores retomaba sus actividades normales y los principales líderes de la oposición eran perseguidos. Un golpe duro para la oposición y para la economía del país. La situación en Pdvsa era particular, varias acusaciones sobre malos manejos e impericia ponían en duda el funcionamiento cabal de la industria, no obstante la reestructuración continuaba su avance y los despidos alcanzaban un número insospechado. Esta batalla llegaba a su fin, el saldo: innumerables bajas para ambos bandos y un campo de batalla devastado.

LA FLEXIBILIZACIÓN DEL PARO. EL FIRMAZO COMO CATALIZADOR

A partir del 3 de febrero del 2003, luego de realizar el Firmazo, la oposición y sus líderes tenían previsto replantear la estrategia, con el objeto de alcanzar una salida electoral y democrática a la crisis política del país. Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras y líder de la oposición denunciaba un proceso de intimidación y juicios que presuntamente se habían abierto contra él y otros

dirigentes. (EUD, 1-2-2003, Nacional y Política). Por su parte, Manuel Cova, Secretario general de la CTV, declaraba que el presidente de la República no podría evitar la salida electoral. El dirigente confiaba en que la Mesa de Negociación sería el espacio donde se resolverían las controversias y concretarían las soluciones a la crisis política. (EUD, 1-2-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política)

La flexibilización del paro se iniciaba cuando se dio a conocer que la Coordinadora Democrática había girado instrucciones para que los distintos sectores que permanecían en el paro, reanudaran sus actividades en horario restringido. El anuncio lo hizo Manuel Cova, quien agregó que la decisión de la Coordinadora Democrática obedecía a una solicitud del Grupo de Amigos de Venezuela (Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal). (EUD, 2-2-2003, Alejandra M. Hernández, Nacional y Política).

El domingo 2 de febrero de 2003 se llevó a cabo el "Firmazo". La iniciativa provenía del sector opositor que a través de sus dirigentes informaba sobre una participación masiva de la ciudadanía. Durante este proceso los electores suscribieron con sus firmas algunas de las diez planillas presentadas. Albis Muñoz, primera vicepresidenta de Fedecámaras, afirmaba que la participación superaba los 4 millones de firmas. (EUD, 3-2-2003, Juan Francisco Alonso y Teresa de Vincenzo, Nacional y Política).

Presión del gobierno al sector productivo

La implantación de un control de cambio y de precios para muchos tenía un trasfondo político, que no era otro que, el de presionar a ciertos sectores de la oposición por sus posturas y opiniones. A la desobediencia tributaria el gobierno respondió con un control cambiario. Los primeros días del mes de febrero Tobías Nóbrega, Ministro de Finanzas, informaba que las empresas que solicitaran comprar divisas debían presentar, entre otros recaudos, las solvencias de pago del impuesto sobre la renta y que exigirían un chequeo férreo al respecto. (EUD, 1-2-2003, Economía).

De acuerdo a declaraciones de Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, el gobierno nacional adelantaba una campaña dirigida a la destrucción de la empresa privada. "El gobierno desearía que no reactiváramos nada para dejar morir a la empresa privada y construir sobre sus cenizas el modelo totalitario...". (EUD, 1-2-2003, Mariela León, Nacional y Política).

El economista Domingo Maza Zavala, directivo del Banco Central de Venezuela, negaba que las causas del control cambiario fuesen políticas y afirmó que se trataba de una medida para preservar las reservas internacionales. (EUD, 7-2-2003, Economía).

Continúan despidos en Pdvsa

La misma tendencia del mes anterior mostraba la industria petrolera. La ola de despidos continuaba. Para principios del mes de febrero se dieron a conocer 2.563 nuevos despidos lo cual arrojaba un total de 7.896 trabajadores despedidos. Este

número representaba el 20,8% del total de trabajadores. El argumento legal para despedirlos era el ausentismo laboral, basado en el artículo 102 y 105 de la Ley Orgánica del Trabajo (EUD, 1-2-2003, Economía).

El domingo 2 de febrero la prensa anunciaba la suspensión de la relación laboral entre Intesa y la mayoría de sus trabajadores. (EUD, 2-2-2003, Nacional y Política).

El miércoles 5 de febrero, se daba a conocer una nueva lista de trabajadores despedidos, esta vez de Intevop, la cual alcanzaba un total de 881 trabajadores. Este número representaba un poco más de la mitad de la nómina de esta institución de 1.600 personas. (EUD, 5-2-2003, Economía).

El domingo 9 de febrero de 2003, 899 trabajadores pasaban a engrosar la lista de los 9.000 trabajadores despedidos en Pdvsa, con lo cual se acercaba el total a los 10.000 casos. (EUD, 9-2-2003, Economía).

La nueva directiva de Pdvsa analizaba la posibilidad de no pagar las liquidaciones a los trabajadores despedidos afirmando que de esta manera cobrarían parte de los daños causados a la industria. (EUD, 11-2-2003, Economía).

El martes 11 y miércoles 12 de febrero fueron publicadas dos nuevas listas de 1.242 trabajadores despedidos de la División Oriente y 597 de la División de Occidente de Petróleos de Venezuela. El total ahora alcanzaba las 12.400 personas. (EUD, 12-2-2003, Economía) y (EUD, 14-2-2003, Mónica Castro, Economía).

El presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, informaba que los despidos no habían terminado pero que estaban en la etapa final del proceso. (EUD, 15-2-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía). Al día siguiente se publicaban tres nuevas listas de un total de 363 personas despedidas de las empresas Deltaven (72), Pequiven (31) y Pdvsa Gas (260). Estos casos se añadían a los 12.400 totalizando 12.763 despidos. (EUD, 16-2-2003, Economía).

Según el diputado de Convergencia, Rafael Parra, de los trabajadores desincorporados de sus puestos, 33% eran elegibles para jubilarse, 21,7% estaban de vacaciones y 8,8% estaban de reposo. Aproximadamente 132 mujeres estaban embarazadas o en reposo pre y posnatal. Rodríguez manifestó que la decisión de reestructurar la empresa ya se había contemplado. "Existía un exceso de personal, había 7.000 empleados de más, por tal motivo Recursos Humanos tenía prevista una disminución de personal pero los acontecimientos precipitaron la situación. No obstante todavía falta por realizar una verdadera reestructuración". Con los despidos la nómina ejecutiva pasó de 1.053 a 463 trabajadores, la nómina mayor pasó de 18.767 personas a 9.930, la nómina menor se redujo de 11.332 a 9.474, la nómina diaria pasó de 7.785 a 6.574 y la nómina contractual disminuyó de 1.302 a 1.259. (EUD, 21-2-2003, Mayela Armas, Economía).

El 21 de febrero de 2003 se dio a conocer que trabajadores despedidos de Pdvsa habían tomado los portones de diferentes sedes a lo largo del país para protestar por los despidos y exigir el reenganche a sus puestos de trabajo. En algunas de estas sedes se presentó la Guardia Nacional y algunos simpatizantes del oficialismo que arremetieron contra los ex-trabajadores, así lo denunció Edgar Rasquín, ex-Gerente

General del CRP. Los antiguos trabajadores petroleros ejecutaron el denominado "Portonazo" obstaculizando el flujo de vehículos. (EUD, 21-2-2003, Economía).

El domingo 23 y lunes 24 de febrero se informaba sobre la publicación de dos nuevos avisos de prensa donde se despedían 1.785 personas de la División Occidente y 1.088 de la División de Oriente. De esta manera el total de personal despedidas llegaba a más de 16 mil. (EUD, 23-2-2003, Economía) y (EUD, 24-2-2003, Mónica Castro, Economía)

Las reacciones no se hacían esperar y horas más tarde, en la ciudad de Maracaibo los trabajadores despedidos se apostaban frente a la sede del Ministerio del Trabajo para protestar la medida. Valiéndose de perdigones y bombas lacrimógenas, el grupo antimotines de la Policía Regional lograba disolver la manifestación organizada por Gente del Petróleo. (EUD, 26-2-2003, Mónica Castro, Nacional y Política).

La ola de despidos obligaba a los trabajadores afectados a organizarse, entre las medidas que se tomaron estaba la creación de un Fondo de Solidaridad, el cual fue destinado al apoyo de aquellos trabajadores que habían dejado de percibir ingresos y atravesaban dificultades económicas. Hasta esta fecha cinco mil trabajadores se habían beneficiado del plan. (EUD, 27-2-2003, Economía).

La nueva Estructura de la Industria Petrolera

En una nota de prensa del 23 de febrero de 2003, se hacía una descripción de lo que sería la nueva estructura de Pdvsa. De acuerdo a lo informado la figura de la presidencia de la República sería la cabeza principal. Específicamente, el primer mandatario presidiría el Consejo Nacional del Petróleo, organización integrada por una serie de Comisiones Técnicas encargadas del diseño de la política petrolera a corto, mediano y largo plazo, con especial énfasis en la auditoría fiscal de la estatal. La Asamblea de Accionistas la integrarían cuatro ministerios: Finanzas, Planificación y Desarrollo, Producción y Comercio y Energía y Minas. La idea era que Pdvsa se centrara en la actividad productiva. Por debajo de la Asamblea de Accionistas estaría la Junta Directiva que trabajaría en Caracas con un equipo corporativo mínimo enfocado hacia el área Financiera, Comercializadora, Jurídica y de Recursos Humanos. El grueso del personal estaría concentrado en las operadoras con base en Monagas-Anzoategui y el Zulia. (EUD, 21-2-2003, Economía).

El sector educativo anuncia retorno a clases

Luego de conversaciones con representantes de la Mesa de Negociación y Acuerdos y miembros del Grupo de Amigos, los rectores de las universidades privadas venezolanas anunciaban la reanudación de las clases a partir del lunes 3 de febrero de 2003. José Ignacio Moreno León, rector de la Universidad Metropolitana, actuando como vocero leyó un comunicado donde se informaba sobre la decisión. (EUD, 1-2-2003, Sara Carolina Díaz, Nacional y Política).

El presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada, Octavio De Lamo, declaró en prensa que las actividades educativas en el sector privado se reanudarían

el 10 de febrero de 2003 y que los colegios reprogramarían sus calendarios. (EUD, 2-2-2003, Nacional y Política).

Ante la paralización, el Ministro de la Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz, exhortó a los sectores de la educación a decir la verdad y a no desviar la realidad del país. En ese sentido rechazó que el despido y suspensión de directivos y docentes que se sumaron al paro cívico fuese una medida autoritaria. "Se les respeta su derecho político a no trabajar hasta que Chávez caiga, pero se les suspende el sueldo y se les pone suplente, eso no tiene nada de autoritarismo porque yo tengo que garantizar la normalidad de la enseñanza". (EUD, 2-2-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Retrasos en la asignación del situado a las Gobernaciones y Alcaldías

Al igual que el mes anterior, el retraso en la asignación de recursos del situado constitucional se tornaba en un problema grave. La deuda de las Gobernaciones y Alcaldías ascendía a 150 millardos de bolívares (EUD, 1-2-2003, Sara Carolina Díaz, Nacional y Política). El Gobernador del Estado Carabobo, Enrique Salas Feo, denunciaba al gobierno nacional por la retención del situado Constitucional e informaba que desde el mes de noviembre de 2002 el ejecutivo no había transferido los recursos correspondientes al Estado Carabobo, lo cual representaba una deuda de 97.995 millones de bolívares. (EUD, 7-2-2003, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política). Por su parte, Saady Bijani, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, interponía un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigirle al gobierno central la transferencia de los recursos correspondientes a la Ley de Asignaciones Económicas y Especiales. Bijani precisó que el ejecutivo adeudaba al Municipio San Francisco más de 11 mil millones de bolívares por este concepto. (EUD, 20-2-2003, Alejandra Hernández, Nacional y Política).

Al día siguiente, el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, informaba sobre una reunión que se realizaría el 25 de febrero para informar a gobernadores y alcaldes sobre la aprobación de 208 millones de dólares para el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FIEM), que serían entregados a las regiones. (EUD, 22-2-2003, Economía).

Comienza una nueva etapa del conflicto

A partir de lunes 3 de febrero comenzaba una nueva etapa del conflicto político del país. La normalización de la situación exigía a todos los sectores y sus líderes apoyar a sus representados y transmitir los lineamientos y estrategias a seguir en lo sucesivo. Carlos Ortega y Manuel Cova, presidente y secretario general de la CTV, ante los medios, explicaban la tarea inmediata de la central, la cual consistía en la defensa de los trabajadores públicos y privados y en la conformación del comité de conflicto del sector petrolero. (EUD, 5-2-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

El 10 de febrero la prensa informaba sobre la firma de un acuerdo marco para reactivar la producción entre el gobierno y Fedindustria. Así lo daba a conocer,

María Cristina Iglesias, Ministra del Trabajo. El acuerdo tenía la intención de reactivar el sector productivo nacional, proteger el empleo y aumentar el consumo. (EUD, 11-2-2003, Raquel Barreiro, Nacional y Política).

El curso que habían tomado los acontecimientos no convencía del todo a Carlos Ortega quien opinaba que la crisis del país no podía esperar y que no le sentaba bien que la dirigencia política del país acusara la resignación de conformarse con la salida del referendo revocatorio durante el mes de agosto. Ortega reconoció que no estuvo de acuerdo con la decisión de la Coordinadora Democrática de suspender el paro. (EUD, 12-2-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Postergan estructura del nuevo régimen de Seguridad Social

Luego de la aprobación durante el mes de diciembre de 2002 de la nueva Ley de Seguridad Social, se daba a conocer la decisión de postergar para el año 2004 la creación de la nueva estructura asociada a dicho régimen. La decisión se tomaba por falta de recursos. La nueva Ley de Seguridad Social establecía que en un plazo no mayor de 6 meses se implantarían las nuevas instituciones, a saber: la Superintendencia de Seguridad Social, la Tesorería y el Instituto Nacional de Pensiones. Una vez terminada la estructura comenzarían a funcionar los subsistemas. (EUD, 5-2-2003, Economía).

Denuncias del personal afectado por el paro

Para mediados de febrero, El Ministerio del Trabajo había recibido más de 30 mil denuncias sobre irregularidades laborales. La Ministra del Trabajo afirmaba que la institución se encontraba procesando las denuncias y estudiando los casos. Se pudo conocer que entre los casos se encontraban el de compañías que habían aumentado los sueldos a sus trabajadores a un monto que superaba los Bs. 633.366 con el objeto de despojarlos de la inamovilidad laboral. También se contabilizaban aquí los casos de suspensiones o coacciones para obligar a los empleados a firmar su renuncia y los despidos de personal protegido por la Ley Orgánica del Trabajo, como mujeres embarazadas, empleados de vacaciones, con fuero sindical y otros bajo permiso médico. (EUD, 11-2-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

Plantean creación de una central sindical paralela

Luego de las declaraciones dadas por el presidente de la República en su programa dominical "Aló Presidente" contra la Confederación de Trabajadores de Venezuela, en las que acusaba a sus dirigentes de "ilegítimos" y "fantasmas", la dirección nacional del partido Patria Para Todos (PPT) tomó la palabra para manifestar su intención de crear una nueva central sindical, que diera respuesta a los intereses de los trabajadores y tuviera una visión integral del país. De esta manera el partido azul hacía pública la discusión que venía manteniendo con sectores sindicales oficialistas, entre los que destacaban, el Frente Bolivariano de Trabajadores (FBT) y los representantes de organizaciones como Sutiss, Metro de Caracas, Fedeunep, entre otros. Las declaraciones las hizo Orlando Castillo, de

Autonomía Sindical, brazo obrero pepetista. (EUD, 11-2-2003, Taynem Hernández, Nacional y Política).

Obreros y enfermeras de hospitales metropolitanos en paro

Once mil trabajadores del sector salud, afectados a causa de la deuda del ejecutivo para con la Alcaldía Mayor, se declaraban en paro indefinido hasta tanto se les cancelaran las deudas que esta institución acumulaba hasta la fecha. Los empleados denunciaron que estas deudas correspondían a compromisos contractuales desde hace dos años. La situación se había hecho tan insostenible que las instituciones se habían visto en la necesidad de crear horarios especiales. La enfermera Carmen Vielma, directiva del Sindicato de Trabajadores Hospitalarios e integrante de la nómina del Periférico de Catia, destacó que ya acumulaban tres quincenas sin cobrar. (EUD, 11-2-2003, Marisol Decarli, Nacional y Política).

El martes 25 de febrero de 2003 unos 30 mil trabajadores del sector salud entre los que se contaban enfermeras, obreros, empleados, bioanalistas, radiólogos y odontólogos, cerraban durante toda la mañana las principales vías de acceso a sus centros de trabajo, reclamando a los ministerios de Salud y de Finanzas la liberación de los recursos con el objeto de cobrar las cuatro quincenas que se les adeudaba y los beneficios de cesta ticket y bono vacacional. (EUD, 26-2-2003, Ciudad).

EL GOBIERNO TOMA EL CONTROL DE LA SITUACIÓN

El 20 de febrero se convierte en una fecha emblemática. Luego de la decisión de la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática de flexibilizar el paro cívico, el gobierno nacional comienza a tomar el control de la situación. Durante esta fecha se daba a conocer la detención de Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras y líder de la oposición durante el paro cívico. Fernández, quien tenía una averiguación abierta a raíz de la convocatoria al paro cívico, era detenido cerca de la medianoche por ocho hombres fuertemente armados que se identificaron como funcionarios de la Disip. Albis Muñoz, directiva de Fedecámaras, rechazó la detención del empresario y la calificó de retaliación política. Carlos Ortega, máximo líder de la CTV, acusó directamente al presidente Chávez de lo que calificó como terrorismo de Estado. (EUD, 20-2-2003, Nacional y Política).

La medida fue tomada luego de que el Juez 34 de Control, Maikel Moreno ordenara la búsqueda y captura de los presidentes de Fedecámaras y la CTV, Carlos Fernández y Carlos Ortega. Sin titubear, Moreno aseguró que el hecho de haber sido abogado del concejal, Richard Peñalver en el caso Puente Llaguno no lo inhabilita para actuar en este caso. El Juez preciso que eran cinco los delitos por los cuales la fiscal Luisa Ortega Díaz responsabilizaba a los Carlos. Estos eran: traición a la patria, rebelión civil, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación. (EUD, 21-2-2003, Irma Alvarez, Nacional y Política).

Ante la situación, al ser consultado, el Comité Ejecutivo de la CTV descartaba la posibilidad de retomar la estrategia del paro general. La cúpula de la central ratificaba su empeño por alcanzar una salida negociada a la crisis a través de la Mesa de Negociación. Sin embargo no dudaron en afirmar que la detención de Carlos Fernández, era una "provocación" y que el gobierno había sentido el impacto de El Firmazo. Además se confirmaba la situación de Carlos Ortega, quien también era solicitado por la justicia, Manuel Cova, dirigente de la CTV, afirmó que acudirían a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (EUD, 21-2-2003, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).

Por su parte, Carlos Ortega anunciaba su pase a la clandestinidad y afirmaba que no se entregaría. Durante las entrevistas, que daba vía telefónica, señaló que el país carecía de estado de derecho y que la sociedad debía prepararse para la escalada de represión que estaba iniciando el "régimen". (EUD, 21-2-2003, Nacional y Política).

Mientras esto ocurría, el presidente de la República, Hugo Chávez, festejaba la encarcelación, manifestando que "ya era hora" e irónicamente expresaba: "Yo fui informado a la medianoche y dije procedan. Y me acosté con una sonrisa. Mandé a buscar a la una de la mañana un dulce de lechosa que me mandó mi mamá para degustarlo. No es que uno tenga algo contra alguien, es que tiene que haber justicia". Sin embargo, el jefe del ejecutivo no dejó de acusar a los jueces que incurren en retardo, omisión o denegación de justicia en el desempeño de sus funciones. Además denunció que los medios de comunicación del sector privado habían comenzado una campaña para convertir a los delincuentes en víctimas. (EUD, 21-2-2003, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

La audiencia de presentación de Carlos Fernández ante el Tribunal 49 de Control que estaba prevista para el día sábado 22 se realizó el mediodía del domingo 23. La juez 49 de Control, Gisela Hernández, debía tomar una decisión sobre el caso, específicamente si mantenía la medida de retención judicial dictada por el juez Maikel Moreno o sustituirla por otra menos gravosa como el arresto domiciliario. (EUD, 23-2-2003, Alejandra Hernández, Nacional y Política). Mientras esto ocurría los Círculos Bolivarianos tomaban las adyacencias del Palacio de Justicia exigiendo una decisión "favorable a la revolución". Los simpatizantes del presidente llegaron en autobús y trancaron la avenida Bolívar. (EUD, 23-2-2003, Nacional y Política).

Horas más tarde se conoció que la juez había decidido ordenar arresto domiciliario al dirigente. (EUD, 24-2-2003, Angel Méndez, Nacional y Política).

José Vicente Rangel, vicepresidente de la República, declaraba que respetaba y acataba la decisión. Para la jefa de la bancada del MVR en la Asamblea Nacional, Cilia Flores, lo importante es que la decisión reconocía que el presidente de Fedecámaras había incurrido en delito; "preso es preso". (EUD, 24-2-2003, Nacional y Política).

Luego de celebrar el regreso de Carlos Fernández a su hogar, la primera vicepresidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz, reiteró que la oposición no tenía previsto convocar a una nueva paralización de actividades como respuesta a las últimas acciones del gobierno. Sin embargo informó que se encontraban afinando la

nueva estrategia a seguir. (EUD, 24-2-2003, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).

Horas después de conocerse la decisión de "casa por cárcel" sobre el dirigente empresarial, Carlos Fernández declaraba sobre su situación. "Fueron momentos duros y difíciles de meditación. Uno se pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿qué he hecho para merecer esto? Por mi mente pasaron no solo los episodios del 2 de diciembre, sino desde el comienzo de esta lucha, por buscar una salida a la crisis económica, a la crisis política del país. Y ese análisis me da como resultado que no tengo nada, pero nada, de que sentirme culpable. Todas mis actuaciones han estado apegadas a la Constitución, dirigidas a beneficiar a las grandes mayorías. No ha habido por mi mente, jamás, ambición de poder ni de dinero. Soy un hombre sencillo... humilde, trabajador" (EUD, 25-2-2003, Mariela León, Nacional y Política).

Ante los hechos, el Consejo Nacional Extraordinario de Fedecámaras, resolvía asumir una ofensiva en respuesta a la "embestida oficial". Albis Muñoz, vicepresidenta de la máxima cúpula empresarial venezolana, anunciaba que convocarían a sus pares de la región afiliados en la Organización Internacional de Empleadores (OIE) a una reunión de emergencia y reiteró que Carlos Fernández era un "preso político". La dirigente agregó que la posibilidad de una nueva paralización estaba descartada y que su misión a partir de ese momento sería la de conservar los puestos de trabajo vigentes. (EUD, 25-2-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Dos días después la líder empresarial anunciaba la definición de un plan de empleo en el que estarían trabajando conjuntamente con la CTV. (EUD, 27-2-2003, Mariela León, Economía).

El miércoles 26 de febrero se realizaba una marcha en solidaridad con Fedecámaras y la CTV. La concentración opositora reunió un nutrido número de manifestantes quienes caminaron desde Chuao hasta el Bosque y los Caobos (sedes de ambas instituciones). Varios dirigentes de la Coordinadora Democrática tuvieron que enfrentar quejas de algunos participantes, "cansados de no ver resultados de tanta marchadera" y de otros urgidos por "un poco más de organización". (EUD, 27-2-2003, Gustavo Méndez y Teresa De Vincenzo, Nacional y Política).

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DESPUÉS DEL PARO

Sin duda el paro tendría un fuerte impacto económico, para algunos sin precedentes en la historia de Venezuela. Durante el foro "Perspectivas Económicas" organizado por la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham), los empresarios asistentes coincidieron en que el año 2003 sería difícil de transitar. Preveían una caída histórica el Producto Interno Bruto (PIB) estimada en 18,3% y una caída de la inversión privada, los niveles de empleo, los salarios y las ventas. Doscientos dieciocho empresarios fueron consultados sobre esta materia y la gran mayoría expresó que entre las prioridades estaban la salida política a la crisis, la reactivación de la industria petrolera, los controles de cambio y

precios y el desempleo. De los consultados, el 62% calificó como "muy baja" la efectividad de las nuevas políticas económicas. Mientras tanto, el 94% señaló que las autoridades debían abrir un mercado secundario de divisas. Estos y otros resultados fueron presentados al final del evento por el vicepresidente ejecutivo de Venamcham, Antonio Herrera-Vaillant. (EUD, 21-2-2003, Mariela León, Nacional y Política).

Marzo de 2003

La "niña mimada" de las industrias nacionales, Petróleos de Venezuela S. A., sería objeto de la politización que vivían el resto de los sectores del país, para muchos un daño irrecuperable, para otros se hacía justicia. El protagonismo que monopolizaban los partidos era un terreno tomado por los sindicalistas, petroleros y empresarios embuídos en una centrifuga política. Las presiones judiciales se habían convertido en una constante durante este mes y la situación económica originaba serias distorsiones en las actividades productivas del país.

PDVSA, LA GRAN PROTAGONISTA EN EL OJO DEL HURACÁN

Guerra Legal en PDVSA

La Contraloría General de la República investigaba a algunos miembros de la asociación civil "Gente del Petróleo" por considerarlos responsables de la paralización de la industria petrolera por fines políticos. También resaltaba que estimarían los daños patrimoniales ocasionados por la paralización de PDVSA, así como a sus responsables (EUD, 04-03-2003, Nacional y Política).

Los abogados denunciaban irregularidades en los procesos judiciales contra la "Gente del Petróleo". La distribución nocturna de los expedientes, las solicitudes de fijar una audiencia que no existía en las leyes, la no utilización del sistema automatizado de distribución de expedientes y vicios en las citaciones eran algunos de los problemas a los que hacían referencia los abogados (EUD, 04-03-2003, Nacional y Política). Por ello consignaban el día 5 de marzo un recurso de apelación ante el Tribunal 50 de Control Penal y exigían que el caso se entregara a la Corte de Apelaciones. Le tocaba al tribunal emplazar a la Fiscalía para que emitiera una respuesta (EUD, 05-03-2003, Nacional y Política).

El ex gerente de PDVSA, Edgar Quijano, denunciaba ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), violaciones contra los derechos de los trabajadores de PDVSA. Particularmente veía amenazada la libertad sindical y denunciaba persecuciones políticas del gobierno en contra de los trabajadores petroleros (EUD, 05-03-2003, Nacional y Política). A estas denuncias debía sumarse el despido masivo de los trabajadores. Ronald Figueroa y Rodolfo Moreno, líderes de

Unapetrol, denunciarían las mismas violaciones ante la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libre (Ciosl) (EUD, 06-03-2003, Economía).

El 6 de marzo trabajadores petroleros exigían ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo la prohibición, al presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque y a la junta directiva de Intevep, de la publicación de listas de despidos, así como declaraciones públicas que afectaran los derechos al honor, reputación, integridad psíquica y moral, entre otros (EUD, 06-03-2003, Nacional y Política). La mencionada denuncia se refería particularmente a la lista publicada por el diario “Últimas Noticias”, en donde se anunciaba el despido de 881 trabajadores de Intevep por “actos contrarios a la debida probidad” (EUD, 06-03-2003, Nacional y Política).

El 11 de marzo los abogados de la ex gerente de Pdvsa y miembro de “Gente del Petróleo”, Mireya Ripanti, exigían la revocatoria de privación preventiva de libertad, argumentando la inexistencia de pruebas de peligro de fuga u obstaculización de investigaciones (EUD, 06-03-2003, Nacional y Política). Los abogados de Ripanti acudían, el 14 de marzo, al tribunal 50 de Control, ya vencido el plazo para pronunciarse sobre la solicitud de revocatoria, pero el esfuerzo era infructuoso, la juez no acudiría al despacho (EUD, 14-03-2003, Irma Álvarez, Nacional y Política)

Juan Martín Echeverría, abogado defensor de algunos miembros de la “Gente del Petróleo” tildaba las actuaciones del gobierno en el caso de los petroleros, como terrorismo judicial. Así, sostenía que el expediente levantado en contra de dichos trabajadores no demostraba relación entre los hechos imputados y los trabajadores, a pesar de que el fiscal general hablara de la existencia de “249 elementos de convicción”. Echeverría también señalaba que se había dado la orden de destituir a los petroleros, negarles las prestaciones sociales y encarcelarlos (EUD, 11-03-2003, Juan Martín Echeverría, Nacional y Política).

Los abogados de Juan Fernández apelaban la decisión que ordenaba la aprehensión de 7 integrantes de la “Gente del Petróleo”, por considerar que no existían elementos de convicción que demostraran la comisión de delitos tales como la rebelión civil, agavillamiento, instigación a delinquir o suspensión del suministro de energía (EUD, 13-03-2003, Nacional y Política). El 14 de marzo los abogados de Juan Fernández acudían a la Fiscalía para exigir que tres expertos determinaran elementos que permitirían esclarecer responsabilidades en el manejo inadecuado de los equipos de la refinería El Palito (EUD, 14-03-2003, Irma Álvarez, Nacional y Política).

Para el penalista Arteaga Sánchez, el Poder Judicial no brindaba las condiciones de seguridad que impedirían el peligro de fuga de los investigados, pues no se respetan las garantías contempladas en la Constitución y las leyes, que permitirían llevar a cabo un proceso justo y transparente (EUD, 17-03-2003, Nacional y Política).

El 18 de marzo quedaban sin efecto las órdenes de captura contra los miembros de “Gente del Petróleo”, por ser consideradas, por la Corte de Apelaciones, como violatorias de la Constitución; la decisión también impedía las distribuciones nocturnas de los expedientes. Sin embargo la Fiscalía anunciaba que interpondría un

recurso de amparo ante el TSJ, así como una medida cautelar que dejaría sin efecto la decisión que favorecía a los petroleros, hasta el pronunciamiento de los cinco magistrados (EUD, 17-03-2003, Nacional y Política). La decisión de la Corte de Apelaciones, emitía a su vez un oficio para que fuese iniciado nuevamente el procedimiento judicial, cuyo primer paso sería la designación de los abogados defensores de los petroleros, sin embargo la juez decimotercera de control se oponía a la juramentación de los mismos (EUD, 20-03-2003, Patricia Ventura Nicolás, Nacional y Política). Este mismo día 20 de marzo les eran aceptados los poderes a los abogados defensores. (EUD, 21-03-2003, Nacional y Política).

La Fiscalía interpondría un amparo en el TSJ contra la decisión de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones, por daño causado al Ministerio Público, porque “fue declarada inadmisibles la apelación interpuesta por la defensa (...) por considerar que no tenían cualidad para actuar” y porque “no han sido anuladas las actuaciones de la Fiscalía” (EUD, 21-03-2003, Nacional y Política).

El 22 de marzo ya la Corte Primera de los Contencioso había admitido el amparo contra el presidente de Pdvsa, Rodríguez Araque y la junta directiva de Intevep, recurso solicitado por 230 trabajadores de Intevep (EUD, 22-03-2003, Nacional y Política).

Nuevamente fiscales acudían a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para interponer un amparo en contra de la decisión de dejar sin efecto las órdenes de captura contra los miembros de “Gente del Petróleo”, así como a la de desaplicación de la distribución de expedientes en horas nocturnas (EUD, 22-03-2003, Irma Álvarez, Nacional y Política).

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anunciaba que revisaría en detalle la decisión tomada por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones que dejaba sin efecto las órdenes de captura de miembros de “Gente del Petróleo” (EUD, 26-03-2003, Nacional y Política).

La “Nueva PDVSA”

El 7 de marzo se informaba de una nueva junta directiva en Pdvsa, la misma estaría integrada por: Aires Barreto, Félix Rodríguez, Luis Marín, Luis Vierma, coronel Dexter Rodríguez, Rafael Rosales y Nelson Núñez. Otro de los anuncios realizados este día era el levantamiento de la cláusula de “fuerza mayor en todos los crudos y productos de Pdvsa”. Y por último, este día se formalizaba la creación del Consejo Nacional de Hidrocarburos, que presidiría el propio Hugo Chávez (EUD, 07-03-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

Resaltaba el Ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, que en la conferencia ordinaria de la OPEP había acordado que la situación de Pdvsa ya se encontraba normalizada. Ese mismo día sentenciaba que por decisión interna de la industria se había decidido compensar a futuro el petróleo que durante el paro no había podido venderse (EUD, 15-03-2003, Economía).

Más despidos en PDVSA

La gerencia general de Pdvsa occidente anunciaba públicamente, el 8 de marzo, 628 nuevos despidos, para alcanzar una cifra de despidos superior a los 16.200 trabajadores (EUD, 08-03-2003, Mónica Castro, Economía). El 11 de marzo, en Paraguaná, se incorporaban 41 trabajadores más a las listas de despidos de la industria petrolera, las mismas estarían relacionadas con los causales de despido previstos en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, según el gerente general del Centro Refinador Paraguaná (EUD, 11-03-2003, Economía)

El Ministerio del Trabajo y Pdvsa revisaban 700 casos de despidos; se trataba de trabajadores que se encontraban de vacaciones o de mujeres embarazadas, según informaba el director externo de Pdvsa, Nelson Núñez (EUD, 13-03-2003, Economía).

“No habrá más despidos en Petróleos de Venezuela” era la sentencia que el 15 de marzo hacía el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, pues consideraba que la situación de la industria tendía a normalizarse y por ello “reorientaban” todos los recursos humanos de la estatal petrolera (EUD, 15-03-2003, Economía). Para esta fecha se calculaban las cifras de despidos en un número cercano a los 17 mil trabajadores, lo que representaba un 75% de la nómina ejecutiva, un 60% de la nómina de profesionales y técnicos y un 22% de la nómina de obreros. Lo que significaba cerca de 225 mil años de experiencia laboral (EUD, 15-03-2003, Economía). Habían pasado escasas horas del anuncio del ministro cuando se publicaba una lista de 34 nuevos despidos, esta vez en Pdvsa Gas y por las mismas razones, es decir, invocando el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo (EUD, 16-03-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

.....Se perseguía a los líderes petroleros

El presidente de “Gente del Petróleo”, Juan Fernández, se presentaba sorpresivamente, en un acto público de la oposición, a pesar de tener una orden de captura en su contra, sin embargo, fue fallido el intento de la Disip por concretar su captura (EUD, 09-03-2003, Nacional y Política).

Juan Fernández llamaba a la resistencia y a la concentración de esfuerzos para lograr la salida del gobierno del presidente Hugo Chávez, mientras se consideraba perseguido político del gobierno (EUD, 17-03-2003, Nacional y Política).

FEDECÁMARAS ASUMÍA UN ROL POLÍTICO

La opinión de sus líderes

Para Albis Muñoz, vicepresidenta de Fedecámaras, el modelo político utilizado por el gobierno era confiscatorio de las libertades, pues en su opinión la independencia económica del pueblo no convenía y por ello se pretendía restar poder al desarrollo. Según ésta, Carlos Fernández se había convertido en adversario

del gobierno al asumir un rol político que ponía en relieve las debilidades de la gestión económica del gobierno y de su capacidad financiera.

También resaltaban como positivos algunos efectos de la protesta cívica, tales como la cohesión de la sociedad civil, el alerta a la comunidad internacional de la situación del país, el conocimiento de los derechos ciudadanos, entre otros. Aseguraba que los trabajadores petroleros habían reaccionado con la paralización de la industria ante las intenciones del gobierno de politizar y tomar control de una industria que se había mantenido al margen y había logrado altos niveles de desarrollo (EUD, 02-03-2003, Mariela León, Economía).

Ante la remoción de los cuadros directivos de Fedecámaras, Albis Muñoz, resaltaba su deseo de asumir la presidencia, la cual consideraba como una responsabilidad. Así mismo sostenía que el rol que asumía Fedecámaras obedecía a la ofensiva de un “modelo político” que pretendía destruirlos, sin embargo su mayor interés era la preservación del aparato productivo y de los puestos de trabajo, para lo cual trabajaban conjuntamente con la Central de Trabajadores de Venezuela (EUD, 02-03-2003, Economía).

Aquí también se libraba una batalla judicial

Carlos Fernández tenía tres denuncias en su contra ante la Fiscalía, por propiciar enfrentamientos entre clases sociales. Una de ellas era efectuada por el presidente de la Federación de Defensa de DDHH, Ignacio Ramírez. Otra, por algunos diputados, por el delito de instigación a delinquir y por impedir el libre tránsito. La tercera denuncia la había hecho el juez Jesús Caldera por desobediencia tributaria y por desacatar el fallo que ordenaba reactivar PdVsa (EUD, 02-03-2003, Nacional y Política). En tanto, la juez 49 de Control Penal, Gisela Hernández, ordenaba la reclusión en casa de Carlos Fernández, pues consideraba suficientes los videos, recortes de prensa y las denuncias consignadas.

Por razones de salud se otorgaba casa por cárcel al presidente de Fedecámaras, aunque la Fiscalía apelaba la decisión argumentando la posibilidad de fuga y el hecho de que lo consideraban incurso en delitos de traición a la patria, agavillamiento y devastación. Mientras, Pedro Berrizbeitia apelaba argumentando que no había peligro de fuga (EUD, 02-03-2003, Nacional y Política).

Fernández negaba su vinculación con la Coordinadora Democrática y aseguraba que Fedecámaras actuaba de forma independiente, lo que fue considerado por la juez Luisa Ortega Díaz como obstaculización de las investigaciones (EUD, 03-03-2003, Nacional y Política). Y entre dimes y diretes el Ministerio Público impugnaba la medida de arresto domiciliario y los abogados de Fernández solicitaban su libertad (EUD, 06-03-2003, Alejandra M. Hernández, Nacional y Política). Así, el 7 de marzo era admitida la apelación de Fernández contra la decisión que le impedía rendir declaración ante el Tribunal Primero de Control (EUD, 07-03-2003, Alejandra Martínez, Nacional y Política). El día 8 de este mes se conocía que la Sala 7 de la Corte de Apelaciones decidiría acerca del arresto domiciliario del empresario, cuyo plazo límite era el 11 de marzo, fecha en la que ya los médicos

recomendaban la hospitalización del empresario por padecimientos de hipertensión y diabetes (EUD, 11-03-2003, Alejandra M. Hernández, Nacional y Política).

El 12 de marzo los jueces del caso Fernández eran recusados por “adelanto de opinión” y por ello el expediente pasaba a otra sala de la Corte de Apelaciones (EUD, 12-03-2003, Irma Álvarez, Nacional y Política). El día 13 se conocía que la Sala 4 de la Corte de Apelaciones de Caracas se pronunciaría sobre la admisión de recusación contra los jueces de la Sala 7, que en días pasados debían decidir sobre la detención domiciliaria del líder empresarial Carlos Fernández. Esta misma Sala ordenaba que fuese el Tribunal 1° de Control el que conociera nuevamente sobre el caso (EUD, 13-03-2003, Alejandra M. Hernández F., Nacional y Política). Ya el viernes 14 de marzo se conocía que el miércoles próximo la Sala 4 debía decidir sobre la recusación interpuesta por el Ministerio Público, que en caso de ser declarada con lugar, también responsabilizaría a esta sala por el pronunciamiento sobre la medida cautelar sustitutiva de Fernández (EUD, 14-03-2003, Alejandra M. Hernández F., Nacional y Política)

El penalista Arteaga Sánchez consideraba que eran suficientes las violaciones al proceso judicial, al derecho a la defensa y al principio de juez natural para considerar viciado de nulidad la causa que se le seguía a Carlos Fernández (EUD, 17-03-2003, Alejandra M. Hernández F., Nacional y Política). Así mismo sostenía que eran éstas las razones que podían incidir en el peligro de fuga, convirtiendo a los mismos órganos del Poder Judicial en responsables de la situación (EUD, 17-03-2003, Nacional y Política).

Pese a su delicado estado de salud, no se autorizaba el traslado de Carlos Fernández a una clínica, debido a que la Juez 49 de Control no había recibido el informe forense que se requería para tomar la decisión (EUD, 19-03-2003, Nacional y Política). La Sala 7 de la Corte de Apelaciones decidía dejar en libertad plena al líder empresarial Carlos Fernández, debido a la ausencia de pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad del mismo en el delito de rebelión civil (EUD, 21-03-2003, Alejandra M. Hernández F., Nacional y Política). Ese mismo día se conocía que la decisión de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones sería objeto de un recurso de amparo que introduciría el Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia, para solicitar la anulación de la decisión que dejaba en libertad plena a Fernández (EUD, 21-03-2003, Nacional y Política). En tanto, la vicepresidenta de Fedecámaras manifestaba su satisfacción por tal decisión (EUD, 21-03-2003, Nacional y Política) y la fiscal Luisa Ortega Díaz la consideraba nula pues en su opinión existían una serie de irregularidades en la decisión, como la falta de firma por parte de uno de los jueces (EUD, 22-03-2003, Alejandra M. Hernández F., Nacional y Política).

El 25 de marzo se conocía que sería el magistrado José Delgado Ocando, el ponente del caso Fernández, quien tendría que pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de amparo introducido por la fiscal Luisa Ortega Díaz, que buscaba la nulidad de la decisión de libertad plena del empresario (EUD, 25-03-2003, Alejandra M. Hernández F., Nacional y Política), pero ya el día 28 se consideraba la posibilidad de que fuese declarado inadmisibile el amparo interpuesto por la fiscal

Luisa Ortega (EUD, 28-03-2003, Alejandra M. Hernández F., Nacional y Política). Mientras tanto, el abogado de Fernández solicitaba la evacuación de las pruebas promovidas por la defensa para que los magistrados analizaran los elementos probatorios antes de que se produjese una decisión sobre la medida cautelar solicitada por la fiscal Díaz (EUD, 29-03-2003, Alejandra M. Hernández F., Nacional y Política).

Los empresarios internacionalizaban sus protestas

Los empresarios elevaban sus denuncias ante la OIT, a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), por violaciones a los derechos de los empresarios. Entre otras, el hostigamiento a líderes empresariales como Carlos Fernández y la instigación a la ocupación ilegal de tierras productivas (EUD, 20-03-2003, Nacional y Política).

DE LA MANO EL SINDICALISMO Y LA POLÍTICA

.....Carlos Ortega en la mira

El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, no escapaba a las mismas acusaciones que se le hacían a Carlos Fernández. Se trataba de denuncias por delito de rebelión, instigación a delinquir, llamado a desobediencia tributaria y desacato al fallo que ordenaba reactivar Pdvsa (EUD, 02-03-2003, Nacional y Política). El 12 de marzo el secretario de la CTV, Manuel Cova comentaba que existían rumores de amenazas de muerte sobre Ortega (EUD, 12-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Mientras, en medio de operativos, la Disip trataba de localizar al líder sindical (EUD, 14-03-2003, Nacional y Política).

La solicitud de asilo diplomático a Costa Rica hecha por Carlos Ortega y aceptada por el gobierno de Costa Rica, se debía a “temores por su integridad física” y persecución política (EUD, 15-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política) por lo que el Ministro de Interior y Justicia, Lucas Rincón, declaraba que daría el salvoconducto y la garantías necesarias (EUD, 15-03-2003, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

El secretario de la CTV, Manuel Cova, señalaba que el asilo de Ortega era la consecuencia de las presiones y persecuciones del gobierno. Para el secretario ejecutivo de la CTV, Pablo Castro, a Ortega sólo le quedaba esa jugada, sin embargo el dirigente de Acción Democrática, Rafael Marín, sostenía que la solicitud de Ortega demostraba las debilidades del estado de derecho (EUD, 15-03-2003, Nacional y Política). Asdrúbal Aguiar invocaba al artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos para corroborar el derecho al asilo que tenía el líder sindical (EUD, 15-03-2003, Asdrúbal Aguiar, Nacional y Política).

También Acción Democrática daba respaldo al líder sindical, a través de dirigentes como Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup y Alfonso Marquina (EUD, 11-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

El 16 de marzo se conocía que Manuel Cova viajaría a Suiza, para exponer el caso de Ortega ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como otros casos de líderes de la CTV (EUD, 16-03-2003, Nacional y Política).

En torno al caso, el abogado Omar Estacio, revelaba que Carlos Ortega no había solicitado asilo territorial ante el gobierno de Costa Rica, por lo que podría tomarse dicho país sólo como tránsito para dirigirse a otro destino (EUD, 17-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Pero no todo era solidaridad con el líder cetevista, pues los dirigentes sindicales del MVR le enviarían una comunicación al Gobierno de Costa Rica para que no apoyaran, lo que consideraban, la “cobardía” de Ortega (EUD, 18-03-2003, Nacional y Política). No obstante, el lunes 17 de marzo, el canciller costarricense, Roberto Tovar, anunciaba oficialmente la concesión de asilo territorial para Carlos Alfonso Ortega Carvajal (EUD, 18-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Ese mismo día, el diario “La Nación” de Costa Rica, resaltaba en su editorial la concesión de asilo para el líder sindical, considerando que con esta decisión se hacía honor a la tradición del país en el área. El editorial a su vez consideraba la pertinencia de la decisión dada las situaciones de persecución política, la poca independencia de los tribunales de justicia y las presiones ejercidas sobre los medios de comunicación social (EUD, 18-03-2003, Nacional y Política).

Ahora, el viaje a territorio costarricense sólo dependía del salvoconducto del Estado Venezolano (EUD, 19-03-2003, Rodolfo Cardona Marrero, Nacional y Política).

Se conocía que Ortega daría continuidad a las estrategias de lucha internacional ante la situación política de Venezuela, con el apoyo de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl) (EUD, 19-03-2003, Nacional y Política).

Se mantenía la incertidumbre por el viaje de Ortega a Costa Rica, pues todavía el día 20 de marzo el gobierno no había entregado el salvoconducto necesario (EUD, 20-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Mientras, el Ministro de Relaciones Exteriores, Roy Chaderton, estimaba que los trámites podrían tomar una semana (EUD, 20-03-2003, Alfredo Rojas, Nacional y Política). Así mismo expresaba su preocupación por las acciones políticas que podría realizar Ortega desde suelo Costarricense (EUD, 21-03-2003, Nacional y Política), a lo cual el Canciller Roberto Tovar, respondía que su gobierno no permitiría ninguna acción política contra un gobierno establecido constitucionalmente (EUD, 22-03-2003, Gustavo Méndez y Teresa De Vincenzo, Nacional y Política).

A quince días del asilo, todavía no se entregaba el salvoconducto, aunque la presencia de funcionarios de la Disip en los alrededores de la embajada tica y la toma de las huellas dactilares de Ortega hacían sospechar una pronta salida del país (EUD, 26-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). El miércoles 26 de marzo la sospecha tomaba fuerza, pues el Gobierno entregaba el salvoconducto necesario para la tan ansiada salida del líder sindical (EUD, 27-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Después de varios días en silencio, Ortega admitía que su vida corría peligro en el país y por ello salía, sin que eso significara el abandono de sus luchas. Afirmaba que la “lucha continuaba” (EUD, 28-03-2003, Nacional y Política).

El Ministro de Relaciones Exteriores, Roy Chaderton, también hablaba y se refería a la vocación democrática y al apego de Venezuela a los tratados internacionales, demostrado en el caso de Ortega (EUD, 28-03-2003, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

Finalmente, el día 28 de marzo, Carlos Ortega viajaba rumbo a Costa Rica, con la promesa de trabajar desde el exterior para salir de la crisis que atravesaba el país (EUD, 28-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). En tanto que el canciller de ese país, Roberto Tovar, le recordaba que no debía “instar a ciertos movimientos en Venezuela” mientras estuviese en territorio tico (EUD, 29-03-2003, Nacional y Política). No obstante, Ortega declaraba desde Costa Rica que la oposición debía conservar la unidad para sacar al presidente Chávez, al tiempo que insistía en sus denuncias contra el Gobierno (EUD, 29-03-2003, Nacional y Política).

Los cambios llegaban al movimiento sindical

Pablo Castro, Alfredo Ramos y Froilán Barrios proponían el fortalecimiento de la estructura de base del movimiento sindical, pues consideraban que menos sindicatos darían más fuerza al movimiento (EUD, 06-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Existía incertidumbre en la central obrera por los cambios que podían averse, por lo que el martes 18 de marzo se reunían sus líderes para definir los próximos lineamientos y estrategias (EUD, 19-03-2003, Nacional y Política).

Una nueva organización sindical, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), asomaba la cabeza en el movimiento sindical venezolano. Dirigida por Ramón Machuca, Franklin Rondón, Francisco Torrealba y Rafael Rosales, buscaría las reivindicaciones de los trabajadores venezolanos sin vincularse a las posiciones oficialistas o de oposición (EUD, 19-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Se creaba la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Fenacts) con intenciones de tomar el control de la convención colectiva del sector. Así mismo, resaltaban el presidente de la federación, Ramón Sánchez y su secretario, Manuel Muñoz, que contaban en sus filas con ocho sindicatos cetevistas (EUD, 23-03-2003, Nacional y Política).

Próxima a la celebración de la asamblea anual de la CTV, se ponía nuevamente en el tapete la discusión sobre la reestructuración de la organización. Pablo Castro y Froilán Barrios aspiraban la agrupación de los sindicatos y federaciones en grandes bloques, mientras que el secretario ejecutivo, Pedro Arturo Moreno, insistía en retomar el sector laboral y plantear al país un programa social y económico (EUD, 29-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

También los sindicalistas eran objetivo de la contienda legal

Manuel Cova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela era citado en calidad de testigo, por segunda vez por la misma fiscal que acusaba al presidente de la CTV, Carlos Ortega y de Fedecámaras, Carlos Fernández, lo cual era considerado por Cova como una persecución política (EUD, 11-03-2003, Rodolfo Cardona Marrero, Nacional y Política). Cova declaraba como testigo y sostenía que la CTV sólo había realizado una “exhortación”, pues la participación de los venezolanos en el paro cívico había sido voluntaria. (EUD, 11-03-2003, Nacional y Política).

Se internacionalizaba la lucha sindical venezolana

Representantes sindicales del Grupo de Países Amigos de Venezuela (México, Chile, España, Portugal, Brasil y Estados Unidos), encabezados por el secretario de la Ciosl, Guy Ryder, expresaban su apoyo a los trabajadores desincorporados en Petróleos de Venezuela (EUD, 13-03-2003, Economía). Así mismo el Grupo de Amigos Sindicalistas de Venezuela (GASV) solicitaba una salida democrática constitucional y electoral a la crisis política del país, rechazando a su vez cualquier solución violenta. Como balance de su visita, Ryder expresaba que el movimiento sindical se encontraba en peligro y que el gobierno no tenía intenciones de buscar salidas a la crisis. Así mismo calificó como inéditas las 16 mil desincorporaciones de la industria petrolera (EUD, 14-03-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Manuel Cova sostenía reuniones en Suiza con líderes obreros de la OIT así como de otras organizaciones para plantear aquellos casos de “persecuciones judiciales y policiales” contra líderes de la CTV (EUD, 19-03-2003, Nacional y Política).

La agenda de lucha internacional de Ortega, pasaba por diferentes destinos, tales como Estados Unidos, España y Suiza en donde se realizaría la asamblea anual de la OIT. En éstos plantearía la situación política del país y denunciaría las violaciones a los derechos laborales (EUD, 27-03-2003, Nacional y Política).

LAS PROTESTAS, EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA

Las obras del Metro, como manzana de la discordia

Trabajadores de la construcción protestaban ante la sede de los tribunales, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Ministerio Público, denunciando la semiparalización de las obras de la Línea 4 del Metro de Caracas, donde aspiraban trabajar. Así mismo, exigían las investigaciones de las lesiones sufridas por algunos compañeros en recientes enfrentamientos con los trabajadores de la Línea 4 (EUD, 01-03-2003, Ciudad).

PDVSA un volcán en erupción

La instalación del año judicial, en el Hotel del Lago en el Estado Zulia, se convertía en la causa de una fuerte protesta, protagonizada por la Gente del Petróleo,

Primero Justicia y miembros de la sociedad civil, contra los jueces asistentes. Más tarde las protestas estarían dirigidas a efectivos militares encargados de sacar algunos bienes inmuebles de las instalaciones del edificio de Exploración y Producción de PDVSA, ubicado en la avenida 5 de Julio (EUD, 01-03-2003, Mónica Castro, Nacional y Política).

El 12 de Marzo, Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la CTV, anunciaba la posibilidad de llevar a cabo nuevas protestas en las zonas Petroleras del país debido a los despidos masivos que llevaba a cabo la estatal Petrolera, así como la probable pérdida del año escolar de los hijos de los extrabajadores de PDVSA, el cese de los beneficios en la prestación de los servicios de salud, los retrasos en los pagos de pensionados y jubilados, entre otros. Dichas acciones serían definidas en asamblea, conjuntamente con empleados públicos y el magisterio nacional (EUD, 12-03-2003, Nacional y Política).

Le tocaba la “Hora 0” al Transporte

El 15 de Marzo los transportistas de las rutas urbanas y suburbanas de la ciudad capital decidían declararse en Hora 0 como medida de presión para lograr la derogatoria del decreto que mantenía congeladas las tarifas y la posterior discusión del ajuste de las mismas. Sus aspiraciones pretendían un aumento mínimo del 100%, argumentando el alza en más de 300% de los insumos necesarios para el sector. Así mismo los transportistas hacían mención al aumento de los niveles de inseguridad como causa de su protesta (EUD, 15-03-2003, Migdalis Cañizales V., Nacional y Política).

CONTROL DE CAMBIO, MUCHA TELA QUE CORTAR

Los Industriales en tres y dos

El 1° de Marzo, Rafael Alfonso, Presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA), señalaba la imperiosa necesidad de que el ejecutivo entregase, en un plazo no mayor de una semana, los dólares para la compra de materia prima para la producción, a fin de evitar un posible desabastecimiento de alimentos y especulaciones, ya que la industria estaba agotando sus inventarios y no contaba con suficiente materia prima. Resaltaba así mismo la preocupación de los industriales ante los anuncios realizados por el Ejecutivo de importar alimentos exonerados de impuestos en caso de desabastecimiento, pues esta medida afectaría en gran medida la producción y las ventas de la industria nacional (EUD, 01-03-2003, Economía).

Augurios del BCV

El director del Banco Central de Venezuela (BCV), Armando León, sostenía que el control de precios esperado por las autoridades no se había podido cumplir debido a que las regulaciones cambiarias habían hecho disminuir la oferta de bienes. Según

León, la rapidez en los trámites de la entrega de divisas permitiría a las empresas el aumento de su producción y el consecuente abastecimiento del mercado, bajando así la presión sobre los precios. Para León, la inflación podría llegar a niveles parecidos a los del año 1995 de no corregirse los problemas regulatorios (EUD, 02-03-2003, Mayela Armas H., Economía).

Cadivi dueño de la tela y la tijera...

La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) anunciaba el 3 de Marzo que en una semana estaría redactando la providencia que permitiría atender la deuda externa privada, considerando prioritarias las empresas de alimentos. Para el momento llevaba a cabo reuniones con los diferentes gremios para identificar las inquietudes y necesidades de los mismos, así como el monto de la deuda externa privada. De la misma forma, anunciaba dicha comisión que en los próximos días estarían a la disposición las planillas de registro para la solicitud de dólares, cuyo proceso tendría un tiempo estimado de diez días (EUD, 03-03-2003, Mayela Armas H., Economía).

Se anunciaba que en un día se comenzarían a realizar los trámites para la compra de dólares, en donde las prioridades estarían concentradas en productos escasos, tales como el trigo, maíz amarillo, harina de soya, leche, aceite, granos, envases y bolsas plásticas.

Ya se encontraban publicadas las planillas para los estudiantes y para el 5 de marzo ofrecían las planillas para los medicamentos y tratamientos, así como para los eventos culturales, deportivos y científicos.

El proceso de solicitud comenzaría una vez que fuesen publicadas las planillas de registro de las empresas, éstas harían la solicitud a las instituciones financieras, el banco haría a su vez la solicitud a Cadivi, ésta analizaría la petición en un plazo máximo de cinco días y daría respuesta a la entidad. Mientras el Banco Central de Venezuela tendría un plazo máximo de dos días para hacer la transferencia de las divisas (EUD, 04-03-2003, Mayela Armas H., Economía).

Edgar Hernández Behrens, presidente de Cadivi, anunciaba, el 9 de marzo, la venta de dólares a partir del 17 de marzo, para lo cual ya le había asignado al Banco Central de Venezuela, un presupuesto de \$645 millones para tal mes. Mientras tanto, resaltaba el Presidente de la República, Hugo Chávez, quien manifestaba que “revisaría cada dólar que se entregue, porque la prioridad era el abastecimiento de medicinas y alimentos” (EUD, 09-03-2003, Economía).

PYMI afectada por el sistema cambiario

Pedro Pablo Meza, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria del Estado Aragua, consideraba que la paralización de dicho sector se debía al difícil acceso que se tenía al mercado cambiario, lo que imposibilitaba la importación de insumos básicos (EUD, 05-03-2003, Mariela León, Economía).

El 28 de marzo, Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, alertaba sobre la gravedad de la situación cambiaria para el sector productor. Los inventarios se

agotaban y comenzaban a escasear algunos productos. Fedeindustria negociaba con el gobierno la flexibilización de los requisitos para la entrega de divisas (EUD, 28-03-2003, Economía).

Cavidea también exigía

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), a través de su presidente Rafael Alfonzo, alertaba sobre la necesidad de divisas y la crítica situación que atravesaba la industria de alimentos, pues estimaba que podría reducirse en dos tercios la actividad del sector (EUD, 05-03-2003, Economía).

.....Corrupción y paralización predecía Venamcham

El gerente general de Venamcham, Antonio Herrera, explicaba que la asignación de divisas con criterios políticos se constituía, según la Ley de Salvaguarda, en una práctica discriminatoria y por ende de corrupción política (EUD, 07-03-2003, Economía).

Venamcham opinaba que el sistema cambiario vigente, conjuntamente con el proyecto de Ley Penal generarían el desabastecimiento, el desempleo y finalmente la paralización de muchas empresas. Inseguridad jurídica, pérdida de confianza de los inversionistas, presiones sobre el valor de la moneda por la creación de un mercado paralelo de divisas, son algunos de los elementos que evaluaba la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria a través de un comunicado (EUD, 08-03-2003, Economía).

José Gregorio Pineda, jefe de la Cámara Venezolano Americana, aseguraba que no existía control de cambio, sino cesación de convertibilidad, lo que redundaría, en su opinión, en insuficiencia de recursos para realizar las importaciones, baja y determinada producción de bienes terminados, dificultades de repatriación de capitales de las compañías extranjeras, así como en la realización de inversiones o el cumplimiento de pagos de deuda, aunado a los riesgos de escasez, inflación, etc. (EUD, 27-03-2003, Eduardo Camel Anderson, Nacional y Política).

Conindustria veía lento el proceso

Para el día 14 de marzo ya habían transcurrido cincuenta días desde que se hiciera el anuncio del control de cambio, por lo que Lope Mendoza, presidente de Conindustria, consideraba preocupante el retardo en la entrega de dólares al sector industrial, pues, a su juicio, podía generarse una crisis de abastecimiento de productos básicos y la consecuente paralización de las empresas que no contaran con los dólares necesarios para seguir operando (EUD, 14-03-2003, Economía).

Sin dólares el sector agrícola

El 19 de marzo, Fedeagro se encontraba preocupada por no contar aún con la asignación de dólares para la compra de insumos y fertilizantes, ya que debía comenzar la cosecha de invierno entre finales de marzo y principios de junio, para evitar una baja en el rendimiento de la producción. José Manuel González,

presidente de Fedeaagro, resaltaba a su vez lo inconveniente, para el sector, de un control de precios (EUD, 19-03-2003, Raquel Barreiro C., Economía).

Cadivi a la defensiva

El director de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) culpaba a las empresas por el retraso en la asignación de divisas, debido a la presentación incompleta de los requisitos. Resaltaban particularmente problemas de pago de los impuestos, así como insolvencias con el INCE y con el IVSS (EUD, 20-03-2003, Economía).

Continuaba la espera

El 22 de marzo, Cadivi consideraba un lapso de dos o tres semanas para otorgar los dólares a los empresarios solicitantes, sin embargo este lapso de tiempo dependería de la mejora del acceso a las planillas y recaudos.

El presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad, señalaba al respecto que los tiempos estimados por Cadivi se podrían cumplir en tanto se diera a los empresarios el apoyo necesario para resolver los problemas de insolvencia. Los empresarios también consideraban insuficiencia en la información necesaria para la realización de los trámites de solicitud de dólares (EUD, 22-03-2003, Economía).

El problema se trasladaba ahora a otros escenarios, pues entre los requisitos para la adquisición de dólares se encontraban las solvencias con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) y con la Ley de Política Habitacional. Las primeras no se habían entregado debido a que el IVSS esperaba por el nuevo formato del documento y las solvencias de la Ley de Política Habitacional que debían ser entregadas por el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), según estableciera Cadivi. A su vez se requería que Conavi determinara los niveles de morosidad de las empresas (EUD, 25-03-2003).

Entre tanto, el ministro de Producción y Comercio, Ramón Rosales, solicitaba a las empresas enviar los listados de productos prioritarios para agilizar el proceso de entrega de divisas por parte de Cadivi. Las empresas a considerar serían del sector de alimentos, medicinas, plástico y automotor (EUD, 25-03-2003, Economía).

El seguro, un problema adicional

Por imprecisiones de Cadivi las empresas que poseían pólizas de seguros en dólares no habían podido realizar los pagos correspondientes a las mismas. El superintendente de seguros, Luciano Omar Arias, sostenía que la redacción del convenio cambiario impedía la emisión de nuevas pólizas en dólares y tampoco normaba los pagos de aquellas ya existentes (EUD, 27-03-2003, Economía).

.....El control de cambio bajo la lupa legal

El 28 de marzo el alguacil de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia notificaba al Presidente Hugo Chávez; al ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega; al presidente del Banco Central de Venezuela, Diego Castellanos; al

presidente de la Asamblea Nacional, Francisco Ameliach; a la procuradora Marisol Plaza y al fiscal general Isaías Rodríguez, la existencia de tres acciones contra el control de cambio (EUD, 28-03-2003, Economía).

SE ENGROSABAN LAS FILAS DEL DESEMPLEO

Según estudios del Instituto Nacional de Estadística, el desempleo se ubicaba en una tasa del 16% para el último trimestre del año 2002, antes de que finalizara el paro empresarial. El sector informal representaba el 51,2% de la población económicamente activa, mientras el índice de desincorporación de la industria de la manufactura se ubicaba entre los más altos (EUD, 28-03-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

El comercio y servicio reportaba 136.033 desincorporados, en la construcción las cifras alcanzaban 80.606 despedidos y en el sector de servicios sociales, personales y comunales el número alcanzaba 123.081 (EUD, 28-03-2003, Economía). Y por si fuera poco la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideraba que debido a la Guerra de Irak las cifras mundiales de subempleo o paro se encontrarían alrededor de 22 y 24 millones de personas. Venezuela no era la excepción de estas estimaciones (EUD, 30-03-2003, Economía).

EN PICO DE ZAMURO LAS REGIONES

El Gobierno adeudaba 8 mil 300 millones de bolívares a las regiones por concepto de Situado Constitucional correspondientes a diciembre de 2002, pese a que allí se concentraba el 70% de la población (EUD, 01-03-2003, Nacional y Política). Sin embargo, una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo fechada el 26 de febrero ordenaba el pago de la deuda en los siete primeros días de cada mes (EUD, 07-03-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía). Y al unísono, el presidente Chávez tildaba a los gobernadores de la oposición que exigían el pago del Situado Constitucional como “inmorales”, a la vez que les exigía la renuncia (EUD, 14-03-2003, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

El 19 de marzo, se conocía que la Asamblea Nacional autorizaría una reforma a la Ley del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), a fin de que las regiones pudieran utilizar todos los recursos para cubrir sus necesidades financieras, ya que la misma establecía que sólo el 20% de los recursos pueden ser utilizados para gastos (EUD, 19-03-2003, Mayela Armas H., Economía).

El Ministerio de Finanzas buscaba soluciones al problema de las regiones, por lo que anunciaba que presentaría en un plazo aproximado de un mes un plan de pagos para las mismas (EUD, 20-03-2003, Economía).

Las regiones retiraban 208 millones de dólares del FIEM, agotando todos los recursos de que disponían en el Fondo, recursos que sólo les permitiría cubrir una de las quincenas pendientes de enero (EUD, 28-03-2003, Economía).

AFECTADAS LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

De baja los centros comerciales

Según el presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Arnold Moreno, habría disminuido la afluencia de visitantes en un 25% en comparación con la primera semana de reapertura después del paro (EUD, 01-03-2003, Raquel Barreiro C., Economía).

Las cifras de Albis Muñoz

Según la vicepresidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz, doce sectores productivos representados en dicha organización presentaban un decrecimiento estimado entre 10 y 30%, mientras que el único sector que experimentó crecimiento fue el de las telecomunicaciones con cifras del 3,35%. Estimaba que en el año 2003 cerrarían 30% de las empresas (EUD, 18-03-2003, Mariela León, Economía).

Las encuestas hablaban muy mal del futuro

La encuesta “coyuntura”, realizada en el sector comercio y servicios, avizoraba un panorama oscuro para el sector, con decrecimiento de las ventas, baja inversión, pocas solicitudes de crédito, alta devaluación de la moneda nacional y más desempleo. Éstas eran sólo algunas de las tendencias que sondeaba el estudio trimestral realizado por Consecomercio (EUD, 21-03-2003, Mariela León, Economía).

Abril de 2003

El aumento del salario mínimo se convertía en la bandera de los sindicalistas, en medio de un ambiente de confrontaciones políticas y de gran incertidumbre económica. El control de cambio se afianzaba y las empresas exigían mayor celeridad en la entrega de las divisas, mientras que los petroleros continuaban envueltos en conflictos que apuntaban hacia el control de la estatal petrolera. La posición del empresariado ante la crisis estructural del país, la estabilidad laboral, la seguridad social y los retrasos en la entrega de recursos a las regiones, entre otros, se convirtieron en los temas principales que ocuparon las páginas de la prensa nacional.

EL TEMA SALARIAL SE COLOCABA EN LA PALESTRA

La CTV exigía aumentos

La central obrera a través de su secretario general, Manuel Cova, exigía al Ejecutivo Nacional un aumento del salario mínimo. Explicaba Cova que el gobierno consideraba normal la situación, por lo que el aumento salarial sería viable. No obstante, los empresarios consideraban que la propuesta era una irresponsabilidad, pues lo importante era mantener los empleos y no agravar más la situación laboral y económica del país (EUD, 01-04-2003, Gustavo Méndez, Economía). “Sería irresponsable decretar un ajuste salarial”, de esta manera se expresaba Julio Brazón, presidente de Consecomercio, ante la propuesta (EUD, 26-04-2003, Economía). El salario mínimo se ubicaba en Bs. 190.080 y con la aprobación de un aumento del 30% alcanzaría Bs. 247.104 mensuales (EUD, 01-04-2003, Economía).

El incremento del salario mínimo en 30 % no sería suficiente para cubrir las necesidades primarias de una familia, pues la cesta básica estaba calculada en 600 mil bolívares para un grupo familiar de cinco personas, mientras que la canasta alimentaria se aproximaba a los 330 mil bolívares (EUD, 02-04-2003, Economía).

Manuel Cova aclaraba que no se trataba de un aumento taxativo del 30%. El sector privado debía negociar el aumento con sus trabajadores, mientras que el gobierno debía “asumir su responsabilidad” y plantear la discusión en torno al tema, con la inclusión de los trabajadores (EUD, 02-04-2003, Economía). “El salario no puede ser un tema tabú, tiene que ser discutido por los sectores” aseguraba Cova (EUD, 22-04-2003, Economía).

El Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional de Presupuesto no habían recibido instrucciones de ajuste salarial y tampoco estaba contemplado en el presupuesto del 2003, a pesar de que la Carta Magna exigía la revisión y aumento del salario mínimo de forma anual. (EUD, 22-04-2003, Mayela Armas H., Economía).

El Ejecutivo Nacional estudiaba los escenarios posibles para otorgar el aumento y uno de ellos era el pago fraccionado del aumento para las pequeñas empresas. Se otorgaría un porcentaje al momento de la firma del decreto y el porcentaje restante en dos partes (EUD, 24-04-2003, Economía). Sin embargo se conocía que se evaluaban dos escenarios: el primero, un aumento del 10%, el cual tendría un impacto de cuatro puntos sobre la inflación y podría ser cancelado al momento de la firma y el segundo, sería un aumento del 20% que tendría que ser cancelado de forma fraccionada y con un impacto mayor sobre la inflación (EUD, 26-04-2003, Mayela Armas H., Economía).

El 27 de abril se conocía que entre las alternativas de financiamiento del aumento salarial estarían, la solicitud de un crédito adicional, la reprogramación de partidas de los ministerios y las utilidades del BCV (EUD, 27-04-2003, Mayela Armas H., Economía). El impacto del aumento salarial sobre la inflación oscilaría entre cuatro y ocho puntos, correspondientes a cifras que podrían llegar al billón de bolívares

para el pago del aumento y de las pensiones de vejez (EUD, 29-04-2003, Mayela Armas H., Economía).

Para el Consejo de Economía Nacional un aumento aislado del salario mínimo podía tener un impacto negativo sobre el desempleo y la informalidad, por lo que recomendaban una estrategia integral que comprendiera la reactivación de la industria petrolera, una reforma fiscal y una política de incentivos a la inversión no petrolera (EUD, 26-04-2003, Economía).

Los empleados públicos exigían reivindicaciones

El presidente de la Federación de Empleados Públicos (Fedeunep), Franklin Rondón, introducía ante el Ministerio del Trabajo, un proyecto de convención colectiva que exigía un aumento del 50 % en el salario de los empleados públicos (EUD, 05-04-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía). El proyecto comprendía otro aumento del 50% para la revisión de cargos, un bono vacacional de 60 días y 120 días de aguinaldo (EUD, 05-04-2003, Economía). Así mismo se esperaba la extensión del ticket alimentario (cestaticket) para los jubilados (EUD, 20-04-2003, Economía).

Rondón confiaba en el aumento salarial, a pesar de que la Oficina Nacional de Presupuesto no había recibido instrucciones para la consecución de recursos adicionales (EUD, 23-04-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía) y conjuntamente con el Ministerio de Finanzas revisaban los porcentajes exigidos, pues consideraban difícil “cumplir con las peticiones” (EUD, 29-04-2003, Economía).

Discusiones salariales sin Fedecámaras

Según la vicepresidente de Fedecámaras, Albis Muñoz, el Ministerio del Trabajo pretendía desconocer al organismo que representaba y realizar las discusiones sobre el salario mínimo al margen de dicha organización, lo cual, a su entender, se trataba de una actuación supra legal (EUD, 23-04-2003, Mariela León Economía). Muñoz consideraba justas las exigencias de la CTV, en torno a un aumento del 30% en el salario mínimo de los trabajadores, sin embargo debía tenerse prudencia en este sentido, pues las posibilidades del empresariado podrían encontrarse por debajo de las exigencias de los trabajadores (EUD, 23-04-2003, Economía).

Insistía Muñoz en la necesidad de concertar el aumento del salario entre el patrono y el trabajador, pues una decisión unilateral del gobierno tendría un impacto negativo sobre la preservación de los puestos de trabajo (EUD, 29-04-2003, Economía). Sin embargo, cualquier decisión por la vía del decreto presidencial sería acatada por la organización (EUD, 30-04-2003, Economía).

Trabajadores de la Construcción. ¡Presentes!

120% de aumento salarial solicitaba el sector de la construcción, a través del contrato colectivo. Adicionalmente solicitaban 58 días de vacaciones, 120 días de

utilidades y la cobertura de los útiles escolares, entre otras reivindicaciones (EUD, 26-04-2003, Economía).

Y EL CONTROL CONTINUABA

El gobierno mostraba sus intenciones

El presidente, Hugo Chávez, sostenía que el control de cambio estaría en vigencia por un lapso de tiempo prolongado. “Cadivi vino para quedarse”, sostenía, mientras que el Ministro de Planificación, Felipe Pérez, aseguraba que el control sólo estaría vigente por un lapso aproximado de seis meses. Sin embargo, los empresarios agrupados en Fedecámaras y Consecomerio, veían con gran preocupación la extensión de los lapsos de la medida (EUD, 01-04-2003, Economía).

La oposición preocupada

Miembros de oposición al gobierno, criticaban la eficiencia de Cadivi al realizar la asignación de divisas, sostenían que a ese ritmo tomaría años atender las necesidades de la industria nacional, al tiempo que aseguraban que se trataba de una fuente de corrupción, al igual que había sucedido en el pasado con Recadi (EUD, 01-04-2003, Elvia Gómez, Nacional y Política).

Conavi comenzaba la entrega de solvencias

Hasta el día 2 de abril, el Consejo Nacional de la Vivienda, había entregado 20 solvencias y procesaba otras 100 para el trámite de divisas ante Cadivi. Así mismo se conocía que el porcentaje de solvencia de las empresas era aproximadamente de un 70 %. Las empresas insolventes podían hacer sus pagos directamente en las instituciones financieras, como único mecanismo necesario para obtener la solvencia respectiva (EUD, 02-04-2003, Economía).

Se planteaban alternativas y nuevas normas

Se analizaba en Cadivi la posibilidad de hacer los trámites para las importaciones a través de “asociaciones o consorcios” que representaran grupos de empresarios. A su vez, nuevas normativas permitirían a los pensionados y jubilados, residentes en el exterior, recibir mensualmente un máximo de dos mil dólares.

Se publicaban también normas que permitían el canje de divisas a las embajadas y consulados asentados en Venezuela (EUD, 03-04-2003, Economía).

El empresariado criticaba el control de cambio

El control de cambio aplicado en el país, desde hacía 70 días era duramente criticado por los empresarios, argumentado que hasta el momento no se habían producido cambios positivos en la economía y no había flujo de divisas, lo cual afectaba las transacciones comerciales internacionales de las empresas venezolanas. A pesar del cumplimiento de los trámites exigidos por Cadivi, no se entregaban los

dólares, lo cual colocaba en una difícil situación a los empresarios, aseguraba Aurelio Concheso, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras (EUD, 05-04-2003, Economía).

La industria del alimento también se preocupaba

Existía preocupación en el sector del alimento debido a las bajas en el consumo que venían registrando, aunada al retraso en el otorgamiento de divisas que dificultaba las importaciones que darían continuidad a la operatividad del sector (EUD, 08-04-2003, Economía).

Las exportaciones tampoco escapaban al control

La Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), se reunía prácticamente de emergencia, debido a la posibilidad de paralización total de las exportaciones, en función de las condiciones que exigía Cadivi, a través de sus providencias. Así buscaban un consenso para plantear alternativas y soluciones negociadas con la comisión reguladora (EUD, 09-04-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

Cadivi respondía

Según el presidente de Cadivi, Edgard Hernández Behrens, habían recibido pocas solicitudes de divisas, debido a que los empresarios se encontraban a la expectativa sobre una posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de declarar ilegal el control de cambio. Igualmente, sostenía que analizaban la flexibilización de los trámites de exportaciones, aunque no consideraba viable la propuesta de implantación de una cuenta única realizada por AVEX (EUD, 10-04-2003, Economía).

Cadivi aseguraba que para el ocho de abril ya habían autorizado un monto de veintisiete millones de dólares a empresas del sector industrial, agropecuario, de medicamentos y a estudiantes en el exterior (EUD, 12-04-2003, Economía).

Sin dilación se llevaban a cabo las autorizaciones de divisas que habían sido solicitadas, según afirmaba el presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Edgard Hernández Behrens (EUD, 16-04-2003, Economía), quien también recalca las intenciones que tenían de darle celeridad a los procesos (EUD, 19-04-2003, Economía).

El 16 de abril Cadivi había autorizado 166 empresas del sector salud, agrícola e industrial, para la realización de las importaciones de insumos correspondientes (EUD, 22-04-2003, Economía).

Las Empresas estaban en mora con el IVSS

El director general de administración del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Aureliano Díaz, explicaba que el 92% de las empresas se encontraban morosas con el Instituto. Sin embargo, aseguraba que se estaban acordando convenimientos de pago para otorgar las solvencias correspondientes necesarias para hacer la solicitud de divisas a Cadivi (EUD, 13-04-2003, Economía).

El presidente del IVSS, Edgar González, afirmaba que la deuda de las empresas privadas llegaba a 800 millardos de bolívares y sólo el 8% se encontraba solvente con el organismo (EUD, 26-04-2003, Economía).

La viveza criolla, un nuevo ingrediente

Cadivi comenzaba a detectar solvencias falsas correspondientes al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) y al Instituto Nacional de Capacitación Educativa (INCE). También se conocía que Cadivi estudiaba la posibilidad de realizar convenimientos de pago entre las empresas y el INCE (EUD, 14-04-2003, Economía).

Fedeindustria y el IVSS conciliaban

La Pequeña y Mediana Industria (PYMI), estudiaba conjuntamente con el IVSS la conciliación de las deudas contraídas entre ambos organismos, dado que existían diferencias en las cifras presentadas por cada uno, según informaba el presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad. También se discutía con el ejecutivo, según Pérez Abad, acerca del impacto del control de cambio sobre la generación de nuevos empleos y la economía (EUD, 02-04-2003, Economía).

La deuda externa privada ya podría honrarse

El 19 de abril se conocía que Cadivi otorgaría divisas para aquellas empresas privadas que tuviesen deudas contraídas en el exterior, anteriores al 22 de enero de 2003 (EUD, 19-04-2003, Economía).

Control de Cambio en 3 y 2

Lope Mendoza, presidente de Conindustria, acudía al Tribunal Supremo de Justicia para plegarse al recurso de nulidad contra el decreto de control de cambio, pues consideraba que el Ejecutivo había usurpado funciones del Poder Legislativo y había violado derechos económicos, de propiedad y libre tránsito (EUD, 30-04-2003, Economía).

EN PDVSA SEGUÍA LA TURBULENCIA

Continuaban los procesos legales

No se les permitía a los abogados de “Gente del Petróleo” el acceso a los expedientes de sus representados, debido a que se “encontraban en el despacho del magistrado Jesús Eduardo Cabrera” (EUD, 01-04-2003, Nacional y Política). El 11 de abril se conocía que los abogados de Gente del Petróleo habían interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, por la “presunta violación de los derechos a la defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, y derecho a ser juzgado por un juez imparcial” (EUD, 11-04-2003, Nacional y Política).

Ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia admitiera la nulidad del encabezado del artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el cual estaba relacionado con la estabilidad laboral, los abogados de Unapetrol alertaban sobre las intenciones de privatización de la industria petrolera, a fin de lograr una mayor flexibilidad para reestructurar y lograr la “destrucción” de la misma (EUD, 08-04-2003, Mónica Castro, Economía). Unapetrol trataba de concentrar sus esfuerzos en evitar la nulidad de dicho encabezado, apoyados en la Organización Internacional del Trabajo, el Tribunal Supremo de Justicia u otra instancia legal (EUD, 21-04-2003, Economía).

La Gente del Petróleo, exigía, mediante un documento consignado ante la Fiscalía General de la República, que se investigaran los daños y accidentes causados a la industria petrolera, los cuales consideraban de estricta responsabilidad del Gobierno, debido a la incorporación de personal no calificado (EUD, 10-04-2003, Nacional y Política).

La libertad de los miembros de la Gente del Petróleo, acusados de ser los responsables de los daños que sufrieran las instalaciones de Pdvsa durante el paro de la industria, dependía de una audiencia oral y pública, que se efectuaría en el Tribunal Supremo de Justicia (EUD, 22-04-2003, Nacional y Política). Tanto el fiscal nacional de salvaguarda, José Benigno Rojas, como los abogados de los miembros de la Gente del Petróleo, se encontraban listos para asistir a la audiencia oral (EUD, 23-04-2003, Nacional y Política).

Los abogados de Mireya Amaya, miembro de Gente del Petróleo, exigían la inhibición del magistrado Jesús E. Cabrera, por “presunto adelanto de opinión, a través de un comunicado” (EUD, 24-04-2003, Nacional y Política). El viernes 25 de abril se conocía sobre un nuevo escrito consignado ante el Tribunal Supremo de Justicia, por los defensores de Mireya Amaya, mediante el cual denunciaban la “parcialización” del magistrado Jesús Eduardo Cabrera y exigían su inhibición en el caso (EUD, 25-04-2003, Nacional y Política).

Despidos bajo la lupa

Los despidos efectuados en PDVSA se concentraban en las áreas de investigación y educación, correspondientes al 63% en el Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED), 60% de Intevep, 48% de Exploración y Producción y 46% de Refinación, Comercio y Suministro. También se conoció que el 30% de estos despidos pertenecían a la nómina menor (EUD, 04-04-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía), con un promedio de 41 años de edad y 15 años de experiencia laboral. La inversión en su educación y desarrollo fue de 19 millones de horas-hombre en promedio y un costo de 2 millones de dólares (EUD, 04-04-2003, Economía). Sin embargo, aseguraba el presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, que no “reengancharía” a los despedidos de la industria petrolera (EUD, 30-04-2003, Economía).

Una nueva lista de 244 personas se sumaba a las cifras totales de despedidos de la empresa estatal de petróleo, ascendiendo así a un total de 18.115, a pesar del

anuncio de cese de despidos que había realizado el presidente, Alí Rodríguez Araque (EUD, 15-04-2003, Economía).

La Gente del Petróleo incursionaba en la política

Diversas personalidades asociadas al mundo petrolero consideraban necesaria la disertación pública sobre el futuro político del país y de la industria petrolera venezolana. Así, en foro público organizado por la Gente del Petróleo, entre otros, Calderón Berti alertaba sobre el peligro que corrían las reservas energéticas del país, con la actual dirección de Pdvsa, mientras Horacio Medina señalaba la importancia de enfocarse en el referéndum revocatorio presidencial, pues la recuperación de Pdvsa, a su entender, pasaba por la salida del gobierno del presidente Hugo Chávez. Y en el mismo escenario, Gustavo Coronel tildaba como un “daño estructural” el causado por las decisiones que se habían tomado en los “últimos cuatro años” en Pdvsa (EUD, 30-04-2003, Economía).

El Norte de la “nueva Pdvsa”

El presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, consideraba la necesidad de mejorar el rendimiento de la industria y como objetivo se planteaba el logro de un “promedio de desempeño” que permitiera posicionarla entre las mejores empresas petroleras del mundo (EUD, 13-04-2003, Nacional y Política).

A través de cooperativas se realizaría la distribución de combustible en la región central de país, según lo anunciaba el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez. Esta estrategia formaba parte de la nueva concepción del negocio que pretendía integrar a la industria petrolera con las comunidades organizadas de la zona, que “fueron eje importante en la recuperación de las actividades petroleras...” durante el paro de Pdvsa (EUD, 20-04-2003, Venexza Camargo, Economía).

Iniciativas de ex petroleros

Horacio Medina, presidente de Unapetrol, señalaba que se crearía una corporación empresarial con iniciativas de ex empleados petroleros y el apoyo de empresas relacionadas al sector petrolero, para ofrecer servicios en el área a empresas venezolanas e internacionales. La iniciativa permitiría, entre otras cosas, evitar la fuga del recurso humano y el aprovechamiento del conocimiento, habilidades y destrezas de éstos trabajadores (EUD, 21-04-2003, Economía).

EL EMPRESARIADO ENTRE DOS AGUAS

¿Políticos o empresarios?

Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, aseguraba el cumplimiento de un 70% de los acuerdos entre la pequeña y mediana industria y algunos organismos del Estado. Así mismo señalaba que el gobierno del presidente Hugo Chávez,

gustase o no, era el que “más políticas públicas había concertado con el sector privado” (EUD, 03-04-2003, Economía).

Zapatero a su zapato

Según opinaba Carlos Fernández y basado en un estudio realizado por Fedecámaras, la economía venezolana había sufrido en los últimos tiempos un “descalabro” que podía ser explicado por la actuación del Estado venezolano en el terreno privado. Mayores niveles de pobreza, desempleo, hambre y deficiencias en la seguridad social eran algunos de los indicadores que planteaba como consecuencias del empeño del Gobierno en “cerrar los caminos de la empresa privada y reemplazarlos con iniciativas públicas totalmente erráticas e inconsistentes” (EUD, 03-04-2003, Carlos Fernández, Economía).

La salud era lo primero

Por peligro de muerte súbita, los médicos del presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, le recomendaban realizar una serie de evaluaciones médicas en los Estados Unidos, por lo que se ausentaría del país por un período aproximado de un mes (EUD, 08-04-2003, Nacional y Política).

Desde el estado de Florida, Estados Unidos, Fernández afirmaba que no estaba descartada la posibilidad de solicitar asilo al gobierno norteamericano, pues su vida corría peligro en Venezuela (EUD, 10-04-2003, Manuel Corao, Nacional y Política).

La Pequeña y Mediana Industria tenía dolientes

El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi) se prestaba a realizar un censo de las necesidades de dichas empresas, como parte del convenio marco para la recuperación de la producción, preservación y fomento del empleo y la recuperación del consumo, firmado por Fedeindustria y el Gobierno (EUD, 21-04-2003, Economía).

Según el presidente de Inapymi, Francisco Liendo, se otorgarían 2 mil quinientos millones de bolívares en crédito para el año 2003, así mismo sostenía que darían asistencia técnica integral y crearían el Centro de Oportunidades de Negocios de la Pequeña y Mediana Industria (Conpymi), el Sistema de Información Industrial, los Infocentros Pymi y la Taquilla Única Virtual para la Pymi (EUD, 28-04-2003, Economía).

Asuntos legales

Con el proyecto de sentencia del magistrado José Delgado Ocando se declararía inadmisibile el recurso de amparo introducido contra la decisión de libertad plena del empresario Carlos Fernández. Sólo faltaba la aprobación de la Sala Constitucional (EUD, 23-04-2003, Nacional y Política), pero el 29 de abril se conocía que el Tribunal Supremo de Justicia había admitido el amparo contra el fallo que dejaba en libertad plena al empresario Carlos Fernández, por lo que la medida de detención domiciliaria quedaba vigente (EUD, 29-04-2003, Irma Alvarez, Nacional y Política).

La Coordinadora Democrática, a través de uno de sus líderes, Jesús Torrealba, catalogaba la medida del TSJ como una “maniobra judicial” para enturbiar el ambiente político y generar una escalada de violencia en el país (EUD, 29-04-2003, Teresa De Vicenzo, Nacional y Política).

Los abogados de Fernández exigían la aclaratoria de la sentencia del TSJ a la Sala Constitucional, por presunto adelanto de opinión (EUD, 30-04-2003, Irma Álvarez, Nacional y Política).

Líderes de Fedecámaras y Consecomercio se solidarizaban con Carlos Fernández y su familia, así mismo consideraban la decisión del TSJ como “enrevesada” y con fines políticos (EUD, 30-04-2003, Nacional y Política).

DIVERSAS RAMAS DE UN MISMO ÁRBOL. EL ENFRENTAMIENTO POLÍTICO.

El petróleo fuera de la “Mesa”

Ante las acusaciones de dejar el tema de Pdvsa y sus trabajadores en un segundo plano, la Coordinadora Democrática (CD) esgrimía la prioridad política como argumento. Hiram Gaviria, miembro de la CD, sostenía que la solución del problema petrolero pasaba por la previa solución del problema electoral y del referéndum revocatorio como salida a la crisis estructural política (EUD, 02-04-2003, Elvia Gómez, Nacional y Política). Por su parte, Edgar Paredes, miembro de la Gente del Petróleo, exigía la consideración de los petroleros en las discusiones que se llevaban a cabo en la Mesa de Negociación y de Acuerdo, mientras que el Gobierno negaba toda posibilidad de incluir el tema en la agenda de la Mesa, debido a que lo consideraban “competencia exclusiva de Pdvsa y de la administración de justicia” (EUD, 03-04-2003, Alejandro Rojas y Elvia Gómez, Nacional y Política).

Antidisidencia

Así calificaba el secretario Ejecutivo de la CTV, Pablo Castro, la Ley Contra el Terrorismo presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, pues la consideraba una herramienta para evitar la controversia política, mientras que para Wladimiro Mujica, se trataba de una ley que buscaba “quebrar el espíritu de los venezolanos” y en este mismo sentido Edgar Quijano, miembro de Unapetrol, afirmaba que se trataba de un proyecto que cercenaba el derecho a la huelga (EUD, 05-04-2003, Sara Carolina Díaz Gómez, Nacional y Política).

Agudos evaluadores

El director del departamento para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Anoop Singh, señalaba que la recuperación económica de Venezuela dependía del Gobierno, pues a su juicio la situación política era responsable del deterioro económico del país. También resaltaba que evaluarían la situación del país

con un equipo técnico del FMI, para buscar salidas a la caída del PIB y a la reactivación del crecimiento económico (EUD, 13-04-2003, Nacional y Política).

Según un informe confidencial del Banco Mundial (BM) se planteaba en el país la posibilidad de un escenario de violencia social ante el deterioro de la situación política y económica. Dicho informe recomendaba el desarrollo y mantenimiento de un sistema cambiario flexible, el incremento del comercio internacional, el aumento de la participación privada en inversiones no petroleras y mejoras en los sistemas de agua y de transporte, entre otras (EUD, 03-04-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

La discusión política se había sobrepuesto a la práctica económica, razón por la cual habían aumentado los niveles de pobreza en el país, según el informe del BM. También resaltaba la incertidumbre política y las deficiencias en la “gerencia macroeconómica”, como limitante de la participación privada, causas del aumento del riesgo país (EUD, 15-04-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

En la ruta del RR

La CTV se preparaba para definir las estrategias que a su juicio conducirían a la cristalización del referéndum revocatorio del Presidente de la República. El secretario ejecutivo de la CTV, Pablo Castro, afirmaba que estarían trabajando en “la conformación de los comités por el sí”, conjuntamente con la Coordinadora Democrática (EUD, 15-04-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Para Horacio Medina, líder de Unapetrol, los esfuerzos debían concentrarse en el referéndum revocatorio, mientras se trabajaba en forma paralela en un proyecto de país, que le diera alternativas al mesianismo que llevó a Chávez al poder (EUD, 21-04-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

La Agenda Alternativa Bolivariana

Se anunciaba el “modelo endógeno de desarrollo” en el marco de la Agenda Alternativa Bolivariana, que contemplaba medidas como el control de cambio, control de precios, reducción de costos de Pdvsa, constitución de microempresas y cooperativas, además de iniciativas como las fábricas móviles de harina, los cultivos organopónicos y Mercal (EUD, 27-04-2003, Victor Salmerón, Economía).

¿Neoliberalismo? ¿Salvaje?

Según opinaba el director de Datanálisis, Luis Vicente León, la estrategia del gobierno en materia política y económica no dejaba a un lado el modelo neoliberal como muchos pensaban. Todo lo contrario, el Gobierno pretendía “debilitar al sector privado doméstico (...) para presionarlos a vender sus activos a firmas transnacionales...”, y de esta manera reducir el poder opositor, pues el inversionista foráneo no ejerce presión política, pero si deja grandes utilidades (EUD, 28-04-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía). León sostenía que a través de provocaciones el Gobierno intentaba mantener vivo el paro de diciembre, pues esto permitiría tomar medidas como el control de cambio y de precios. Así mismo

afirmaba que la banca no sería nacionalizada, pues era necesaria para generar confianza y para lograr financiamiento a través de la compra de papeles de la deuda (EUD, 28-04-2003, Economía).

Empresarios denunciaban usurpación de funciones

Ante el anuncio de importaciones del Gobierno, representantes empresariales reaccionaban condenándolo como una usurpación de las funciones propias del sector productivo y como un atentado contra la industria venezolana (EUD, 30-04-2003, Mariela León, Economía).

EN VILO LA SEGURIDAD SOCIAL.

Eran menos los recursos

El aumento del desempleo, los niveles de informalidad, las evasiones y la reducción del mercado laboral, eran algunas de las razones en la merma de los aportes al IVSS. Se manejaban cifras que señalaban que tan sólo el 20,6% de la población económicamente activa contribuía con el organismo, mientras que en la relación entre la población asegurada por el IVSS y la población total las cifras eran más alarmantes, pues tan sólo el 9,3% de la población contribuía con la seguridad social (EUD, 07-04-2003, Mayela Armas H., Economía).

A pesar de que el Ejecutivo había asignado al IVSS 3,9 billones de bolívares, los recursos se hacían insuficientes para cubrir las necesidades, por lo que se estimaba un déficit de 825 millardos de bolívares. (EUD, 07-04-2003, Economía).

Reformas en la Seguridad Social

El proyecto de Ley del Régimen Prestacional Dinerario contemplaba un aporte de 50% del empleador y 50% del trabajador para el caso en el que se devengaran más de cuatro salarios mínimos, es decir el equivalente a 760.320 bolívares, pero si los ingresos eran inferiores el patrono debía pagar una contribución de 75% y 25% el trabajador. El trabajador por cuenta propia que percibiera más de cuatro salarios mínimos debía cancelar 100% de la contribución, si devengara menos de dicho monto tendría que aportar el 50%. Las pensiones de vejez tendrían una base equivalente al salario mínimo legal, adicionalmente un 60% del ingreso promedio de los últimos 18 meses y por cada 12 cotizaciones se debía incrementar la pensión en 2% (EUD, 07-04-2003. H., Economía).

El retraso en la reforma de la seguridad social se debía, entre otras razones, a la falta de recursos. No estaban contemplados recursos para la creación de nuevos institutos en el presupuesto del 2003 y la Oficina Nacional de Presupuesto veía difícil la consecución de los mismos, por lo que se comenzaba a explorar la posibilidad de financiamiento a través de multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo que podría aportar 50 millones de dólares para el primer semestre del 2004. Para ello se debía presentar en el segundo trimestre del

2003 el plan para la creación de un órgano rector, de la superintendencia de seguridad social y una tesorería (EUD, 28-04-2003, Mayela Armas H., Economía).

Según un informe del Ministerio de Finanzas la nueva institucionalidad de la reforma previsional tendría un costo de 0,2% del PIB, mientras que la reforma en su totalidad significaría 10,9% de PIB (EUD, 28-04-2003, Economía).

Amparo sin precedentes

La empresa Sincor introducía un recurso de amparo que sentaba precedentes en el área laboral, pues el mismo impedía al IVSS cobrar las contribuciones correspondientes al paro forzoso, debido a que no existían las bases legales que regularan la materia. Razones por las que Sincor alegaba no tener obligación legal de hacer los aportes, ni retenciones a sus trabajadores (EUD, 07-04-2003, Victor Salmeron, Economía).

El presidente de la Subcomisión de Seguridad Social de la Asamblea Nacional, Rafael Ríos, comentaba que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) debía solicitar la interpretación de la sentencia del Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario en el caso de Sincor, razón por la cual la Asamblea no haría correcciones a la disposición de la Ley de Seguridad Social (EUD, 10-04-2003, Economía).

El IVSS apelaba la sentencia del Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, que derogaba el paro forzoso. Señalaba la consultora jurídica del instituto que las contribuciones debían continuar realizándose, pues la Ley del Seguro Social y su reglamento no estaban derogados y en ellos "...se contempla la cancelación de la contingencia" (EUD, 11-04-2003, Mayela Armas, Economía).

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) interponía un amparo por la derogación del paro forzoso, pues vulneraba "...el principio de progresividad de los derechos humanos y el principio de los derechos laborales" (EUD, 29-04-2003, Economía).

Hablaban los números

Se conocía que para el mes de abril el Instituto Venezolano de Seguros Sociales había cancelado 3,8 millardos por concepto de paro forzoso, correspondientes al mes de diciembre de 2002, mientras que en diciembre se habían cancelado 2,6 millardos a 8.028 personas (EUD, 11-04-2003, Economía).

35% de los pacientes asisten a consultas privadas y 60% de la población se hace exámenes en laboratorios o clínicas privadas. Éstas eran algunas de las cifras que se desprendían de un estudio realizado por el IESA, en el cual se señalaba que el Ejecutivo Nacional había disminuido sus aportes al IVSS y al Ipasme, lo que aunado a la "dispersión de los recursos" y a las "dificultades en la prestación de los servicios" hacía que parte de los fondos presupuestados se destinaran al sector privado, generando inequidades (EUD, 16-04-2003, Mayela Armas H., Economía). La distribución del gasto en salud, no generaba los mejores resultados. El gasto total

era de aproximadamente 7% del PIB y buena parte de estos recursos financiaban burocracia, deudas, jubilaciones y pólizas de seguro (EUD, 16-04-2003, Economía).

El presupuesto para el sector salud del año 1999 había sido de 1,05 billones de bolívares, mientras que en el año 2002 se contempló un presupuesto de 3,2 billones, de los cuales 102 millardos se gastaron en regímenes especiales. El presupuesto del fondo de asistencia médica del IVSS contemplaba 43,2% para gastos de personal y cifras similares correspondían al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, así como a las entidades federales (EUD, 16-04-2003, Economía).

EL DESEMPLEO SEGUÍA SU RUMBO

Sin ingresos, pero al día

Los desempleados también debían cancelar sus deudas correspondientes a préstamos de política habitacional. El Consejo nacional de la Vivienda (CONAVI) obligaría, a través de una resolución, a las personas cesantes, a cancelar el 3% correspondiente al aporte al Fondo Mutual, según señalaba el presidente, Carlos García (EUD, 02-04-2003, Economía).

Esperaban reducir el desempleo

El director de empleo del Ministerio del Trabajo, Martín Villarroel, señalaba que el empleo podía reducirse en 2% para finales del año 2003, a través de la “negociación, las mesas de trabajo y un plan estratégico nacional” (EUD, 04-04-2003, Mariela León, Economía).

Las cifras en aumento

Según un estudio que había realizado datanálisis, entre los meses de noviembre y de marzo de 2003, los niveles de desocupación expresaban una cifra de casi medio millón de personas, lo que representaba 22,3% de la población económicamente activa, y se registraba desocupación en el sector informal debido a la falta de espacios, a la insuficiencia de mercancía y a la caída en 20% del consumo en los últimos tres meses (EUD, 05-04-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) los desocupados desde finales del año 1999 ascendían a 510.760, sumando un total de 1.888.845 personas cesantes. En el sector informal desde el mismo año se registraban 190.261 nuevos individuos. Se encontraban fuera del mercado formal de trabajo 6.952.633 personas, es decir el 59% de la población en condiciones de trabajar (EUD, 06-04-2003, Raquel Barreiro C., Economía).

Los mayores afectados por el desempleo eran mujeres y personas en edades entre los 15 y 24 años. En el mes de noviembre del año 2002, se encontraban sin empleo el 18,8% de las mujeres en condiciones de trabajar, mientras que el 13,6% correspondía a los hombres (EUD, 06-04-2003, Economía).

El desempleo en el mes de febrero de 2003 se ubicaba en 20,7% según lo hacía conocer el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Emiro Molina, mientras que Datanálisis ofrecía para el mes de marzo cifras de 22% que eran desmentidas por el INE, pues consideraban imposible un aumento de dos puntos en un período de un mes (EUD, 30-04-2003, Economía).

Los convenios se hacían necesarios

En opinión de expertos laborales, se hacía necesaria una mayor flexibilidad en los convenios laborales entre patrono y trabajador en momentos de fuertes crisis económicas, lo cual era avalado por el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, pues el objetivo fundamental era la preservación del empleo (EUD, 10-04-2003, Mariela León, Economía). Señalaba César Carballo que “el tema más importante en el mercado laboral es el empleo...” y ante una contracción económica con altos niveles de desempleo e informalidad “... no hay sistema de seguridad que aguante” (EUD, 10-04-2003, Economía).

Triste adiós

El desempleo se encontraba entre las razones que motivaban a los venezolanos a pensar en nuevos horizontes fuera de las fronteras de Venezuela. A finales de marzo de 2003, el 42,5% de los venezolanos tenían deseos de abandonar el país, según encuesta realizada por Datanálisis. El 38% de los encuestados consideraban el desempleo como el principal problema del país (EUD, 24-04-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

SINDICALISMO (CAMBIOS Y NUEVAS CARAS)

Se reactivaban las exigencias sindicales

El secretario general de la CTV, Manuel Cova, explicaba que debían reiniciarse las discusiones sobre los contratos públicos vencidos en diciembre de 2002, así como también se debían evaluar las convenciones colectivas del sector privado (EUD, 01-04-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

El 10 de abril se conocía que las federaciones y sindicatos afiliados a la CTV, tomarían nuevamente la calle para exigir ante el Ministerio del Trabajo la firma de nuevas convenciones colectivas de la administración pública (EUD, 10-04-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Se conocía que el 1° de mayo de 2003, tanto la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), con una posición política de oposición al gobierno, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), de corte oficialista, marcharían para exigir reivindicaciones laborales (EUD, 15-04-2003, Teresa De Vicenzo, Nacional y Política). El secretario general de la CTV, Manuel Cova, señalaba que la marcha se haría “contra el desempleo, el hambre, la inseguridad y el paralelismo sindical,

ilegalmente promovido por el gobierno” (EUD, 24-04-2003, Teresa De Vicenzo, Nacional y Política).

Se suspendían las conversaciones para lograr la firma de los contratos colectivos del sector público, debido a que en la directiva de la Federación Única de Empleados Públicos (Fedeunep) existía duplicidad de funciones (EUD, 29-04-2003, Eduardo Eugenio Martínez, Nacional y Política).

Se denunciaba malversación

El secretario ejecutivo de la CTV, Alfredo Ramos, señalaba que acudiría a las instancias respectivas para denunciar supuestas prácticas de corrupción en las empresas de Guayana. Sostenía que habían sido otorgados 48 mil dólares a sindicalistas simpatizantes del oficialismo, a través de la intermediación del diputado Nicolás Maduro (EUD, 04-04-2003, Nacional y Política).

Se planteaban transformaciones

El secretario ejecutivo de la CTV por Bandera Roja, Pedro Arturo Moreno, planteaba la refundación de la central obrera, pues consideraba que debía modificarse la estructura en donde la burocracia beneficiaba sólo al dirigente y su entorno próximo. Explicaba que debían asumir el reto de llegar a las bases y dirigir sus esfuerzos a los no confederados. También señalaba que la transformación de la organización debía pasar por una reducción en el número de sindicatos, para tener un mayor poder de negociación. Y en el plano político ratificaba “el apego a la salida democrática”, por ello darían su apoyo al referéndum (EUD, 07-04-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

NO FALTABA QUIEN PROTESTARA

La situación económica afectaba al Zulia

Transportistas de gasolina, comunidades indígenas y representantes vecinales cerraban la vía Troncal del Caribe, como medida para lograr una reunión con el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, a fin de plantearle la difícil situación económica que atravesaban (EUD, 11-04-2003, Mónica Castro, Nacional y Política).

Por la fuerza

Un grupo de trabajadores, el alcalde de Santa Teresa del Tuy, la Policía Municipal y la Guardia Nacional insistían en tomar el control, de forma violenta, de la empresa Auto Resortes Tuy, amparados en una medida “extemporánea” según explicaba Rosalba Gómez, representante de la empresa (EUD, 11-04-2003, Economía).

La hora de Conapi

Los trabajadores de Conapi tomaban la sede de Sabana Grande de forma abrupta y violenta. Exigían reivindicaciones laborales, información sobre la Ley de Política Habitacional, así como la solución de algunos problemas que mantenían con el seguro social (EUD, 11-04-2003, María Isabella Salas, Ciudad).

El Transporte exigía aumento

Los transportistas y el Ejecutivo Nacional se reunían para buscar soluciones al problema del aumento de las tarifas, así como a otras exigencias planteadas por los conductores, entre ellas, subsidios para la compra de repuestos (EUD, 22-04-2003, Migdalis Cañizales, Ciudad).

LA POBREZA: UN PROBLEMA QUE EXIGÍA ATENCIÓN

Números alarmantes

Se conocía que el 43% de la población tenía un ingreso menor a 250.000 bolívares por grupo familiar (5 miembros), lo que los colocaba en el estrato social de mayor pobreza, mientras que entre lo que se considera como pobreza moderada, se encontraba un 38% de la población venezolana, con ingresos familiares aproximados a los 600 mil bolívares, “donaciones incluidas” (EUD, 02-04-2003, Economía).

El poder adquisitivo del venezolano sufría, al cierre del primer trimestre de 2003, una caída del 13,6%, debido al desempleo, la inflación y el mantenimiento de los salarios (EUD, 06-04-2003, Mayela Armas H., Economía).

En el año 2002 se había registrado una caída de 8,6% en el PIB, y Datanálisis vaticinaba que para el cierre del año 2003 se registraría una caída del 15% (EUD, 14-04-2003, Economía).

Perfiles

Se ofrecía un perfil aproximado del pobre venezolano comprendido en su mayoría por mujeres, residenciados en zonas urbanas, con un bajo nivel educativo, y con un jefe de familia mayor de 50 años, para un grupo familiar de cinco personas (EUD, 15-04-2003, Economía).

MORA EN LAS REGIONES

Apure sin Fondos

El gobernador del Estado Apure, Luis Lippa, exigía al Ejecutivo Nacional el pago de aproximadamente 100 millardos de bolívares, fondos que entre otras razones, estaban represados por concepto del situado constitucional (EUD, 09-04-2003, Nacional y Política).

Emergencia en las alcaldías

Más de 4.300 millones de dólares, correspondientes a los años 2001 y 2002, adeudaba el Ejecutivo Nacional a 335 alcaldías, por lo que éstas amenazaban con declararse en emergencia, según señalaba Said Bijani, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Venezuela (EUD, 20-04-2003, Nacional y Política). Sin embargo, el sábado 26 de abril se conocía que de no cancelarse la deuda, las alcaldías paralizarían sus labores en los próximos días (EUD, 26-04-2003, Economía).

Mayo de 2003

El sector empresarial se encontraba preocupado por las cifras económicas que venían registrando, así como de sus consecuencias relacionadas con la actividad productiva. Se percibía un empresariado más activo y reaccionario. Las discusiones sobre el aumento del salario mínimo parecían meter más leña al fuego. El desempleo continuaba su camino ascendente y sin obstáculos aparentes, mientras se registraba una fuerte contracción económica que reflejaban las cifras tanto privadas como públicas. La seguridad social parecía encontrarse en una situación precaria, mientras su reforma se veía lenta y difusa. Petróleos de Venezuela continuaba estando en el tapete de la discusión pública y el control de cambio se convertía en objeto de múltiples críticas del sector privado. Pasaba así otro mes colmado por la política y la economía.

EMPRESARIADO CON CARÁCTER REACCIONARIO

Carlos Fernández. ¿Volverá? ¿Volverá?...

El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, evaluaba, desde Miami, la posibilidad de entregarse a la justicia venezolana, una vez conocida la decisión de suspensión temporal de la medida de captura que tenía en su contra (EUD, 01-05-2003, Economía). En tanto el 9 de marzo se conocía que la decisión sobre el arresto domiciliario de Fernández, le correspondería a La Sala 7 de la Corte de Apelaciones de Caracas (EUD, 09-05-2003, Economía).

En mensaje enviado a los empresarios venezolanos agrupados en Fedecámaras, Carlos Fernández se refería al control de cambio como una medida de “venganza oficial” hacia los empresarios que habían participado en el paro de diciembre y enero de 2002.

Se esforzaban los empresarios

Aseguraba el empresariado que gracias a sus esfuerzos el colapso económico se había mantenido a raya. Se trataba de medidas de racionalización y optimización de los procesos de producción para garantizar el abastecimiento y mantenerse frente a

la caída del consumo, a la “competencia desleal” y a la falta de dólares (EUD, 03-05-2003, Mariela León, Economía). Mientras tanto, consideraba el ex presidente de Fedecámaras, Vicente Brito, que el plan gubernamental pasaba por la sustitución del sector económico privado por uno controlado y centralizado desde el Estado, lo que consideraba era demostrado por medidas como el control de cambio y el plan de importaciones anunciado por el Ejecutivo (EUD, 05-05-2003, Mariela León, Economía).

Fedenaga no cedía representatividad del sector agropecuario

Según sostenía el presidente de Fedenagas, José Luis Batancourt, la representatividad del sector agropecuario no tenía discusión, a pesar de que la nueva asociación de productores agropecuarios pretendía captar adeptos a través del ofrecimiento de créditos, tractores y animales, entre otros, previa renuncia a Fedenagas (EUD, 04-05-2003, Economía). En tanto, José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores de Venezuela (Confagan), organización identificada con el oficialismo, señalaba que pretendían crear una agroindustria alternativa que permitiera erradicar los monopolios y garantizar precios justos (EUD, 04-05-2003, Victor Salmeron, Economía).

Fedenaga solicitaba la anulación de las Cartas Agrarias, pues las consideraban violatorias de algunos principios constitucionales, además de incentivar las invasiones a fincas en producción (EUD, 16-05-2003, Nacional y Política). También los empresarios representados en Fedecámaras se hacían solidarios con la solicitud de nulidad de las cartas agrarias, por considerar peligrosas las consecuencias de su aplicación (EUD, 21-05-2003, Economía).

Consecomercio estrenaba nuevo directorio, pero mantenía su posición

Jorge Botti debía asumir la presidencia de Consecomercio para el período comprendido entre el año 2003 y el 2005 y una de sus primeras exigencias ante el gobierno era la reconsideración del régimen de control de cambio alineándose con la posición política asumida por la organización. (EUD, 12-05-2003, Mariela León, Economía). Botti estaba convencido de la necesidad de una transformación del sector, orientado hacia la modernización, para lo cual consideraba necesaria una transición política (EUD, 12-05-2003, Economía). Mientras que, para Julio Brazón, presidente saliente de dicha organización, existían razones suficientes para “oponerse abiertamente al gobierno”, pues, entre otras razones, las funciones del empresariado trataban de ser sustituidas por el Gobierno (EUD, 12-05-2003, Economía).

Brazón, instaba a los miembros de Consecomercio a continuar defendiendo sus derechos de propiedad, pues se habían convertido en “fetiches” y “objetivos de destrucción política” (EUD, 17-05-2003, Economía).

Albis Muñoz denunciaba obstaculización de la actividad empresarial

En palabras de la vicepresidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz, el Gobierno “bloqueaba” las actividades productivas, a través de la aprobación por la vía Habilitante, de un conjunto de leyes que atentaban contra el derecho a la propiedad y a la libre iniciativa. Denunciaba entre otras, la Ley de Seguridad Social y la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (EUD, 15-05-2003, Mariela León, Economía).

Se tenía el dicho...

El viceministro de Industria, Víctor Alvarez, ofrecía un mensaje de unidad y conciliación al empresariado nacional. En el marco de la promoción del plan de desarrollo interno de la industria venezolana sostenía que “la mejor manera de eliminar a los enemigos del gobierno del presidente Hugo Chávez es convirtiéndolos en aliados” (EUD, 18-05-2003, Economía).

Crear o no crear

Los empresarios no albergaban mayores esperanzas en el nuevo plan económico que se anunciaría el 12 de junio de 2003, pues consideraban que se trataba de una repetición de las mismas situaciones pasadas, tras los anuncios de relanzamiento económico. Dichos anuncios se harían sin la previa consulta de los grupos empresariales, lo cual generaba mayor incredulidad en estos sectores (EUD, 18-05-2003, Víctor Salmerón, Economía).

El Gobierno buscaba competir con la empresa privada

Se publicaba en Gaceta Oficial el Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social, que buscaba alternativas gubernamentales al abastecimiento de alimentos básicos. El presidente Chávez aseguraba que se “estaba creando un nuevo tejido, una nueva estructura económica” (EUD, 18-05-2003, Raquel Barreiro C., Economía).

Fedeagro introduciría un recurso de amparo contra las importaciones llevadas a cabo por el Gobierno, pues las consideraban un atentado contra el sector privado de la producción (EUD, 27-05-2003, Economía).

Fedeindustria buscaba acceso al crédito

El vicepresidente de Fedeindustria, Rodolfo Cibani, solicitaba la consideración de mecanismos que permitieran a la pequeña y mediana empresa el acceso al financiamiento de la banca (EUD, 19-05-2003, Economía).

El proceso cogestionario tenía adeptos

Para Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, una solución para aquellas empresas que se encontraban en dificultades judiciales y con probabilidades de quiebra era la cogestión entre empleados y empleadores, pues de esta forma se evitaba la violación a la propiedad privada (EUD, 22-05-2003, Economía).

Conindustria criticaba resultados económicos

Para el presidente de Conindustria, Lope Mendoza, los indicadores económicos, a pesar de ser negativos, no le sorprendían. El cierre de empresas, el desempleo ubicado en 20,6% y el aumento de la informalidad y la pobreza en su opinión eran el resultado de una gestión económica desacertada y serían en “un Gobierno medianamente sensato”, causas de la destitución de los funcionarios responsables (EUD, 24-05-2003, Economía). El 26 de marzo Mendoza vaticinaba para el cierre del año 2003, una caída del 25% en el sector manufacturero y un desempleo de 25%, pues en su opinión el Gobierno no tomaba las medidas necesarias para revertir esta situación (EUD, 27-05-2003, Economía).

El paro nacional había dejado sus secuelas

Se conocía que para el primer trimestre del año 2003 el producto interno bruto había sufrido una caída del 29% con respecto al mismo período del año 2002, lo que significaba una caída del 35,1% para el sector de la manufactura, 64% para la construcción y 1,1% en las comunicaciones (EUD, 26-05-2003, Marianna Párraga, Economía). Mientras, para el presidente de Consecomercio, Jorge Botti, el comercio había sufrido una contracción del 50% con respecto al primer trimestre del año 2002 (EUD, 27-05-2003, Economía). Y en el sector del combustible se calculaba una caída en las ventas del 30% a partir del paro, según señalaba el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos, Juan Vaquero (EUD, 31-05-2003, Marianna Párraga, Economía).

Mesa de Negociación y de Acuerdo

El 28 de marzo aún no se conocía la posición oficial de Fedecámaras ante el texto planteado en la Mesa de Negociación y Acuerdo, pues se consultaría a los miembros de la organización y se esperaría un plazo de 48 horas ofrecido por la Coordinadora Democrática para fijar posición. Sin embargo, se conocía que existían ciertas discrepancias entre la dirigencia, aunque daban respaldo unánime a las negociaciones (EUD, 28-05-2003, Mariela León, Nacional y Política). Mientras tanto, se conocía que Carlos Fernández no respaldaría la firma del Acuerdo, pues en su opinión éste formaba parte de un “plan macabro de Chávez para disolver a la oposición y trancar el camino hacia el referendo revocatorio” (EUD, 28-05-2003, Economía). Se conocía, el jueves 29 de mayo, que aunque existían posiciones encontradas para aceptar la firma del Acuerdo emanado de la Mesa de Negociación, el escenario más probable era la aceptación del mismo (EUD, 29-05-2003, Mariela León, Nacional y Política). Esto se confirmaba el 30 de mayo cuando se conociera que Rafael Alfonso había firmado dicho Acuerdo con el respaldo del Consejo Nacional de Fedecámaras (EUD, 30-05-2003, Economía).

Resaltaba Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, que la firma del Acuerdo tendría un impacto positivo sobre los agentes económicos, pues generaría confianza, mientras que para el presidente de Consecomercio, Jorge Botti, la firma significaba el paso del país hacia otro estadio. Por su parte, el presidente de Fedenaga, José Luis

Betancourt, señalaba que la firma significaba un compromiso orientado hacia un proceso electoral (EUD, 30-05-2003, Nacional y Política).

SITUACIÓN LABORAL

Las cifras del desempleo alarmaban

Se calculaba en 1,9 millones de desempleados la cifra registrada en los últimos cuatro años, para totalizar 2,4 millones. Datanálisis proyectaba la tasa de desocupación para marzo de 2003 en 22,3% y para el cierre del año en 25% lo que equivalía a tres millones de venezolanos desempleados (EUD, 02-05-2003, Raquel Barreiro, Economía). Se conocía que las cifras de la buhonería en la capital se habían triplicado desde el año 1998 hasta el 2003, así en Caracas se registraban más de cincuenta mil buhoneros y proporciones similares correspondían al interior del país (EUD, 06-05-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

Fedecámaras proyectaba una tasa de desempleo al cierre del año cercana al 30%, debido a causas como el retraso en la entrega de divisas por parte de Cadivi, así como por el ajuste del salario mínimo realizado por el Gobierno (EUD, 07-05-2003, Economía).

El desempleo en el área gerencial superaba el 20% y particularmente los más afectados eran los gerentes medios, según sostenía el presidente de la Asociación Venezolana de Gerentes, José Luis Falcón. Así mismo, el jefe del Departamento de Estudios Laborales de la Universidad Católica Andrés Bello destacaba la posibilidad de bajas en la demanda de personal en gerencia media, debido a causas como el cierre de empresas y la situación de Pdvsa (EUD, 07-05-2003, Marianna Párraga, Economía). Para el director de Korn Ferry, Raúl Maestres, la demanda del talento gerencial había caído en Venezuela en un 50%, situación que asociaba a la contracción económica que se registraba en el país (EUD, 27-05-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

Albis Muñoz señalaba que en el primer trimestre del año habían quedado cesantes trescientos mil empleados, lo que significaba una contracción del 32,6% de la fuerza laboral en los últimos cuatro años (EUD, 08-05-2003, Mariela León, Economía). Las cifras arrojaban un 22,6% de desempleo al cierre del mes de mayo. Mientras que el sector informal se calculaba en 54% de la población económicamente activa, según señalaba el director de Datanálisis, Luis Vicente León (EUD, 14-05-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía), por lo que el 38,7% de la población estimaba que el principal problema que enfrentaban era el desempleo (EUD, 27-05-2003, Economía).

Según las cifras que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo para el mes de marzo se ubicaba en 19,8%, es decir 642.879 personas más que para el mismo período del año 2002, cuya tasa de desempleo correspondía al 15,1% (EUD, 30-05-2003, Raquel Barreiro, Economía).

¿Nadie es profeta en su tierra?

El dirigente de Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, denunciaba la contratación de médicos de nacionalidad cubana, a pesar de registrarse cerca de nueve mil médicos venezolanos desempleados o “matando tigres” (EUD, 06-05-2003, Nacional y Política).

Eloy Silva Segovia y Fernando Galíndez, directivos de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, expresaban su malestar por la situación de los profesionales de dicha rama, pues aunque 75% de éstos se encontraban en situación de desempleo, “cada vez más cubanos vienen a puestos que podrían ocupar los venezolanos” (EUD, 25-05-2003, Giulana Chiappe, Economía).

Las empresas aeronáuticas en crisis

La empresa aeronáutica venezolana, Aeropostal, anunciaba la desincorporación de 350 empleados, debido a una caída del 42% en las operaciones. La empresa atribuía dicha situación a causas como la devaluación, la inflación y la caída en la demanda de los pasajes (EUD, 09-05-2003, Economía).

Lufthansa lograba un acuerdo con sus empleados para reducir la jornada laboral, sin que ello significara compensaciones salariales extraordinarias. Todo ello con el compromiso de la empresa de no despedir a sus trabajadores por razones económicas (EUD, 12-05-2003, Economía).

Proponían reformas a la LOT

El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que presentaban los miembros del oficialismo de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea, planteaba entre otras cosas, la reducción de la jornada nocturna de 40 horas semanales a 35 horas semanales. Los patronos no podrían obligar a ningún empleado a trabajar horas extras, pues se requería, de ser necesario, un permiso del inspector del Trabajo y la jornada incluyendo las horas extraordinarias no podría exceder de 10 horas. Las sanciones que se establecían oscilaban entre las 150 y las 1.000 unidades tributarias (EUD, 10-05-2003, Mayela Armas H., Economía). Se conocía que otras de las propuestas que haría el oficialismo sería la inclusión de una disposición que permitiera la cogestión (empleados-empleadores) de las empresas con fines de lucro que no hubieran cancelado los pasivos laborales, respetando la normativa legal vigente (EUD, 22-05-2003, Economía).

Déficit presupuestario en las FAN

A pesar de admitir una reducción del 30% en el presupuesto de las Fuerzas Armadas Nacionales, el ministro de la Defensa, José Luis Prieto, negaba que esta situación significaría la suspensión de un mes de salario y dos de cesta tickets de los trabajadores de la institución castrense. Sin embargo, Prieto recomendaba al presidente de la República reducir los gastos de personal para apalea el déficit presupuestario que presentaba la cartera castrense (EUD, 16-05-2003, Alejandra M. Hernández F., Nacional y Política).

Los centros comerciales también se veían afectados

El presidente de la Cámara de Centros Comerciales, Arnold Moreno, reportaba una reducción, en los últimos cinco meses, del 20% en la nómina del sector. Atribuía dicha situación a causas como la inflación, la devaluación, la recesión económica y la falta de divisas (EUD, 17-05-2003, Economía).

La política llegaba a la Unellez

Según el asesor legal de la Asociación de Profesores de la Unellez, Juan Pedro Manrique, se habían desincorporado, por razones políticas, diecinueve profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. En su opinión, la mayoría de estos profesores eran académicos sin filiaciones políticas, “autocríticos” y “no sumisos”. Sin embargo, el rector, Julio Carrillo, afirmaba que se trataba de decisiones relacionadas con el exceso de personal en la plantilla de la Unellez (EUD, 28-05-2003, Oscar Medina, Economía).

LA SEGURIDAD SOCIAL NO TENÍA RUMBO CIERTO

Justo a tiempo

Cuando se hacía inminente la protesta de calle de los trabajadores del Hospital Vargas, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales les cancelaba deudas correspondientes a las dos quincenas del mes de abril, aunque dejaban pendientes algunas deudas correspondientes a fideicomisos y salarios (UN, 02-05-2003).

Incrementaba las cotizaciones al IVSS

Con el incremento al salario mínimo que aplicaba a partir del primero de julio de 2003 se incrementaban las cotizaciones del seguro social. El ajuste del salario mínimo a 209.088 bolívares modificaría la cotización máxima a 1.045.440 y en octubre sería de 1.235.520 para un salario mínimo de 247.104 bolívares (EUD, 03-05-2003, Mayela Armas H., Economía).

Supuestas irregularidades en el IVSS

Eran intervenidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Policiales y Criminalísticas (Cicpc), las direcciones de tesorería, compras y administración del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), debido a investigaciones por supuestas irregularidades. Así mismo se conocía de la destitución de sus respectivos encargados, así como de la renuncia del director de administración de la institución (EUD, 24-05-2003, Economía). Entre tanto, se conocían nuevas irregularidades en el Departamento de Jubilaciones, Pensiones y Sobrevivientes. Se trataba del pago que se venía efectuando a personas inexistentes, a través de la falsificación de cédulas (EUD, 27-05-2003, Marisol Decarli R., Economía).

Se tomaban prestados los fondos de pensiones y jubilaciones

El Ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, admitía que habían sido utilizados los fondos de pensiones y jubilaciones para pagar deudas salariales. Mientras, el abogado Tulio Álvarez denunciaba que los fondos de pensiones estaban siendo utilizados por el Gobierno para comprar sus propios bonos de la deuda (EUD, 24-05-2003, Economía).

En mora con el IVSS

Desde el mes de enero hasta el mes de mayo de 2003, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales sólo había recibido, del Ejecutivo, 18 millardos de los 200 que le correspondían por concepto de presupuesto, lo que se traducía en 9% del desembolso correspondiente (EUD, 28-05-2003, Economía).

Según el presidente del IVSS, Edgar González, la deuda que tenía el sector privado correspondía a 1,1 billón de bolívares (55%), mientras que el Gobierno y las regiones adeudaban 900 millardos (45%) de bolívares, aunque éste admitía que, según los análisis realizados, esta última cifra se había ajustado a 750 millardos, debido a que se percataron de acreencias del Gobierno Central desde el año 1976 (EUD, 29-05-2003, Mayela Armas H., Economía). También se conocía que los ministerios que se habían adscrito a otros mantenían vigentes sus acreencias (EUD, 30-05-2003, Mayela Armas H., Economía).

Según el viceministro de Finanzas, Eudomar Tovar, sería a partir de julio cuando se comenzarían a realizar las transferencias de recursos correspondientes a las deudas del Gobierno Central con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) (EUD, 31-05-2003, Mayela Armas H., Economía)

¿Y la reforma de la seguridad social?

La reforma de la seguridad social tenía dificultades de aplicación debido al costo y al retraso en el diseño de las leyes de los regímenes prestacionales. El presupuesto no contemplaba erogaciones para dicha reforma, por lo que el Ejecutivo esperaba el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Asamblea Nacional seguía en mora con las leyes correspondientes (EUD, 28-05-2003, Mayela Armas H., Economía). El costo total del régimen prestacional de seguridad social era 10,9% del Producto Interno Bruto (PIB), según el modelo del Ministerio de Finanzas, mientras que para la comisión presidencial el impacto del mismo sobre el PIB era de 8,5% (EUD, 28-05-2003, Economía). El costo del Seguro Social para ese momento era de 2,13% del PIB, según señalaba la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional (EUD, 29-05-2003, Economía).

Según la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional el impacto de la reforma de la seguridad social sobre el fisco generaría un déficit del 4% del PIB y si se contabilizaban los pagos de amortización de la deuda podría llegarse al 8% (EUD, 29-05-2003, Economía).

EL ASPECTO SALARIAL TAMBIÉN ERA OBJETO DE DISCUSIÓN

El Gobierno decretaba que a partir del 1° de julio de 2003 entraría en vigencia un aumento de 30% en el salario mínimo. El mismo se haría de manera escalonada, aplicaría tanto para el sector público como para el privado y beneficiaría a los pensionados del Seguro Social (EUD, 01-05-2003, Economía). Inmediatamente se escuchaban reacciones del sector empresarial, tales como la de Lope Mendoza, representante de Conindustria, quien sostenía que el aumento contribuía a destruir el aparato productivo del país y castigaba principalmente a la pequeña y mediana empresa (UN, 02-05-2003, Gabriela Iribarren).

Se conocía que el aumento de 30% decretado por el Gobierno Nacional no sería retroactivo, tendría un costo de 800 millardos de bolívares y sus fuentes de financiamiento serían el Impuesto al Débito Bancario (IDB) y las utilidades del Banco Central de Venezuela (BCV) (EUD, 02-05-2003, Mayela Armas H., Economía).

El aumento salarial incluía a todos los trabajadores urbanos que tuvieran un empleo formal y percibieran salario mínimo, tales como conserjes, trabajadores aprendices y todos aquellos que laboraran en empresas con menos de 20 empleados (EUD, 03-05-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

La Asamblea Nacional ratificaba el aumento del salario mínimo, sin realizar la discusión en plenaria como lo estipulaba la Ley Orgánica del Trabajo y sin contemplar la propuesta de retroactividad (EUD, 22-05-2003, Economía).

Las regiones tenían retraso en los pagos

Se conocía que el incremento de 20% en el salario mínimo decretado en el año 2002 sólo había podido ser cancelado por el Gobierno Central, pues las regiones comenzaban a cancelarlo en enero de 2003 con recursos propios, pues según el presidente de la Asociación de Alcaldes, Saady Bijani, el Ejecutivo Nacional “no había cumplido sus obligaciones” (EUD, 06-05-2003, Mayela Armas H., Economía).

Decisiones...

Los cesta ticket pasarían a formar parte del salario e incidirían en el cálculo de los beneficios en aquellas empresas que otorgaban éste beneficio antes del año 1998. Así lo disponía la decisión de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (EUD, 23-05-2003, Economía). Para Albis Muñoz dicha decisión desvirtuaba el propósito de los cesta ticket, pues en su opinión éstos se creaban para “aliviar la carga laboral del empresariado” y para incrementar el ingreso de los empleados, sin que ello incidiera sobre los demás beneficios del trabajador (EUD, 24-05-2003, Mariela León, Economía).

LA PROTESTA YA ERA “EXCESIVAMENTE NORMAL”

1° de Mayo

La marcha convocada por la CTV, con motivo de la celebración del día del trabajador, terminaba con un saldo de una persona fallecida y seis lesionados, debido a los enfrentamientos suscitados entre oficialistas y opositores al gobierno en las inmediaciones de la Plaza O’Leary (UN, 02-05-2003, Héctor Matheus A., El País). Los lesionados tenían heridas de bala, perdigones y contusiones, según los testimonios que ofrecieron algunos de los agraviados, mientras el trabajador fallecido habría recibido dos impactos de bala (EUD, 02-05-2003, Nacional y Política). El 3 de mayo, se conocía que la CTV actuaría como acusador privado en el caso del trabajador fallecido en los sucesos de la Plaza O’Leary, a su vez solicitarían las investigaciones de la Corte Interamericana de DDHH y realizarían acciones de calle (EUD, 03-05-2003, Eugenio Martínez, Nacional y Política).

Se preocupaban los periodistas

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) enviaba una misiva al presidente Chávez en la que expresaba su preocupación por el clima de violencia y las agresiones contra periodistas y trabajadores de la comunicación social (EUD, 06-05-2003, Eugenio Martínez, Nacional y Política).

Los médicos también protestaban

La Federación Médica Venezolana (FMV), amenazaba con paralizar sus actividades debido a la carencia de insumos hospitalarios y a los incumplimientos de compromisos contractuales, cuya responsabilidad recaía sobre los ministerios de Finanzas y Salud (EUD, 11-05-2003, Nacional y Política).

Conflictos laborales y visos políticos

Los empleados de la textilera Fénix mantenían tomada la empresa desde hacía ya nueve meses, exigían reivindicaciones laborales, además de otros pagos. Pero, a pesar de haber recibido el ofrecimiento del pago de las prestaciones como salida al conflicto, los trabajadores perseguían el “control obrero” de la empresa y exigían al presidente Hugo Chávez que les facilitara la materia prima para iniciar la producción por su cuenta (EUD, 17-05-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía). Era lo que consideraban la “justicia revolucionaria ante el abuso patronal”, mientras el presidente de la empresa, David Blanck, aseguraba, debido a los intrínquilos de las acciones obreras, que existían intereses en despojarlo de la empresa (EUD, 19-05-2003, Oscar Medina, Economía).

Los maestros buscaban ser escuchados

El presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, Edgar Bazán, anunciaba próximas acciones de calle por incumplimientos del contrato colectivo y la falta de pagos por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD). Por su

parte, Falime Hernández, presidente de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined), se declaraba en “emergencia” debido a que los trabajadores tenían tres años sin recibir aumentos salariales y sin cobrar los cesta tickets (EUD, 24-05-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Los maestros zulianos realizaban una asamblea para expresar su descontento por el retraso en las discusiones de un nuevo contrato colectivo, así como por las acreencias que con el sector mantenían los gobiernos regional y nacional (EUD, 28-05-2003, Mónica Castro, Nacional y Política).

Los docentes realizaban asambleas para informar y escuchar las opiniones de sus colegas sobre el estatus de la situación contractual con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y así mismo anunciaban acciones de calle como ‘la toma de las inspectorías del Trabajo, zonas educativas y gobernaciones de estados’ (EUD, 29-05-2003, Nacional y Política).

PDVSA, NUEVAMENTE CENTRO DE ATENCIÓN

La reestructuración de la empresa aún estaba por verse

A pesar de que históricamente existían planes de reestructuración en la estatal petrolera, aún no se cristalizaban. Se desincorporaron 18 mil 400 trabajadores de la organización, sin embargo no se había definido un norte claro, no se contaba con una misión y como consecuencia no se habían definido los nuevos objetivos. A pesar de que los cambios suprimían funciones, los procesos no se habían redefinido y por ende tampoco las tareas. (EUD, 12-05-2003, Patricia Ventura Nicolás).

Para el ex gerente de Planificación de Petróleos de Venezuela, Luis Pacheco, la reestructuración de Pdvsa volvía al viejo esquema de división oriental y occidental, lo cual no significaba un cambio significativo que condujera a una organización más eficiente. Para éste, las organizaciones debían suprimir, reemplazar o modificar procesos en la medida en que el cambio contribuyese con mayores niveles de eficiencia y eso no había sucedido hasta ahora en Pdvsa (EUD, 12-05-2003, Nacional y Política).

Desincorporaciones claves

Se conocía que de los 18 mil 400 despedidos de Petróleos de Venezuela, la mayoría cumplía funciones clave dentro de la empresa y no de apoyo como podría suponerse. Así, en las actividades de comercio y suministro, los despedidos llegaban al 85%, en exploración la cifra se elevaba a 79% y en planificación y control de operaciones al 75% (EUD, 12-05-2003, Nacional y Política).

“No deben volver”, con esas palabras el Presidente, Hugo Chávez, advertía al Ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez y al presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez, que no debían ceder ni mostrar debilidades con los despedidos de la estatal petrolera. Sostenía que por ninguna razón debían admitirse a estos

trabajadores nuevamente en Pdvsa (EUD, 14-05-2003, Alfredo Rojas, Nacional y Política).

Trabajadores petroleros consideraban como fraude la petición de nulidad del artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos, realizada por el presidente de Petróleos de Venezuela, Alí Rodríguez Araque, pues en su opinión, con ello se buscaba legalizar los despidos de Pdvsa, razón por la cual alertaban a la opinión pública (EUD, 28-05-2003, Economía).

Gente del Petróleo

El magistrado Jesús Eduardo Cabrera aseguraba que no había incurrido en adelanto de opinión en el caso de la Gente del Petróleo y por tal motivo no se inhibiría de actuar en dicho caso (EUD, 14-05-2003, Nacional y Política).

La Asociación Civil Gente del Petróleo nacía con la idea de ofrecer servicios profesionales relacionados con la actividad petrolera, tanto al sector público como al privado. Entre éstos servicios se encontraban la comercialización, refinación, informática, etc. A su vez consideraban un plan para ayudar a aquellas familias petroleras que se encontraban en condiciones “críticas” (EUD, 30-05-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

PDV-Marina recolectaba alimentos

Marinos petroleros e integrantes de Primero Justicia realizaban una jornada de recolección de alimentos para las familias de los trabajadores despedidos de PDV-Marina, así como para ancianos y albergues juveniles (EUD, 18-05-2003, Economía).

DETERIORO ECONÓMICO

Alarma

Ya oficializadas las cifras, la caída que se registraba en el PIB, según los datos del Banco Central de Venezuela, correspondía al 29%, mientras que la industria manufacturera registraba una caída del 36,7% y el desempleo aumentaba al 15% en comparación con el año anterior. Se trataba de cifras que alarmaban y que según Maza Zavala, miembro del directorio del BCV, tenían su origen en los conflictos políticos, en los paros de diciembre y en el control de cambio (EUD, 24-05-2003, Víctor Salmerón, Economía).

La caída en las ventas del sector industrial se debía a la caída, a su vez, del poder adquisitivo, lo que significaba una caída en el consumo final del 12,5% en el primer trimestre del año 2003 (EUD, 25-05-2003, Raquel Barreiro C., Economía).

El futuro en números

Según una encuesta realizada por Datanálisis entre el 26 de abril y el 3 de mayo de 2003 se conocía que el 78,8% de los encuestados opinaba que la situación de ese

momento era peor la de los pasados seis meses, el 17% opinaba que la situación económica sería igual para los siguientes seis meses y el 4% señalaba que mejoraría. Los responsables de la situación económica eran el Gobierno con 44,6%, el presidente Hugo Chávez con 31,3%, la oposición con 22,9%, el paro con 15,7%, la empresa privada con 4,4% , los medios de comunicación social con 0,9%, el control de cambio con 0,9%, la Gente del Petróleo con 0,7%, los gobiernos anteriores con 0,4%, Gobierno y oposición con 0,4%, Fedecámaras con 0,4%, los militares golpistas con 0,3%, Carlos Ortega con 0,3% y otros con 1,2% (EUD, 17-05-2003, Mariela León, Economía).

CONTROL DE CAMBIO Y VICEVERSA

Más requisitos para el trigo

Las empresas importadoras de trigo debían presentar la certificación del acreedor con quien se tenía la deuda, la certificación del banco emisor de la carta de crédito y la copia de la factura definitiva, para poder pasar a la fase de evaluación y otorgamiento de divisas por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) (EUD, 08-05-2003, Economía). Entre tanto, paralizaban la producción cinco empresas productoras de pasta, debido a la falta de materia prima, pues Monaca, que era el único molino que abastecía a estas empresas, aún no había recibido los dólares necesarios para pagar a los proveedores internacionales de trigo y atender las necesidades del sector (EUD, 07-05-2003, Economía).

Desabastecimiento

Para el ex presidente de la Cámara Venezolana del Alimento, Eduardo Gómez Sigala, los problemas de desabastecimiento del sector industrial, que en su opinión había originado el Gobierno, no podrían ser resueltos en “el marco de la actual administración”, pues se requerían cambios radicales en la política industrial del país (EUD, 08-05-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

Empresarios privados castigados

Según una encuesta realizada por el Diálogo Inter-Americano, el gobierno de Chávez, causaba a través de Cadivi, la contracción económica por razones políticas, con lo que habían logrado aumentar las reservas internacionales a \$15,7 millardos (EUD, 09-05-2003, Everett Bauman, Economía).

Para algunos empresarios los retrasos en la entrega de divisas se debían a decisiones políticas, mientras que para otros se trataba de las ineficiencias de Cadivi. Para el análisis quedaban las cifras que ofrecía el presidente de Cadivi, Edgar Hernández Behrens, quien había admitido que se habían autorizado 220 solicitudes de las 2.469 recibidas para la fecha (EUD, 19-05-2003, Economía), es decir que sólo se habían autorizado \$205 millones, equivalentes al 1% de la disponibilidad de

divisas que había autorizado el BCV por \$1.200 millones (EUD, 20-05-2003, Mayela Armas H., Economía).

LOS SINDICALISTAS NO ABANDONABAN LA DIATRIBA POLÍTICA

Gobierno y UNT

La CTV denunciaba que el Gobierno Nacional pretendía desconocer los contratos colectivos del sector público, a través de la creación de “sindicatos paralelos” y plegados al oficialismo, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) (EUD, 14-05-2003, Eugenio Martínez, Nacional y Política).

La UNT no tenía representatividad ante la OIT, según explicaba el representante de la OIT en Venezuela, Jesús Urbieto, debido a que “uno de los requisitos que establece la Constitución venezolana, en su artículo 293, es que las directivas de las organizaciones sindicales tienen que designarse a través de votaciones reconocidas por el Consejo Nacional Electoral” y la Unión Nacional de Trabajadores no había realizado tales elecciones. Por tanto, la UNT no tenía personalidad jurídica, razón por la cual un representante de la misma sería rechazado por la comisión de verificación de la OIT (EUD, 23-05-2003, Nacional y Política).

Estaban en la mira las contrataciones colectivas del sector público

El secretario general de la CTV, Manuel Cova, anunciaba la creación de la “comisión intersindical”, cuyo objetivo principal sería la reactivación de las discusiones y la búsqueda de soluciones de las 86 convenciones colectivas del sector público que se encontraban paralizadas (EUD, 20-05-2003, Nacional y Política).

Emergencia Sindical

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) se declaraba en emergencia, debido a la paralización de las discusiones de 500 contratos colectivos del sector público. La estrategia de la CTV pasaba por evitar negociaciones o acciones aisladas de los sindicatos, actuarían como un bloque común. Sin embargo, el Colegio de Profesores de Venezuela anunciaba un paro nacional de 24 horas para exigir, entre otras cosas, la discusión y firma de la convención colectiva de trabajo (EUD, 23-05-2003, Eugenio Martínez, Nacional y Política).

Junio de 2003

Los problemas asociados a Pdvsa no cesaban y en medio de las deliberaciones entre “los anteriores” y “los nuevos” todavía debían analizarse las consecuencias que los “cambios” generarían en la industria petrolera venezolana. En cuanto a la problemática sindical, no solo se libraban luchas reivindicativas en diversos sectores, sino que se debatía también qué fuerza era verdaderamente representativa de la mayoría de trabajadores; contradicciones entre los dirigentes sindicales afines al

oficialismo y los de oposición eran visibles, inclusive en el contexto internacional. El sector productivo sufría la asfixia de un control de cambio, medida que no había contribuido con detener la inflación, pero sí con la escasez, que eran sólo algunos de los problemas de una economía que se encontraba en crisis. Esta realidad era parte de un incesable enfrentamiento político; la lucha política era la prioridad, en medio del largo camino que debía recorrerse para la realización de un referéndum revocatorio planteado por la oposición. El país no avanzaba...

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE LA EMPRESA PETROLERA?

Costos operativos disminuyen

Mientras algunos sostenían que la empresa petrolera jamás volvería a ser la misma y anunciaban un trágico final para la misma, otros, como el propio Rafael Ramírez, Ministro de Energía y Minas, explicaba que “el recorte en bonos, salarios y otros, generaba un ahorro de 400 millardos de bolívares, lo que constituía el presupuesto entero del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, por ejemplo”. Según él, “la estabilidad de la producción preocupaba mucho a los clientes y por eso se habían despedido a más de 17.000 profesionales de Pdvs”. (EU, 1-6-2003. Eduardo Camel Anderson, 1-15).

La batalla continúa

Los trabajadores petroleros que habían sido despedidos trataban de dar la batalla por diferentes flancos. Algunas de sus acciones eran de tipo jurídico. Sin embargo, se habían tropezado con una inmensa pared, pues ante el recurso que había interpuesto Unapetrol ante el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Social había decidido que el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos “no prescribía inamovilidad para los trabajadores petroleros”. Se llegaba a esta conclusión en ponencia del magistrado Omar Mora, después de aseverar que el legislador “omitió referencias denotativas de la estabilidad absoluta”, razón por la cual estimaron pertinente “la aplicación a los trabajadores petroleros del régimen general de estabilidad previsto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), tendencia que faculta al empleador ante el despido sin causa suplir su obligación de reenganche con indemnización”. (EUD, 1-6-2003, Economía).

Sobre esta decisión fueron consultados diversos juristas. Uno de ellos era el magistrado Alfonso Valbuena, también profesor de la UCV, quien explicó que “la propia Constitución acoge el sistema de la estabilidad relativa”, criterio que le permitió aseverar que “no existe en Venezuela la estabilidad absoluta para ningún trabajador, ni siquiera para los petroleros”. (EUD, 3-6-2003, Economía).

En todo caso, parecía que con los despidos no era suficiente, pues se denunciaba el diseño de políticas de discriminación hacia los ex trabajadores, que incluían la elaboración y envío de circulares a empresas filiales y contratistas para que no se

contrataran a los trabajadores que habían sido despedidos e incluso a sus familiares. (EUD, 3-6-2003, Nacional y Política). La Sociedad de Geofísicos de Venezuela advertía: “es ilegal dejar de contratar a petroleros por razones políticas”. (EUD, 15-6-2003, Economía).

En medio de esto, lo más preocupante era el grupo de trabajadores que se mantenían en una especie de “limbo laboral”, pues no habían sido despedidos pero tampoco se les pagaban sueldos. Unos cinco mil trabajadores se encontraban en esta situación, simplemente esperando a que se formalizara su desincorporación. (EUD, 22-6-2003, Patricia Ventura Nicolás).

La lucha también tenía una cara política. Según Juan Fernández, ex directivo de Pdvsa, la “Gente del Petróleo” lucharía en pro de la realización del referendo revocatorio. (EU, 4-6-2003, 1-16). La gente del petróleo había pasado de ser una asociación a un grupo de opinión. Para darse cuenta bastaba con escuchar las palabras de Edgar Paredes, ex gerente de la petrolera: “este mismo año revocaremos al régimen totalitario, un nuevo gobierno sentará las bases sólidas del país y los petroleros regresaremos a Pdvsa para reconstruirla”. (UN, 10-6-2003, Carolina Hidalgo, Pág. 10).

Ahora bien, los ex gerentes de la estatal petrolera se enfrentaban también a un dictámen de aprehensión efectuado por el Ministerio Público. Sin embargo, según Alberto Arteaga, abogado penalista, los derechos de estos petroleros habían sido vulnerados, especialmente los referidos a la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgados en libertad. Arteaga esperaba que la Sala Constitucional del TSJ pusiera las cosas en orden, restableciendo los derechos de estos ex petroleros. (EUD, 9-6-2003, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).

La CTV presta apoyo

Manuel Cova, secretario general de la CTV, en compañía de Carlos Ortega y Jesús Urbieto, asistían a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde discutían como punto fundamental lo relacionado con el despido de casi 20 mil personas en Pdvsa. (UN, 5-6-2003, Jesús Durán Santamaría, Pág. 10).

Una decisión favorable

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dejaba sin efecto las procedencias administrativas del 9 de diciembre de 2002 y del 6 de enero de 2003, donde la Inspectoría del Trabajo determinaba que a los afiliados a Unapetrol se les había vencido el lapso de inamovilidad laboral de que gozaban por la creación del sindicato. Esta decisión resultó del recurso contencioso administrativo de nulidad, con pretensión de amparo cautelar, que introdujeron los representantes de la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus derivados (Unapetrol), el 3 de junio. De la decisión se interpretaba que la Corte Primera reconocía la existencia de Unapetrol y que sus afiliados contaban con inamovilidad laboral, pero no planteaba el reenganche de los trabajadores petroleros afiliados al sindicato. (EUD, 13-6-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía). La

nueva directiva de Pdvsa aseguraba que la sentencia no implicaba el reenganche y era tajante al afirmar: “no aceptaremos que regresen”. (EUD, 14-6-2003, Economía). Por supuesto, Pdvsa analizaría las acciones legales necesarias contra el pronunciamiento de la Corte Primera. (EUD, 17-6-2003, Economía). Días más tarde, como se esperaba, el Ministerio del Trabajo recusaba por “error inexcusable” a los magistrados de la Corte que habían decidido sobre el caso de Unapetrol. (EUD, 21-6-2003, Economía).

Mientras se discutían estos aspectos, también comenzaba a producirse el desalojo de los ex trabajadores que habitaban en las residencias de la industria. Este era también un asunto complejo, pero en medio de las deliberaciones se producía una decisión de la Sala 1 del Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes del Estado Monagas a favor de los hijos de los trabajadores petroleros que habitaban en los campos de la zona. Aún cuando esta decisión no sentaba jurisprudencia en el país, era un precedente importante que podía ser utilizado en el resto de las áreas residenciales petroleras. (EUD, 18-6-2003, Patricia Ventura Nicolás, Economía).

¿Pdvsa mejora o empeora?

Según Juan Fernández, si Pdvsa era antes considerada como una “caja negra” por el presidente Hugo Chávez, ahora era un “águila negra”, pues era menor la información disponible sobre la corporación y mayor la incertidumbre sobre sus números. Según Fernández, “esta nueva Pdvsa ni siquiera había podido medir a cuánto ascendía el aporte fiscal de 2002 y mucho menos calcular el impuesto sobre la renta del año en curso”. (EUD, 7-6-2003, Eduardo Camel Anderson, Economía).

También Intesa en problemas

Luego de que la empresa Informática, Negocios y Tecnología S.A. (Intesa) fuera acusada de participar en el sabotaje en la industria petrolera durante el paro, los abogados Orestes Parilli y Auslar López habían solicitado ante el Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar contra la empresa. Como resultado, el TSJ decidió ordenar a Intesa “la entrega de los equipos informáticos que correspondían a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), así como los programas en los que existiera información sobre la misma”. También le prohibió la divulgación a terceros de “información sobre la industria petrolera, que conociera con motivo de la prestación de sus servicios de informática”. (EUD, 7-6-2003, Irma Álvarez y Mariana Parraga, Economía).

Pelea revolucionaria

Un numeroso grupo de simpatizantes del gobierno se trasladaba el 9 de junio a la sede de Pdvsa La Campiña para exigir les fueran asignados puestos de trabajo en la petrolera. Ahora la “gata se había montado en la batea” porque las personas alegaban que le estaban tomando la palabra al presidente Chávez, quien había afirmado “que Pdvsa había sido abierta al pueblo”. (EUD, 10-6-2003, Economía).

PROBLEMÁTICA SINDICAL: RECLAMOS EN DIVERSOS SECTORES

Empleados de estaciones esperan reivindicaciones

Mientras los dueños de las estaciones de servicio del país, agrupados en Fenegas, pedían una ayuda financiera al Ministerio de Energía y Minas, los empleados de las bombas esperaban por el pago de los sueldos que fueron suspendidos durante el paro, así como de las utilidades que dejaron de recibir algunos trabajadores en el año 2002. (EUD, 2-6-2003, Mariana Párraga, Economía).

Sector universitario nuevamente en pie de guerra

Ante el retardo en la solución de sus problemas, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) anunciaba la paralización de actividades, por 24 horas, para el día 4 de junio. (EUD, 3-6-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). A pesar de las amenazas, el Ministerio de Educación Superior se negaba a discutir la cancelación de las deudas. El paro se produjo como se había anunciado; la razón, la de siempre, la morosidad del Ejecutivo. (EUD, 4-6-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). La visión de los representantes del Ejecutivo era que el paro se había cumplido con baja participación. Navarro sostenía que las universidades trabajaron en 80%. (UN, 5-6-2003, Pág. 3).

La Asociación de Empleados de la Universidad Simón Bolívar (Atausibo) también había decidido iniciar los preparativos para un posible conflicto laboral, para exigir que se les cancelaran sus deudas laborales. (EUD, 7-6-2003, Nacional y Política).

Sin embargo, existían divergencias relacionadas al método de ejercer las manifestaciones contra el gobierno. Estas diferencias en el magisterio comenzaban a revelarse puesto que el Colegio de Profesores de Venezuela (CPV) convocaba sólo una marcha para el día 12 de junio, que terminaría con lo que ellos llamaban “toma del Ministerio de Educación”, sin el respaldo de los otros seis gremios. (EUD, 11-6-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

El mismo día, en Valencia, también comenzaban las acciones de calle organizadas por los profesores universitarios, con miras a exigir una respuesta del Ejecutivo. (EUD, 11-6-2003, Nacional y Política).

Maestros en marcha

El 9 de junio, los miembros de las siete federaciones del magisterio saldrían a recorrer el país como parte de los preparativos para la nueva ofensiva contra el Ministerio de Educación. (EUD, 6-6-2003, Nacional y Política).

El 20 de junio los maestros marchaban nuevamente para exigir la firma del contrato. El punto de arranque era la plaza Morelos y el arribo, si no lo evitaban los “amigos de la revolución”, era la sede del Ministerio del Trabajo en El Silencio. (EUD, 19-6-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Con esta manifestación lograban que el Ministerio del Trabajo iniciara la discusión del contrato. Era un paso

importante para ir a la mesa de diálogo y evitar las confrontaciones. (EUD, 20-6-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Médicos en marcha

El 11 de junio, luego de una convocatoria efectuada por la Federación Médica, se llevó a cabo la llamada “Marcha por la Salud y la Vida”, en defensa de la salud y la vida del pueblo venezolano, en reclamo por la falta de dotación de los hospitales y por las deudas que el gobierno mantenía con los galenos. (UN, 10-6-2003, Miriam Morillo, Pág. 2).

El 25 de junio, la directiva de la Federación Médica Venezolana (FMV), encabezada por su presidente, Douglas León Natera, consignó ante la Inspectoría del Trabajo el proyecto de la séptima contratación colectiva. (EUD, 26-6-2003, Nacional y Política).

Elecciones en el Metro

El 12 de junio comenzaría la campaña electoral del sindicato del Metro de Caracas, donde participarían cinco planchas. El Consejo Nacional Electoral había concluido la depuración del registro de votantes que podrían participar en la elección de la junta directiva y el tribunal disciplinario de la Asociación de Trabajadores del Metro de Caracas (Asitrameca). (EUD, 5-6-2003, Eugenio Martínez, Ciudad).

Lo cierto es que en el metro se producían despidos y persecuciones asociadas a los procesos electorarios que se producirían. Froilán Barrios denunciaba una razzia sindical y acusaba al Ministro Diosdado Cabello de “aplicar una ofensiva con el objetivo de controlar y asignar totalmente al personal de la empresa y luego ocupar todos los puestos de trabajo por personal afecto al oficialismo”. (EUD, 7-6-2003, Gustavo Méndez, Nacional y Política).

Ante las rivalidades, los miembros de la plancha 121, aspirantes a ganar los comicios sindicales en el Metro, se presentaban como “un grupo pluralista, integrado por personas simpatizantes de todas las toldas políticas que tenían como denominador común trabajar para el rescate de Cametro como empresa orgullo del país, así como rescatar el objetivo último de la actividad gremial, como lo es la lucha por las reivindicaciones laborales de los trabajadores”. (EUD, 15-6-2003, María Yolanda García, Ciudad).

Llegada la fecha de las elecciones, el 20 de junio, la Comisión Sindical y Gremial del Consejo Nacional Electoral decidía suspender las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Anónima Metro de Caracas (Sitrameca), dadas las continuas faltas de la comisión electoral de Sitrameca. La decisión del CNE estaba sustentada en las atribuciones legales que le confería el Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical. (EUD, 20-6-2003, Eugenio Martínez, Ciudad). A pesar de esta decisión, la comisión electoral decidió instalar, desde las seis de la mañana, 16 centros de votación en las diferentes dependencias de la empresa. Esto generó cierta confusión entre los trabajadores, de modo que el proceso electoral transcurrió con lentitud y en medio de algunos conatos de

conflictos. Francisco Torrealba, presidente de Sitrameca, restó importancia a la decisión del CNE y afirmó que “no permitirían que ningún poder del Estado suspendiera un derecho de 2.780 trabajadores”. (EUD, 21-6-2003, Migdalis Cañizales, Ciudad).

De todas formas, ante los altos índices de abstención, se planteaba la posibilidad de que las elecciones fueran declaradas nulas. (EUD, 22-6-2003, Ciudad). La solución a esta problemática estaría en manos de Tribunal Supremo de Justicia. (EUD, 26-6-2003, Migdalis Cañizales V., Ciudad).

A paro empleados de Inparques

Los trabajadores del Instituto Nacional de Parques (Inparques) también realizarían paros escalonados a partir del día 10 de junio, como consecuencia de la negativa de las autoridades del organismo a ofrecer soluciones concretas a un pliego de carácter laboral que habían introducido hacía siete meses. (EUD, 10-6-2003, Ciudad).

Los transportistas amenazaban con acciones de protesta

Los conductores de líneas urbanas y suburbanas del área metropolitana exigían el aumento de tarifas y amenazaban con acciones de protesta. Los motores estaban calientes... (EUD, 19-6-2003, Migdalis Cañizales V., Ciudad).

América Latina lidera atentados a sindicalistas

Entre las conclusiones del informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), que representa a 225 organizaciones afiliadas de 148 países y territorios, el cual fue presentado en Ginebra con motivo de la Conferencia Internacional del Trabajo, se explicaba que América Latina y el Caribe era la región más peligrosa para los sindicalistas, pues nada menos que 206 habían sido asesinados en el año 2002, de un total de 213 en todo el mundo. Adicionalmente, centenares de sindicalistas fueron objeto de amenazas de muerte, palizas o intimidación, mientras que más de 10.000 fueron despedidos por conflictos en lugares de trabajo. (EUD, 10-6-2003, Economía).

En medio de la difusión de las conclusiones del informe, Alfredo Ramos denunciaba la detención de dos representantes sindicales en el Estado Táchira, el presidente de Fetramagisterio y un miembro de la directiva del Magisterio, quienes se encontraban entre las 120 personas que estaban siendo procesadas en el Táchira por los sucesos del 11 de abril. (EUD, 17-6-2003, Patricia Ventura Nicolás, Nacional y Política).

¿Es posible que existan formas tan diferentes de percibir la realidad?

La delegación tripartita nacional llevaba a cabo discusiones en el umbral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La información derivada de este proceso llegaba al país demarcada por el componente político de la bipolaridad. Los puntos de vista de representantes sindicales y empresariales, de oposición y

gobierno, eran realmente contradictorios. Todavía se esperaban las conclusiones reales. (EUD, 11-6-2003, Mariela León, Economía). Ante esta 91 Conferencia de la OIT, la CTV había quedado desplazada por la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) como delegado del movimiento sindical; sin embargo, Fedecámaras calificaba la jornada como positiva, dado que la OIT había exigido “detener las acciones del gobierno en contra de representantes de los trabajadores y empresarios venezolanos”. (EUD, 13-6-2003, Mariela León, Economía).

Según Froilán Barrios, dirigente de la CTV, la situación estaba clara, pues “el Ejecutivo llevaba a cabo un plan macro de destrucción de la trama sindical del país, en aras de crear un movimiento obrero afecto a sus órdenes, enmarcado en el modelo comunista”. (EUD, 17-6-2003, Nacional y Política).

Por otro lado, la OIT esperaba que a la Conferencia Anual del 2004 asistiera una delegación verdaderamente representativa de todos los sectores sindicales del país, lo cual obligatoriamente pasaría por conversaciones entre el Gobierno y la CTV. Esta información estaba contenida en el informe de la Comisión de Verificación de Poderes de la OIT, leída ante los medios de comunicación venezolanos por Manuel Cova, secretario general de la CTV. (EUD, 19-6-2003, Economía).

SECTOR EMPRESARIAL ASFIXIADO

El control de cambio era probablemente el tema que más preocupaba a los empresarios venezolanos. Por supuesto, algunas empresas se perjudicaban más que otras con la medida, atendiendo a su naturaleza. Por ejemplo, las empresas dedicadas a los servicios de remesas estaban descapitalizadas por el control de cambio. (EU, 2-6-2003, 1-16).

Aún cuando se intentaron medidas legales en contra de la medida de “control cambiario”, todo parecía indicar que el presidente Hugo Chávez hablaba en serio cuando decía que “Cadivi llegó para quedarse”. (EU, 3-6-2003, Irma Álvarez, 1-14).

El problema no sólo estaba en la implantación de la medida sino en el desempeño del organismo que se encargaría de ello, la Comisión Nacional de Administración de Divisas. El proceso de entrega de dólares a los solicitantes que lo requirieran era muy lento. El propio BCV sugería agilizar la entrega de dólares y algunas empresas, como el caso de un grupo de empresas alemanas, amenazaban con cerrar sus puertas en el país si no obtenían los dólares necesarios para su funcionamiento. (EUD, 4-6-2003, Economía).

A pesar del control de cambio, la inflación parecía indetenible, bastaba con echarle un ojo al mercado paralelo. El incremento de los precios asfixiaba a los consumidores y a los mismos productores, algunos de los cuales también se enfrentaban a un control de precios. Este era el caso de las empresas avícolas, donde el incremento de precios no les permitía cubrir los costos de producción, distribución y comercialización. (EU, 4-6-2003, Raquel Barreiro C., 1-12). La medida restrictiva obligaba a desempolvar un indicador que hacía tiempo no era utilizado por el BCV,

el índice de escasez. Según los cálculos de Consecomerio se ubicaba en 25%. (EUD, 17-6-2003, Mariela León, Economía).

La crisis obligaba a las empresas a reducir su mano de obra; en el sector manufacturero se reportaba la pérdida de 90 mil empleos en el primer trimestre del año 2003. (EUD, 5-6-2003, Mariela León, Economía). El gobierno intentaba llevar adelante algunas medidas que contribuyeran con el sector industrial. Se planteaba un plan de desarrollo endógeno industrial que contemplaba diversos proyectos como Fábrica de Fábricas, Canasta de Electrodomésticos, Compras Gubernamentales, Industrias del Conocimiento, entre otros. (EUD, 9-6-2003, Raquel Barreiro C., Economía). Estos planes eran criticados por algunos, quienes denunciaban que el gobierno quería hacer de Venezuela un país comunista. (EUD, 25-6-2003, Raquel Barreiro C., Economía).

Algunos opinaban que el control cambiario tenía un matiz político y de alguna manera era utilizado para castigar al sector empresarial, pues aún cuando los indicadores macroeconómicos se estabilizaban, incluyendo el nivel de las reservas, la medida no se levantaba. En todo caso, muchos especialistas proponían la flexibilización de la medida. (UN, 5-6-2003, Pág. 12).

En el sector empresarial se vivían momentos similares al mundo sindical. Se aproximaba la fecha de reelección de los líderes de la cúpula empresarial y al mismo tiempo se discutía la asistencia a la 91 Conferencia de la OIT. Estaba en discusión la acreditación de los empresarios invitados por el gobierno a la cita, aún cuando Fedecámaras cuestionaba a las delegaciones de Fedeindustria, Confagan y Empresarios por Venezuela. (UN, 10-6-2003, Beatriz Caripa, Pág. 14). Hablando sobre las elecciones, en el caso de Conindustria era reelegido Lope Mendoza como presidente de la organización. (EUD, 13-6-2003, Economía).

En medio de toda esta polémica, los empresarios se habían convertido en protagonistas políticos y constantemente denunciaban los obstáculos que el gobierno ponía al referéndum revocatorio. (EUD, 18-6-2003, Nacional y Política).

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) planteó un reclamo formal contra el gobierno de Hugo Chávez en la Conferencia 91 de la OIT, “por realizar sistemáticamente acciones represivas y hostiles contra el empresariado venezolano y sus dirigentes, con el objetivo de intervenir, limitar y entorpecer el ejercicio de las libertades cívicas, sindicales y de asociación del sector empresarial”. (EUD, 18-6-2003, Mariela León, Economía).

ECONOMÍA EN CRISIS

A pesar de las medidas que el gobierno tomaba para tratar de mejorar la situación económica, parecía ocurrir totalmente lo contrario. Para darnos cuenta de ello basta con hacer un repaso a los diversos indicadores económicos:

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 55,4% de los venezolanos estaban en situación de pobreza, el peor nivel en cuatro años de gobierno del presidente Hugo Chávez. (EUD, 1-6-2003, Silene Ramírez, Economía).

La canasta alimentaria, según cifras del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), había aumentado en 8% y se ubicaba en 372.499. (EU, 1-6-2003, 1-18).

El boletín Reporte Social (primer semestre 1997-segundo semestre 2002) elaborado por el INE, señalaba que el Índice de Desarrollo Humano Nacional pasó de 0,78 puntos en 2001 a 0,69 puntos en 2002. (EUD, 3-6-2003, Raquel Barreiro C., Economía).

Para Maza Zavala, director del BCV, el país se encontraba en una “recenflación”. Para él, el comportamiento de la caída del PIB y la aceleración de la inflación se debían a una restricción en la oferta. El pronóstico era desalentador: “Habrá más recesión y más inflación. Ante esta situación la tasa de desocupación no disminuirá y la economía informal estará más ampliada”. (EUD, 3-6-2003, Mayela Armas H., Nacional y Política).

Según las mismas cifras ofrecidas por el INE, para el mes de abril de este año, la informalidad se ubicaba en 53,2% y el desempleo llegaba a 19,1%. (EUD, 10-6-2003, Raquel Barreiro C., Economía). Por su parte, Consultores 21 estimaba la tasa de desocupación en 24%, lo cual significaba que más de 2 millones de personas estaban fuera del mercado de trabajo. (EUD, 4-6-2003, Mayela Armas H., Economía).

UN CAMINO LARGO HACIA EL REVOCATORIO

La oposición afinaba sus estrategias para el revocatorio, alternativa como una salida a la crisis política y económica que vivía el país. (EU, 1-6-2003, Alejandra M. Hernández F., 1-6).

Sin embargo, el gobierno no enfrentaba la batalla de manera improvisada y además contaba con los recursos que le otorgaba el poder. En la Procuraduría General de la República se trabajaba en una ley para regular las manifestaciones, que tendría como objeto “evitar provocaciones”. Muchos criticaban la iniciativa basados “en el derecho a manifestar”. (EUD, 2-6-2003, Irma Álvarez, Nacional y Política). Aquellos que habían tomado la decisión de firmar no parecían tener cabida en el gobierno, por lo que las persecuciones eran parte de la estrategia. (EUD, 20-6-2003, Irma Álvarez, Nacional y Política).

El tema político parecía ponerse como prioridad, de modo que no se avanzaba en aquellos planos que verdaderamente procurarían la mejora de la economía.